

## FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE TESIS

➤ AUTOR

Apellidos: **Bayona Sarmiento**

Nombre: **Manuel**

➤ TITULO

**NUEVAS DINÁMICAS DE LA GUERRA EN EL SUR DE BOLÍVAR  
COLOMBIANO**

➤ CIUDAD: Bogotá D.C.

Año de elaboración: 2005

➤ NUMERO DE PÁGINAS: 107

➤ MATERIAL ANEXO

Entrevista: Conversación con Artemio Mejía

El circuito de la coca en el Sur de Bolívar

Mapa 1. Localización del Sur de Bolívar

Mapa 2. Conflicto 1997

Mapa 3. Conflicto 2001

Mapa 4. Conflicto 2005

➤ FACULTAD: Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales

➤ PROGRAMA: Maestría en Estudios Políticos

➤ TITULO OBTENIDO: Magíster en Estudios Políticos

➤ DESCRIPTORES: Conflicto armado; guerra; conflicto regional; Acción Colectiva; paramilitarismo; Magdalena Medio; Sur de Bolívar; San Pablo

## ➤ RESUMEN DEL CONTENIDO

La monografía pretende analizar la nueva dinámica de la guerra en el sur del departamento de Bolívar en los últimos diez años. Parte de una breve caracterización social y política del Magdalena Medio como región de colonización reciente cuya historia ha estado llena de contradicciones y violencias, como la mayor parte de las zonas de frontera en Colombia. Describe los cambios más significativos de la confrontación armada en los últimos años: expansión y rápida consolidación del proyecto paramilitar, repliegue táctico de la guerrilla y extensión de la economía de la coca a todos los niveles.

Construye un marco conceptual de referencia a partir de los siguientes elementos: conflicto y conflicto armado, conflicto armado violento, características de los conflictos armados internos, conflicto y construcción de región, móviles políticos y económicos de la guerra y el papel de los civiles en las guerras internas. El análisis del Magdalena Medio y el Sur de Bolívar se aborda desde una perspectiva histórica y sociológica, en este último campo se enfatiza en el papel activo y no neutral jugado por los actores civiles en sus distintos matices, dentro del curso del conflicto reciente; para ello se toma el estudio de caso de la acción colectiva más representativa ocurrida en ese territorio, la desarrollada en el municipio de San Pablo tras el asesinato de uno de los mayores comerciantes, en el primer semestre del año 2004.

El estudio brinda elementos para la comprensión de un fenómeno violento nacional en su expresión de especificidades regionales, a la vez que supera la visión explicativa tradicional desde los actores armados, al relevar la acción de los grupos organizados de la sociedad civil y la población en general, en el reordenamiento territorial, social, cultural y político producidos por décadas de guerra ininterrumpida

**NUEVAS DINÁMICAS DE LA GUERRA EN EL SUR DE BOLÍVAR COLOMBIANO**

**MANUEL BAYONA SARMIENTO**

**Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Estudios Políticos**

**Director de Monografía: Dr. Manuel Salamanca**

**FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA**

**BOGOTA, AGOSTO DE 2005**

**NOTA DE ACEPTACIÓN:**

---

---

---

---

---

**Firma del presidente del jurado**

---

**Bogotá, Agosto de 2005**

**Dedicatoria:**

*Para Maribell y Natalia que son la luz de mi vida*

## **AGRADECIMIENTOS**

**El autor de la presente monografía quiere agradecer:**

**A Manuel Salamanca por sus consejos y orientaciones teóricas y metodológicas sin las cuales tanto dato y tanta realidad de la zona se hubiera quedado en simple relato inconexo;**

**A Luis Felipe Vega, Director de la Maestría en Estudios Políticos por haber apoyado mis intereses y por haber comprendido y haber dado salida a las dificultades que se presentaron en el camino;**

**A Francisco José de Roux y por intermedio suyo a todo el equipo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, por haber permitido que la región me impregnara de su olor y de su sabor, de sus angustias y de sus sueños;**

**A Solangel Rodríguez, compañera de equipo y cómplice en las tareas de búsqueda de información;**

**A todas las mujeres y todos los hombres del Magdalena Medio que con su sabiduría y sus testimonios contribuyeron a que este trabajo sea un material viviente que se mueve, que se mueve como el río Grande de la Magdalena.**

## **TABLA DE CONTENIDO**

### **INTRODUCCION**

#### **EL MAGDALENA MEDIO Y EL SUR DE BOLÍVAR COMO AREA DE ESTUDIO**

### **CAPITULO 1**

#### **CONFLICTO Y VIOLENCIA: ELEMENTOS PARA LA COMPRESIÓN DE LAS NUEVAS DINÁMICAS DE LA GUERRA EN EL MAGDALENA MEDIO COLOMBIANO**

### **CAPITULO 2**

#### **LA VIOLENCIA VISTA DESDE LOS PROCESOS LOCALES: EL CASO DEL SUR DE BOLÍVAR**

### **CONCLUSIONES**

### **BIBLIOGRAFIA**

### **ANEXOS**

- 1. Conversación con Artemio Mejía**
- 2. El Circuito de la coca en el Sur de Bolívar**
- 3. Mapas**

## INTRODUCCIÓN

### EL MAGDALENA MEDIO Y EL SUR DE BOLÍVAR COMO AREA DE ESTUDIO

La región denominada “Magdalena Medio” está ubicada en el centro-oriente de Colombia y se halla conformada por territorios de 29<sup>1</sup> municipios pertenecientes a cuatro departamentos, con una extensión de 30.177 km<sup>2</sup> y una población estimada para el año 2005 en 830.000 habitantes<sup>2</sup> (el 2% de la población colombiana). El centro comercial y financiero de la región es la ciudad de Barrancabermeja, con algo más de 200.000 habitantes, casi la cuarta parte de la población regional. Los demás municipios están aislados geográfica, social y económicamente de las capitales departamentales y constituyen, por así decirlo, "una especie de patio trasero de sus respectivos departamentos"<sup>3</sup> (Ver mapa 1).

Tradicionalmente ha sido tierra de colonización y ha figurado a nivel nacional como territorio donde la débil presencia del Estado, su privilegiada ubicación geoestratégica, la riqueza de su suelo y su subsuelo y la pobreza generalizada de sus habitantes, han configurado un escenario donde han tenido asiento las más diversas formas de violencias.

Tal como lo relaciona Alejo Vargas, “el primer contacto de los españoles con las tierras del Magdalena Medio santandereano, fue hecho por un grupo expedicionario comandado por Antonio de Lebrija en 1529. Años más tarde, cuando ya se había creado la Real Audiencia de Santafé de Bogotá y se había iniciado la fundación planeada de pueblos, la operación fue de tipo envolvente: “una columna que avanzaría de Vélez, otro que partía de Pamplona

---

<sup>1</sup> Aún no existe acuerdo sobre el total de municipios que componen la región. La variación radica con el referente que se utilice según sean: municipios atendidos por las diócesis de la zona media del Magdalena, jurisdicciones de la policía, el ejército y la armada, etc. Para el caso del presente estudio haremos referencia a los 29 municipios definidos por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio tras el diagnóstico de 1996. Los municipios son: Del departamento de Santander: Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Rionegro, Simacota, Puerto Parra, San Vicente de Chucurí, El Carmen, Betulia, Cimitarra, Landázuri, Bolívar y El Peñón; Del departamento de Cesar: Aguachica, Gamarra, La Gloria, San Alberto y San Martín; Del departamento de Bolívar: Morales, Arenal, Regidor, Rioviejo, Santa Rosa del Sur, San Pablo, Simití; del Departamento de Antioquia: puerto Berrío, Puerto Nare y Yondó.

<sup>2</sup> Proyección del DANE para año 2005, con base en el Censo Nacional de Población y vivienda de 1993. Departamento Nacional de Planeación, Unidad de Planeación Regional y Urbana, 1999.

<sup>3</sup> CADAVID BRINGE, Amparo. Caracterización social PDPMM, 1996. p.55

y entraría por el Valle del río Sogamoso y otra por el sur que saldría de Muzo y todo coordinado desde Barrancabermeja que funcionaría como comando operativo<sup>4</sup>”.

Sin embargo, las difíciles condiciones climáticas, las pocas riquezas minerales de oro y plata y la belicosidad de los aborígenes obligaron al abandono del plan colonizador hasta bien entrada la época republicana; por ello, el poblamiento de la región hasta mediados del siglo XX, fue lento y disperso.

Durante el periodo colonial, la región sirvió de base de apoyo para la consolidación y expansión de la ocupación andina y Simití fue el epicentro del territorio que hoy conforma el Sur de Bolívar. Posteriormente, Puerto Nare (1750) surge como punta de lanza para internarse hacia la montaña antioqueña. Durante este mismo periodo se dio el poblamiento por parte de grupos negros de esclavos cimarrones que huían de las plantaciones de la región Caribe y de Mompós, fundando palenques en la Serranía de San Lucas, en lo que hoy son las poblaciones de Tiquisio, Norosí y Arenal<sup>5</sup>. También se asentaron en las riberas del Magdalena otros grupos negros que sirvieron como bogas en el río y más tarde como braceros y pescadores. Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, por la región pasaron la Expedición Botánica de José Celestino Mutis (1760) y la de Alexander Von Humboldt (1802), quienes dieron a conocer por primera vez las riquezas naturales allí existentes.

A mediados del siglo XIX el comercio con Europa incrementó la actividad por el río, el poblamiento y la apertura de trochas y caminos, propiciando la extracción de la flora y la fauna (quina, ipecacuana, caucho, maderas, plumas y pieles). También motivó el comercio la fundación de Puerto Wilches (1882) con la apertura del ferrocarril, así como Puerto Berrío (1870) y Puerto Salgar (1930), para dar salida a la producción cafetera de Antioquia, Caldas y Cundinamarca.

La Guerra de los Mil Días (1899 - 1902), contribuyó de buena manera al poblamiento de la región, que en ese momento se convirtió en refugio de excombatientes liberales. Así por ejemplo, Vargas cita que en el periódico La Opinión del 15 de Agosto 1900 se

---

<sup>4</sup> VARGAS VELASQUEZ Alejo. *Op. Cit.*, p. 28

registró que en lo que hoy denominamos Magdalena Medio se disolvieron los ejércitos liberales de la guerra de los Mil Días y Uribe Uribe luego de ser derrotado en el Tablazo a mediados de 1900, se retiró con sus hombres a la región de San Vicente<sup>6</sup>.

El inicio de la explotación petrolera en el Campo de Infantas a principios del siglo XX, dio lugar a la fundación de Barrancabermeja (1922) y con ello a la aparición de un nuevo tipo de poblamiento, representado por un importante sector obrero y asalariado del país. La vinculación de capital extranjero, principalmente norteamericano, a ésta y a otras actividades extractivas de los recursos naturales, marcó una etapa muy importante en el desarrollo de las economías de enclave en el país, palpable especialmente en Puerto Boyacá (Territorio Vásquez), Cantagallo, Puerto Wilches y Casabe (hoy Yondó), donde se asentaron empresas como la Texas, la Tropical Oil, la Shell y otras

El auge del comercio, el petróleo y el ferrocarril de Puerto Wilches a Bucaramanga, dieron lugar a las primeras colonizaciones campesinas en la región. La actividad petrolera atrajo oleadas migratorias, la mayoría de origen rural, procedentes de la costa Caribe, Santander, Antioquia y Boyacá. Otro frente constituido por una corriente colonizadora de campesinos expulsados de las haciendas del Bajo Magdalena y de las sabanas de Córdoba y Sucre, se ubicó en las zonas ribereñas de Bolívar y Cesar.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el poblamiento del Magdalena Medio se da en forma masiva y por oleadas. Cobra fuerza el patrón de poblamiento campesino que se había iniciado lentamente durante las décadas pasadas, desplazándose desde las cordilleras, extendiéndose a lado y lado del río por todo el territorio y adentrándose en las tierras bajas y selváticas del Carare. Este proceso estuvo estrechamente relacionado con las problemáticas sociales, económicas y políticas de diferentes regiones colombianas, sobre todo de las regiones "consolidadas" de la vecindad, a las cuales ha servido como receptora de sus conflictos, principalmente aquellos relacionados con la violencia y el problema agrario<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> FALS BORDA, Orlando. Citado por Murillo, Amparo. El Magdalena Medio: Un mundo que se mueve como el río. Colcultura 1999.

<sup>6</sup> VARGAS VELASQUEZ Alejo. *Op.cit.*, p. 35.

<sup>7</sup> MURILLO, Amparo. *Op.cit.* P. 85.

La violencia bipartidista que se desencadenó desde finales de la década de 1940 hasta los años sesenta, es la causa principal del éxodo de campesinos que huyeron desde diferentes departamentos de la región andina (Boyacá, Santander, Antioquia, Caldas), y dieron lugar a procesos de colonización masiva y espontánea en el Magdalena Medio y otras regiones del país. Las principales áreas de asentamiento campesino fueron el Carare - Opón en Cimitarra; el Territorio Vásquez en Puerto Boyacá; los alrededores de Campo Casabe en Yondó; el norte de Puerto Wilches y otras áreas del Magdalena Medio Santandereano y la Serranía de San Lucas y sus estribaciones, en jurisdicción de los actuales municipios de Río viejo, Morales, Simití, Santa Rosa y San Pablo en el Sur de Bolívar<sup>8</sup>.

De esta manera, como bien lo señala un estudio reciente, “la región ha estado marcada a lo largo de su historia por la colonización campesina espontánea o dirigida, la colonización ganadera y la colonización empresarial, lo que ha generado también a lo largo de su historia diversos tipos de conflictos como el agrario, el obrero-patronal, el político-institucional y el conflicto social y urbano”<sup>9</sup>.

En el plano cultural y sociológico, muchos investigadores coinciden con Alejo Vargas en el sentido que las características del Magdalena Medio tienen mucho que ver con las características de su poblamiento: “tres vertientes poblacionales principales: santandereanos, costeños, antioqueños (...) origen de una amplia diversidad de pobladores de la región, que se estaría estructurando históricamente a partir del legado rebelde de la herencia Yariguí, entre cruzado con el “código de honor” santandereano y cimentado en una experiencia de luchas y confrontaciones que han derivado en enfrentamientos agudos con el adversario<sup>10</sup>”.

Adicionalmente, la ocupación territorial del Magdalena Medio y las diferentes dinámicas sociales que estos procesos han generado, no ha estado acompañada de una presencia estatal que cumpla funciones de equilibrio territorial y de regulación social; por el contrario, su presencia allí ha tenido un fuerte acento militar. Esto ha facilitado la

---

<sup>8</sup> MURILLO, Amparo. *Op.cit.* P. 88.

<sup>9</sup> PROGRAMA POR LA PAZ – ACNUR. Proyecto de formación y acompañamiento para la prevención y protección del desplazamiento forzado. Barrancabermeja, 2001. P. 21.

concentración y centralización del capital, induciendo y profundizando las desigualdades sociales<sup>11</sup>, limitando cada vez más el acceso a las oportunidades que permitan una vida digna a la mayoría de la población y la materialización del Estado Social de Derecho.

En términos económicos, el Magdalena Medio es una región caracterizada por una economía extractiva, poco integrada al mercado nacional y con dificultades muy fuertes en materia de infraestructura y comunicaciones. La paradoja de ser una región rica con una población mayoritariamente pobre, corrobora la hipótesis que "...ninguna cantidad de recursos volcada por el Estado en una región es capaz de provocar su desarrollo, si no existe una sociedad regional, compleja, con instituciones realmente regionales, con una clase política, con una clase empresarial, con organizaciones sociales, sindicales y gremiales de base, con proyectos políticos propios, capaz de concertarse colectivamente en pos del desarrollo"<sup>12</sup>.

En la región, la pobreza relativa y absoluta se ha convertido en una situación estructural que tiende a reproducirse y a agudizarse con el paso del tiempo. Mientras en Colombia el 60% de las familias está por debajo de la línea de pobreza, en el Magdalena Medio el porcentaje es del 75% recibiendo un ingreso anual per cápita que oscila entre 400 y 600 dólares<sup>13</sup>, con lo cual no alcanzan a adquirir los bienes básicos de la canasta familiar.

Las condiciones de pobreza y miseria más críticas de la región se presentan en el Sur de Bolívar; allí, el 79% de las familias tiene necesidades básicas insatisfechas y el 56% está en situación de miseria. En los demás municipios, exceptuando a Barrancabermeja, la población en situación de pobreza y miseria es aún bastante alta, sobre todo en el área rural, si se compara con el promedio nacional. Esta situación ha evolucionado en los últimos años en forma exponencial y negativa, paralelamente con los procesos de apertura y liberalización de la economía, de modernización de la infraestructura, de

---

<sup>10</sup> VARGAS VELASQUEZ Alejo. *Op.cit.*, p. 42-43.

<sup>11</sup> FAJARDO, Darío, 1993. *Espacio y Sociedad. Formación de las regiones agrarias en Colombia.* Corporación Colombiana para la Amazonía - Araracuara COA. Bogotá.

<sup>12</sup> GARCIA, Arturo (Coordinador). *Construcción de lo público en el Magdalena Medio.* PNUD-PDPMM, 2000. p. 88.

<sup>13</sup> Al cambio de 2005, US\$1 igual a Col\$2.200, esto equivale a \$871200 y \$1.309000 respectivamente. Francisco de Roux, Documento central de diagnóstico, síntesis y conclusiones, PDPMM.

concentración de la tierra y de violencia contra la población por parte de los grupos armados y del narcotráfico que pugnan por el poder económico y territorial de la región

La inequitativa distribución y apropiación de la tierra está directamente asociada con la injusta distribución de la riqueza en el Magdalena Medio, y la lucha por su posesión es una de las principales causas de la violencia y del conflicto armado en la región desde hace décadas<sup>14</sup>. La concentración de la propiedad de la tierra en la región se ha acentuado con la adquisición de grandes extensiones por parte del narcotráfico<sup>15</sup>. La expulsión de los campesinos de sus parcelas por intimidación de los actores armados, en especial del paramilitarismo es una dinámica que ha continuado en territorio santandereano y cesarense pero que en los últimos años ha tenido una fuerte expresión en el Sur de Bolívar jalonado por el incremento de la actividad del narcotráfico, los macroproyectos viales como el puente Barrancabermeja – Yondó o los grandes proyectos productivos de Palma de aceite y caucho.

El Magdalena Medio continúa siendo una de las zonas más violentas del país. Desde hace más de dos décadas supera ampliamente el promedio de 75 muertes por cada 100 mil habitantes que coloca a Colombia como uno de los países donde más se vulnera la vida humana. Los años más críticos fueron 1998, 1999 y 2000 donde la guerra declarada de paramilitares y guerrilla por el control de esta parte del territorio mostró la manera vertiginosa como la región casi triplicó el promedio anual. En este territorio nacieron el ELN, varios frentes de las FARC y los grupos paramilitares. Durante más de tres décadas vivió el dominio casi absoluto de la guerrilla en las zonas rurales y buena parte de las zonas urbanas. Barrancabermeja se convirtió en el estandarte de la lucha al controlar, especialmente en las comunas populares la vida social y política y en toda la ciudad la dinámica económica, especialmente vinculada con el petróleo.

A partir de 1996 el Magdalena Medio vivió la conquista a sangre y fuego del territorio por parte de las autodefensas. Los homicidios que eran de los más altos del país se incrementaron significativamente y con ellos la crisis humanitaria que ha dejado a cientos

---

<sup>14</sup> ARISTIZABAL, Hugo. El Magdalena Medio. Naciones Unidas. 2002. \_P. 25

de familias desplazadas de sus territorios. El auge del negocio del narcotráfico, el control sobre las finanzas locales vía descentralización y regalías mineras y el control sobre actividades ilícitas como el robo de combustible convirtieron al Magdalena Medio en escenario de disputa, situación que sobrevive hasta el día de hoy. En la actualidad la totalidad de las cabeceras municipales son controladas por el nuevo orden paramilitar, lo mismo que buena parte de las zonas rurales, especialmente las vinculadas con el cultivo y procesamiento de coca. Solo zonas como el Valle del Cimitarra y las zonas altas de las serranías de Perijá y San Lucas mantienen el control guerrillero.

En medio de estas circunstancias la población civil ha debido soportar el traspaso del poder entre los actores ilegales y la debilidad estatal por garantizar su vida, sus bienes y su honra, lo cual le ha implicado establecer estrategias que le permitan sobrevivir en este desorden de cosas.

Precisamente, el presente trabajo pretende arrojar luces para la comprensión de las nuevas dinámicas de la guerra en el Magdalena Medio colombiano y de manera especial en la subregión Sur de Bolívar, con especial énfasis en el papel jugado en medio del conflicto por los pobladores de estos territorios.

En el primer capítulo se busca construir un marco teórico de referencia que permita avanzar en planteamientos para ubicar la realidad del conflicto armado en zonas de colonización, a partir de referentes conceptuales contruidos sobre realidades cercanas al Magdalena Medio. En el segundo capítulo, las evidencias de la región y del sur de Bolívar en particular durante los últimos quince años, se contrastarán con estos planteamientos teóricos y se dará especial importancia al papel jugado por poblaciones del sur de Bolívar que han logrado avanzar en medio de la confrontación y que por momentos se han situado de frente a los mismos actores armados ilegales para exigir respeto por sus vidas, a través de aisladas acciones colectivas, que se convierten en una pequeña posibilidad para construir colectivamente horizontes de futuro en el sueño mayor de revitalizar la concepción de lo público en este bello territorio del país.

---

<sup>15</sup> Un informe de la Contraloría General de la República del año 2005 señala al Magdalena Medio como una de las zonas del país donde mayor concentración de la tierra se ha dado, desplazando las actividades productivas tradicionales y donde la presencia de dineros provenientes de las actividades ilícitas es más evidente en la adquisición de los nuevos predios.

## **CAPITULO 1.**

### **CONFLICTO Y VIOLENCIA: ELEMENTOS PARA LA COMPRESIÓN DE LAS NUEVAS DINÁMICAS DE LA GUERRA EN EL MAGDALENA MEDIO COLOMBIANO**

El presente capítulo pretende avanzar en la construcción de un marco conceptual de referencia para el análisis de las expresiones regionales del conflicto armado en Colombia. Aborda inicialmente las relaciones entre conflicto, violencia y construcción de región a partir de varios estudios generales sobre las confrontaciones armadas internas y sus especificidades en algunas regiones de Colombia. Se aproxima en los análisis con una perspectiva que involucra a los civiles no solo como víctimas sino como actores importantes en la definición del curso de los acontecimientos. Incursiona en una periodización general sobre la violencia en Colombia y sitúa los elementos centrales para el análisis de la violencia desde una perspectiva regional: precariedad en la presencia del Estado, historia particular de colonización reciente en zonas de frontera, interés de los diferentes actores por las riquezas y las posiciones geoestratégica de los territorios y apoyos consensuados o impuestos de las poblaciones, entre otros.

#### **Conflicto, violencia y conflicto violento**

Desde varias vertientes del pensamiento, tal como lo menciona Clara Inés García<sup>16</sup>, el conflicto ha sido interpretado como algo ajeno al estado normal de la organización social, como una patología de la sociedad (Comte 1969-1970; Durkheim 1964; Parsons, 1966) o como una expresión del desarreglo de algo circunstancial a la condición humana y a la vida social. Carlos Marx, en el siglo XIX, concibió la sociedad fundada sobre un sistema contradictorio de las relaciones sociales y la generación consecuente de la lucha de

---

<sup>16</sup> GARCIA DE LA TORRE, Clara Inés. Paradojas de los conflictos Violentos en: Legado del Saber. Revista de la Universidad de Antioquia No 6. Medellín. p. 9-10

clases, fuerza que movilizaría los cambios radicales de la historia; así se explicó el surgimiento de la sociedad industrial del siglo XIX y la revolución socialista de comienzo del siglo XX.

Max Weber por su parte (1964), estudia el Estado como la institución que logra el monopolio legítimo de la violencia y Norbert Elías (1989) muestra el proceso civilizatorio ocurrido entre 1300 y 1800 en la sociedad europea que permitió el cambio hacia el autocontrol en los compartimientos individuales y colectivos. En forma más reciente Benedict Anderson (1993) evidencia como el proceso de formación de las naciones va necesariamente asociado a la construcción de una narrativa de la identidad que se alimenta de muchos olvidos.

En forma más reciente, otros autores como el investigador de la Universidad Javeriana Manuel Salamanca<sup>17</sup>, sostienen que la violencia se puede estudiar como comportamiento que ocurre en el desarrollo de la agresividad, aunque agresividad y violencia no son la misma cosa por cuanto la agresividad está al servicio de la eficacia biológico y de ella depende el incremento de las posibilidades de vivir y dejar descendencia.

Para Salamanca, la violencia es entendida como “una variedad dañina (...) de la agresividad, que se manifiesta como comportamiento de una persona o de un grupo de personas y con intensidades variadas, que afecta a un entorno y a la víctima o víctimas que en él habitan en grados mayores o menores concordantes con su intensidad y en modalidades mas o menos explicitas, y que denota (...) una responsabilidad o cadena de responsabilidades y valoraciones que en algunas ocasiones dependen de prácticas o costumbres de los agentes o las víctimas”<sup>18</sup>, por lo cual siempre será necesario reconocer que es difícil hablar de la violencia “a secas” sin tener presente que ella implica modalidades, entornos, actores, víctimas, causas, fines y efectos.

Como se sostiene desde la psicología, la violencia es en sí un fenómeno multidimensional y admite escasas generalizaciones. Cuando se presenta una agresividad predatoria que

---

<sup>17</sup> SALAMANCA, Manuel Ernesto. La violencia representada: bases para la construcción de modelos dinámicos. En: Papel Político. No. Universidad Javeriana. 2005 El autor del presente trabajo ha tenido acceso al documento manuscrito.

<sup>18</sup> SALAMANCA, Manuel Ernesto. *Op. Cit.*, p. 4.

no obedece a parámetros defensivos del organismo, sino que es ejercida por ciertos individuos y grupos con el objetivo de saciar otro tipo de necesidades como son las económicas, de poder o territoriales estamos ante la violencia.

Citando a Michaud, Salamanca considera que hay violencia “cuando en una situación de interacción, uno o varios actores actúan de manera directa o indirecta, agrupada o distribuida, atentando contra uno o varios en grados variables, sea en su integridad física, sea en su integridad moral, sea en sus posesiones, sea en sus participaciones simbólicas y culturales”<sup>19</sup>, de allí que se señale que la violencia es siempre relación con algo y que permea muchos aspectos de la vida social llegando incluso a determinarla.

Ahora bien, para lo que interesa en este trabajo, es importante señalar que aunque los conflictos emergen por efecto mismo del relacionamiento de las personas, las organizaciones y los pueblos, no todos se convierten en conflictos violentos y contrario a lo que podría pensarse, la mayor parte de los conflictos jamás toman el matiz de conflictos violentos.

La violencia política es una de las modalidades de conflicto violento caracterizada por el recurso a las armas y la producción de un número importante de víctimas; de allí que son precisamente “los elementos políticos los que hacen que una confrontación se considere armada (y) los agentes que se consideran son políticos, bien por sus reivindicaciones, bien por su naturaleza”; así mismo, “los medios utilizados y las víctimas producidas por la violencia se mencionan en relación directa con los motivos políticos de la lucha”<sup>20</sup>.

Hablar de violencia es siempre hablar de relaciones de poder y de relaciones políticas, y es también hablar de cultura y de las diversas formas en las que está relacionada con las estructuras de dominación, tanto al nivel micro como macro social

La acción política violenta recurre al recurso del discurso como justificación de sus acciones; el discurso permite el tránsito desde la palabra al acto, de allí que Salamanca considere que “la violencia política es un caso demostrativo de la violencia que se vuelve

---

<sup>19</sup> SALAMANCA, Manuel Ernesto. *Op. Cit.*, p. 11.

un valor de uso que se sustenta en palabras que pueden ser acto o que amenazan con ser acto”<sup>21</sup>. En estas circunstancias, el discurso se vuelve importante como una forma de conectar el principio moral y los intereses con lo cual la acción política violenta jamás es inocente, en la medida en que existe una intencionalidad apoyada en una palabra que se podría llamar el proyecto político.

Esto significa que una de las característica fundamentales de la acción política violenta es su capacidad de auto justificarse, que ha valido entre muchas otras cosas para que la institucionalidad en aras del mantenimiento del orden haga uso de la fuerza en forma legítima como el “menos malo de los recursos para contener la acción política violenta dentro de los límites de la aceptabilidad”

### **Conflicto, Violencia política y construcción de región**

Uno de los enfoques más novedosos en el estudio de los conflictos violentos ha sido el de Georges Simmel (1955) quien enfatizó la capacidad del conflicto social de cumplir funciones en la formación, afianzamiento o ajustes de los vínculos sociales, de lo cual se deduce que el conflicto puede constituirse entonces también como una fuerza constructiva de la sociedad.

Así, en la dinámica de las confrontaciones se han generado efectos en la producción de las representaciones del territorio, en la construcción de actores sociales, en la definición de identidades sociales y políticas y en la formación de los lazos entre regiones con el Estado y entre los actores regionales con las fuerzas y organizaciones sociales y políticas en el orden regional, nacional e internacional.

Sin embargo, no siempre la construcción de un territorio deviene los conflictos en violencia, es precisamente cuando las contradicciones al interior de los grupos no logran desarrollar suficientemente canales para discutir las diferencias y encontrar soluciones

---

<sup>20</sup> SALAMANCA, Manuel Ernesto. *Op. Cit.*, p. 5-6.

<sup>21</sup> SALAMANCA, Manuel Ernesto. *Op. Cit.*, p. 15

consensuadas que los conflictos se transforman en violentos como en el caso colombiano.

Al estudiar el conflicto violento interno colombiano es importante partir, como lo hace Stathis Kalyvas<sup>22</sup>, de afirmar que la violencia en estas circunstancias dista mucho de ser un proceso aleatorio, caótico y anárquico, o como un fenómeno que se puede analizar bajo la óptica simple de las pasiones y de las emociones.

En su gran mayoría, las investigaciones sobre los conflictos armados internos han pasado por alto la cuestión de la violencia, especialmente la que tiene que ver con la violencia contra y entre la población civil. La mayor parte de estos estudios se han concentrado en las causas, en la terminación del conflicto interno, en las consecuencias políticas y sociales, en los factores determinantes del éxito o del fracaso de los alzados en armas o en las motivaciones individuales y grupales que sustentan la rebelión o las respuestas desde el Estado.

Pese a su importancia, “la violencia continua, siendo tema marginal (...) es un aspecto en extremo desagradable que, con frecuencia, se deja de lado en manos de los periodistas o de los activistas de los derechos humanos (...), es un tema que intuitivamente se adapta a la descripción antes que a la teoría”<sup>23</sup>. El mismo autor destaca cuatro grandes diferenciaciones conceptuales, pertinentes para comprender el fenómeno de la violencia en los conflictos internos:

*Violencia y conflicto.* Esta indiferenciación es sintomática del hecho que la violencia es un término carente de autonomía conceptual: por lo general se emplea como sinónimo de “conflicto” o “guerra”; ya Hannah Arendt señalaba que la violencia es “un fenómeno por derecho propio”, por lo cual, desde una perspectiva analítica, se hace necesario disociar la guerra civil de la violencia en la guerra civil, lo cual implica tratar de resolver el

---

<sup>22</sup> KALYVAS, Stathis N. Esbozo de una teoría de la violencia en medio de la guerra civil. Análisis político. Bogotá: Universidad Nacional No. 42. p. 1-25.

<sup>23</sup> KALYVAS, Stathis N. op.cit., p. 3.

interrogante de qué causa la violencia en el interior de una confrontación armada interna<sup>24</sup>.

*Violencia como consecuencia y como proceso.* Los científicos e historiadores políticos tienden a incluir a la violencia bajo la categoría de conflicto violento; muchos antropólogos, analistas de la política exterior, activistas de las ONGs, expertos *in situ* y periodistas se inclinan a percibir a la violencia como una consecuencia antes que como un proceso. Aun cuando se analiza el proceso de la violencia, rara vez el examen se atreve a ir más allá de la descripción de sus pormenores. Por ello, Kalyvas concibe que entender la violencia como proceso permite investigar la secuencia dinámica de decisiones y hechos que se combinan entre sí para producir actos de violencia, y permite también el estudio de los actores invisibles partícipes de este proceso<sup>25</sup>. Esta perspectiva es bien interesante para el estudio de la violencia al interior del conflicto en territorios de frontera como el Magdalena Medio y específicamente el Sur de Bolívar.

*Violencia en la paz, violencia en la guerra.* Son escasos los estudios acerca de la violencia en los conflictos armados internos y, los que en realidad existen, tienden a quedar incluidos bajo la denominación global de acción beligerante colectiva, término que se refiere tanto a la acción esporádica colectiva violenta, como a la acción colectiva no violenta o ligeramente violenta. Fusionar los dos en uno solo, sugiere la incapacidad de aceptar que guerra y paz son dos contextos radicalmente diferentes generadores de violencia en formas muy disímiles.

Como sostiene el autor, se trata de una diferencia de magnitud de escala: la guerra estructura las opciones y selecciona a los actores de maneras radicalmente diferentes a la paz. La acción beligerante constituye un reto para el gobierno o el régimen en el poder, en un contexto caracterizado por un único soberano con su monopolio de violencia legítima (y real) intacto<sup>26</sup>. Por el contrario, la característica central de los conflictos armados internos es la soberanía escindida, de allí que autores como Varshney señalan

---

<sup>24</sup> KALYVAS, Stathis N. *op.cit.*, p. 4.

<sup>25</sup> *Ibid.*, p. 4

<sup>26</sup> *Ibid.*, p. 5

la necesidad de establecer una “diferencia analítica” entre una teoría de las guerras civiles y una teoría de los disturbios.

*Propósito y producción de la violencia.* Es posible usar la violencia masiva para lograr el sometimiento o el exterminio. Cuando al menos un actor político intenta gobernar a la población contra la cual usa la violencia, ésta última se convierte en un medio antes que en un fin. A menudo, al uso de la violencia como instrumento para moldear el comportamiento individual se le da la connotación de “terror”. Por otro lado, es posible producir la violencia política masiva de manera unilateral (por un solo actor), o bilateral o multilateralmente (por uno o más actores). La convergencia de estos dos atributos da origen a cuatro categorías analíticas ideales características de la violencia masiva: el terror de Estado, el genocidio y la limpieza étnica, la violencia de la guerra civil, y el “exterminio recíproco”.

El terror de Estado es el gobierno por intimidación, el cual implica la coerción y la violencia deliberadas dirigidas contra alguna víctima, con la intención de provocar temor extremo en algunos observadores objetivo que se identifican con la víctima, de tal manera que estos observadores se perciban a sí mismos como futuras víctimas probables. Así, se les obliga a analizar la posibilidad de modificar su comportamiento en alguna forma deseada por el actor.

*El genocidio y limpieza étnica ocurren* cuando el propósito intencional de la violencia es el exterminio físico de todo un grupo antes que el sometimiento de este grupo a una autoridad política. Es el acto de expulsar a propósito y en forma permanente, a ciertos grupos de población, situación que a menudo se conoce como “limpieza étnica”.

A diferencia del terror de Estado y del genocidio, la violencia en la guerra civil no es unilateral: por lo menos dos actores políticos, partidarios de monopolios segmentados de violencia, la producen. A diferencia de otras situaciones en las que la violencia se produce de manera unilateral, la población objetivo, o bien es partícipe de las oportunidades o es obligada a transferir su lealtad y sus recursos al actor político rival; es esta característica la que otorga a la violencia de la guerra civil su dimensión estratégica.

*El exterminio recíproco se da bajo la convicción de varios actores políticos que intentan lograr el objetivo de expulsar de manera permanente, o aun de exterminar, determinados grupos de población a los que consideran adversarios.*

Para ser eficaz, el terror como forma de dominio socio-espacial no necesita exhibir una violencia continua y generalizada. Los actores del conflicto colombiano por ejemplo llevan a cabo acciones violentas de manera intermitente, con gran crueldad, en contra de uno o varios individuos con el objetivo de afectar a grupos sociales más numerosos. Se apoyan en prácticas de teatralización de la violencia (ejecuciones públicas, mutilaciones y desmembramientos de cuerpos exhibidos) y con el papel de los rumores, para difundir un imaginario del miedo entre las poblaciones y paralizar el tejido social que luego organizan según sus intereses estratégicos.

El terror para el control de los espacios sociales, se fundamenta en: juegos de comunicación en los que los intercambios orales tienen únicamente un lugar limitado en beneficio de la ley del silencio; estos juegos se esbozan según Eric Lair, uno de los científicos sociales estudiosos de la violencia en Colombia, de la siguiente manera: “entre los actores del terror, a menudo con poblaciones interpuestas, con la intención de mostrar al otro sus capacidades de acción; de las organizaciones armadas hacia las poblaciones con la intención de vencer su resistencia; y entre las mismas poblaciones que se encuentran puntualmente en los espacios del sufrimiento”<sup>27</sup>.

Este terror permite a los actores armados defender o ampliar el radio de sus poderes locales sin destruir totalmente el tejido social. En este sentido tienen una visión de la guerra parecida a la de Clausewitz: “derrotar al enemigo no supone necesariamente su aniquilamiento”.

El mismo Lair, considera que a diferencia de muchos países latinoamericanos, el terror estatal colombiano ha sido arrebatado de las manos del propio Estado, por parte de actores armados diseminados horizontalmente en la sociedad. Por su carácter difuso y

---

<sup>27</sup> LAIR, Eric. El terror, recurso estratégico de los actores armados: reflexiones en torno al conflicto colombiano. Revista Análisis Político No. 37. Bogotá. P. 72.

descentralizado, se percibe más parecido al terror de algunos países africanos caracterizados por una fuerte privatización de la violencia<sup>28</sup>.

### **¿Convicciones políticas o móviles económicos?: el motor de la violencia en los conflictos internos**

Un aspecto que merece atención en el análisis de los conflictos violentos tiene que ver con el estudio de la motivación de esa violencia por parte de los grupos ilegales. Como lo afirma Álvaro Camacho Guizado<sup>29</sup>, las tendencias se mueven entre las explicaciones que toman a las convicciones o credos políticos o la codicia como el centro de su explicación.

En los últimos años, el ánimo de lucro, el carácter de buscadores de rentas, la codicia son algunas razones que los teóricos encuentran como motivación de la lucha violenta al interior de países en conflicto. Los resortes políticos han cedido a estos apetitos de codicia; el uso de rentas ilegales, especialmente las ingentes sumas derivadas del narcotráfico, o los impuestos a las petroleras trasnacionales, tienden a teñir la actividad guerrillera en el caso de Colombia, de ánimo de lucro y codicia, y a desdibujar sus propósitos iniciales desarrollados a partir de percepciones de injusticias y agravios representados en las agresiones perpetradas contra el campesinado, la mala distribución de los recursos, la incapacidad estatal para proveer justicia y satisfacer las necesidades de los más pobres, la exclusión política y la ausencia de posibilidades de transformación social por vías no armadas.

Según Mary Kaldor, en su obra “Las nuevas guerras”, en el momento actual los conflictos internos representan una mezcla de guerras, delito organizado y violaciones masivas de los derechos humanos, surgidas de situaciones en las que los ingresos del Estado disminuyen por el declive de la economía, mientras se expande el delito. En medio de estas circunstancias la violencia está cada vez más privatizada, como consecuencia del creciente crimen organizado y la aparición de grupos paramilitares, mientras la legitimidad política va desapareciendo.

---

<sup>28</sup> LAIR, Eric. Op. Cit., P. 70.

La contradicción es palpable. El mismo Banco Mundial a través de Paul Collier, argumenta que el análisis de los nuevos conflictos debe verse a la luz de la dicotomía entre descontento y codicia. Hoy, los grupos rebeldes deben construir un discurso en el que la injusticia y la desigualdad social imperantes son el resorte que mueve a la organización para combatir a los opresores, mientras que la realidad indica que con frecuencia de generan fuertes hiatos entre el discurso y la realidad de la motivación económica que está detrás de ello, de allí que categóricamente se afirme que “la motivación para los conflictos no tiene importancia: lo que importa es que la organización se pueda sostener financieramente”<sup>30</sup>.

Precisamente, la clave de la sostenibilidad de la rebelión radica en la capacidad de los rebeldes de contar con recursos económicos. Las condiciones más propicias para una rebelión sostenible se dan en países que basan su economía en la exportación de materias primas, puesto que estas son fácilmente gravables tanto por los gobiernos como por los insurgentes; con debilidad del Estado para ejercer soberanía en todo el territorio; que tienen una fuerte proporción de población joven, y que muestran bajos niveles de cobertura educativa, que permite a la opción armada mostrarse como un camino para la movilidad social ascendente.

Los gobiernos siempre pueden financiar sus ejércitos mediante la imposición de tributos y, por lo tanto, pueden guerrear unos con otros. En cambio, las circunstancias para que una organización rebelde pueda financiar un ejército son realmente excepcionales. De dónde provienen entonces las fuentes de recursos que no tienen una opción similar a las del Estado? El estudio de casos en África, América Latina y Asia determina que las fuerzas rebeldes que se mantienen, recurren al comercio internacional de mercancías legales como diamantes, oro o esmeraldas, o ilegales, como heroína, cocaína o marihuana. Pero también pueden recurrir a prácticas internas como el secuestro, la extorsión, el robo de recursos naturales, los asaltos bancarios, etc.

---

<sup>29</sup> GUIZADO CAMACHO, Alvaro. Credo, necesidad y codicia: los alimentos de la guerra. Cesó: Univeridad de los Andes. Sin publicar.

<sup>30</sup> COLLIER, Paul. Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de políticas. Bogotá. Revista El Malpensante. No. 30. mayo-junio, 2001. p. 32.

De ello se deduce que el comercio nutre la guerra. En buena parte de los casos los rebeldes no sólo se ligan con bandas de delito internacional organizado sino que también contribuyen a deteriorar condiciones de vida de sectores de la población consumidora. La magnitud del delito internacional es mucho mayor y esto contribuye a su deslegitimación nacional e internacional. Catalogar a los grupos armados rebeldes como narcoguerrillas, incluirlos en listas negras del delito internacional o denominarlos “grupos terroristas” después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, es una prueba de ello.

Sin embargo, es importante precisar que los analistas con frecuencia sostienen que la guerra es la consecuencia de un conflicto político particularmente intenso, a su vez basado en motivos de descontento particularmente graves. No obstante, la intensidad del descontento objetivo no predice una guerra civil, porque aunque el conflicto político es universal, la guerra interna es escasa y sólo “allí donde la rebelión resulta ser financieramente viable, habrá guerras”<sup>31</sup>.

Otro punto de análisis es la discusión necesaria sobre la destinación de los recursos por parte de las organizaciones rebeldes. Como argumenta Camacho Guizado, “una cosa es que los insurgentes sean codiciosos, que tengan un ánimo de lucro y que hagan apropiaciones privadas de los recursos obtenidos con el propósito de enriquecerse o disfrutar en forma individual o colectiva de los mismos, y otra es que éstos sean dedicados a fortalecerse en lo militar y lo estratégico”<sup>32</sup>. Es evidente el número apreciable de casos donde es clara la pérdida del carácter altruista, y que acciones predatorias, las intolerancias y los abusos que cometen agentes guerrilleros con la población civil lleven a crecientes sectores de la población a imputarles fines de enriquecimiento y perpetuidad, antes que la defensa de los ideales iniciales. De allí que se acepte que en el caso colombiano, podemos estar ante una tendencia a la criminalización de la lucha guerrillera que difícilmente distingue las motivaciones políticas rebeldes del delito común organizado, donde el aplazamiento de alternativas y negociaciones políticas se convierte en el mejor combustible para prolongar indefinidamente esta dinámica perversa.

---

<sup>31</sup> COLLIER, Paul. *Op.cit.*, p. 43.

<sup>32</sup> CAMACHO GUIZADO, Alvaro. *Op.cit.*, p. 13.

Desde una perspectiva territorial, las guerrillas han tendido en los distintos países a privilegiar las regiones más dinámicas económicamente, en cuanto son la fuente privilegiada de recursos financieros. En el caso de Colombia, las FARC preferentemente han buscado copar las regiones productoras de hoja de coca, donde se encuentran las mayores fuentes de excedentes líquidos fácilmente recolectables. Esas mismas regiones encuentran también una población joven, compuesta por aventureros o campesinos locales, quienes se convierten en los objetivos favoritos de reclutamiento voluntario o forzado. De allí que Collier llega a afirmar que las organizaciones rebeldes colombianas (en las que incluye a las de la extrema izquierda y la extrema derecha) si bien surgieron basadas en los agravios, hoy se han convertido en “baronazgos de la droga”. El ELN ha su turno ha privilegiado las regiones productoras de petróleo, oro y carbón, donde también encuentra liquidez inmediata y población joven reclutable.

Estos patrones de ubicación territorial han incidido también en el estímulo a formas paralelas de violencia. A este respecto se han realizado investigaciones en el caso de Colombia que demuestran cómo los incrementos en la criminalidad homicida en algunos municipios se relaciona con la presencia de organizaciones insurgentes o paramilitares en la medida en que con su acción corroen los aparatos de justicia y seguridad ciudadana y estimulan formas de delincuencia que son de su conveniencia en tanto les permiten los intercambios ya mencionados. Este aspecto será tratado con más detalle en el siguiente capítulo para el caso de la zona del presente estudio.

### **Una teoría de la violencia en los conflictos armados internos**

Más que una guerra convencional, lo que se da en los conflictos armados internos es una guerra irregular. Como bien lo señala Kalyvas son dos las diferencias fundamentales entre la guerra convencional y la guerra irregular. En primer lugar, no existen vanguardias claramente definidas; las fronteras, o líneas divisoras, son porosas y cambiantes. En segundo lugar, los combatientes irregulares y sus simpatizantes no son fácilmente identificables<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> KALYVAS, Stathis N. *op.cit.*, p. 7

Tradicionalmente se ha mencionado la existencia de fuertes nexos entre la guerra irregular y la violencia, los cuales se explican por lo menos por tres razones:

- las estructuras formales (en particular las militares) son débiles;
- la ausencia de vanguardias claramente definidas y la presencia del enemigo literalmente a sus espaldas acrecienta la tensión de la tropa y facilita reacciones ante la menor provocación;
- se desdibuja la diferencia entre civiles y combatientes, a la vez que existe una profunda coincidencia social y geográfica entre los ejércitos,

Sin embargo, como bien lo anotan estudios recientes, lo que impulsa la violencia en la guerra civil va mucho más allá de débiles estructuras formales, de la ausencia de vanguardias claramente definidas y de la coincidencia entre civiles y combatientes. La guerra civil altera de manera crucial la esencia de la soberanía. En el centro se encuentra el rompimiento del monopolio de la violencia legítima ejercida por el Estado, por la vía del desafío armado interno. La soberanía entonces se divide y se evidencia la competencia entre dos actores: insurgentes y gobernantes, que usan tácticas diferentes según sus recursos.

Existen por lo menos dos maneras de analizar la soberanía en medio de estas circunstancias: para algunos, la soberanía está dividida o segmentada, en el sentido en que dos (o más actores) ejercen soberanía sobre partes distintas de lo que era el territorio del Estado; para otros, la soberanía está dividida o fragmentada en el sentido en el que dos (o más) actores políticos distintos ejercen *simultáneamente* grados distintos de soberanía sobre las mismas porciones del territorio estatal. En los análisis del caso colombiano se evidencian defensores de una y otra posición.

A diferencia de la guerra convencional, los conflictos armados internos adquieren un carácter "triangular" pues involucra no sólo a dos (o más) actores que compiten sino también a los civiles. El apoyo o la colaboración de la población civil llega a ser un componente del conflicto por lo cual es posible detectar un reducido número de combates

---

directos entre los combatientes y muchas acciones en las que los civiles juegan un papel fundamental. Este aspecto tendrá mayor desarrollo en el capítulo siguiente enfatizando el papel de los civiles en las nuevas dinámicas del conflicto en el Sur de Bolívar.

El apoyo popular es un término que describe las acciones de colaboración exclusiva con uno de los actores políticos, el cual puede traducirse en apoyos materiales o no materiales. Aunque para muchos estudiosos, el apoyo popular es considerado exógeno a la guerra, aquí se analizará como un elemento endógeno en cuanto por ejemplo, aunque la población simpatice fuertemente frente a un actor político, es posible la existencia de fuertes incentivos para que algunas personas cambien de bando o deserten en el curso del mismo conflicto con el fin de sobrevivir.

Pese a la existencia de beneficios esenciales (materiales y no materiales) en las etapas iniciales de la guerra, “una vez la violencia se intensifica hasta convertirse en la “principal actividad de la región la supervivencia individual se convierte en la prioridad esencial para la mayoría de la población”<sup>34</sup>. A medida que la guerra se intensifica, la violencia se convierte en un instrumento cada vez más importante usado incluso por aquellos actores políticos que en un principio la desestimaron con el fin de “contrarrestar” la violencia de sus opositores.

Como se mencionó atrás, tanto los gobernantes en el poder como los insurgentes apelan a la violencia para hacerse a la colaboración de la población civil y disuadir a los desertores. Quienes detentan el poder adelantan a menudo estrategias contrainsurgentes cuyo objetivo principal es privar a los insurgentes del apoyo de la población civil a través de medidas represivas y el establecimiento de castigos colectivos para los casos de colaboración con los insurgentes. En otros casos, el mismo Estado por sus propios medios o mediante la promoción de ejércitos paramilitares promueve desplazamientos de poblaciones de zonas que históricamente han apoyado a los rebeldes, con el objeto de “quitarle el agua al pez”.

---

<sup>34</sup> KALYVAS, Stathis N. *op.cit.*, p. 9.

Cuando la soberanía está fragmentada como en el caso de vastas zonas rurales de Colombia, existe la probabilidad de que ambos actores políticos hagan mayor uso de la violencia, en comparación a cuando dichos actores ejercen plena soberanía; sin embargo, esta violencia será más selectiva. Las áreas en conflicto son aquellas en las que se desarrolla la competencia verdadera entre los gobernantes en ejercicio y los insurgentes. La población de estas zonas tiene la oportunidad (y siente la presión) de colaborar con (o de desertar hacia) cualquiera de los actores políticos. Así mismo, los actores políticos hacen uso de la violencia para obligar a la población a tomar partido en una situación de incertidumbre.

Como afirma el mismo Kalyvas, esta situación de incertidumbre complica en gran medida los cálculos de los civiles y será una violencia selectiva, cumpliendo con dos condiciones fundamentales para la credibilidad de las amenazas: la persuasión y la personalización. En estas situaciones el actor armado sabe que la efectividad de las sanciones exige selectividad: “El terror es más efectivo cuando es selectivo” afirma Thompson<sup>35</sup> en un clásico estudio sobre contrainsurgencia y su aplicación se privilegia en las zonas en disputa.

Por lo anterior, el mismo autor formula tres hipótesis acerca de la variación espacial de la violencia en un conflicto armado interno, que permite analizar el caso colombiano con sus diversos matices:

Hipótesis 1 (H1): En presencia de soberanía absoluta, es probable que la violencia sea limitada, selectiva o indiscriminada, y la ejerza el soberano.

Hipótesis 2 (H2): En ausencia de soberanía, es probable que la violencia sea masiva e indiscriminada (en un principio), limitada (posteriormente) y la ejerza quien no es soberano.

---

<sup>35</sup> THOMPSON, Robert. Derrota de la insurgencia comunista. New Cork: Praeger, 1966. p. 25

Hipótesis 3 (H3): Cuando la soberanía es fragmentada, es probable que la violencia sea masiva y selectiva, y ambos actores políticos la ejerzan<sup>36</sup>.

En el Sur de Bolívar colombiano es posible evidenciar que la violencia masiva y selectiva se profundizó después que las áreas que controlaba la guerrilla comenzaron a ser disputadas por los paramilitares y el ejército, es decir, cuando se fragmentó la soberanía mantenida durante décadas. Sin embargo, como se detallará más adelante en el caso colombiano, con especial énfasis en las zonas de colonización, es necesario profundizar en la variable de los intereses económicos en las regiones de frontera, entre ellos, los cultivos ilícitos, porque las acciones contra la guerrilla del ELN y las FARC no simplemente son consecuencia de una estrategia por la recuperación de la soberanía nacional.

Hasta aquí, las reflexiones de los teóricos se concentran en el ámbito de las relaciones entre los actores políticos y la población, pero no se ha hecho referencia al nivel de las relaciones *en el seno de* la población, es decir, las dinámicas intracomunidad, que son parte importante de este trabajo de investigación.

Aunque puede ser efectiva, la violencia selectiva resulta difícil de lograr debido a que para los actores es complicado saber con exactitud quiénes y mediante qué mecanismos, integrantes de la población entregan información al enemigo, por lo cual la violencia selectiva exige información. En la mayor parte de los casos, “la clase de información que se requiere para la violencia selectiva es confidencial y, en consecuencia, se distribuye de manera asimétrica entre los actores políticos y los civiles”<sup>37</sup>.

Canalizar esta información a los actores políticos depende, a menudo, de complejas dinámicas intracomunidad por ello el error en que se incurre a menudo en la investigación en Ciencia Política al considerar únicamente que la violencia es un proceso que se puede entender sólo a partir de un análisis de lo que hacen los actores políticos. En la mayoría de los casos, no se tienen en cuenta los incentivos y las estrategias de los individuos y de

---

<sup>36</sup> KALYVAS, Stathis N. Esbozo de una teoría de la violencia en medio de la guerra civil. Análisis político. Bogotá: Universidad Nacional No. 42. p. 12

<sup>37</sup> KALYVAS, Stathis N. op.cit., p. 13.

las comunidades, tanto en relación con los otros actores políticos como con referencia a otros individuos y comunidades. Tal vez la razón más obvia de tal abandono es la dificultad de conceptualizar, investigar y recolectar información de manera sistemática a nivel de la comunidad y a nivel del individuo, trabajo que por tradición se ha asignado a los antropólogos sociales.

Al lado de ello, el tratar de conceptualizar sobre la acción de los individuos y los grupos como uno solo se comete el error que pasa por alto la realidad de los grupos en medio de la violencia, por un lado estos grupos evidencian grandes divisiones, por otro, gran parte de esa misma violencia se relaciona con la dinámica intragrupal.

La violencia selectiva termina siendo una herramienta que pueden usar todos los actores del conflicto. Las denuncias que adelantan unos actores sobre otros tienen su origen en todo tipo de conflictos locales, ligadas al conflicto o generadas por el conflicto mismo. Sin embargo, los investigadores de este fenómeno están de acuerdo en que la mayoría de las denuncias están motivadas por intereses individuales, en muchos casos asociados a resolver intereses privados aprovechando la situación de desazón que dejan los fenómenos violentos. La mayoría de las denuncias se hacen con el fin de causar daño.

Como afirma Kalyvas: “los individuos que a menudo están dispuestos a denunciar a sus vecinos con el propósito de obtener beneficios materiales o de otro tipo, y que hasta llegarían a sentirse felices de que desaparecieran de su vista, es poco probable que, en condiciones normales los asesinen, o bien porque les repugna un acto que transgrede el orden legal establecido en tiempos de paz, porque los disuaden los castigos o sanciones que se asocian con el asesinato en tiempos normales”<sup>38</sup>. La situación de conflicto interno convierte desafortunadamente en una opción tentadora el denunciar a los enemigos personales cuando uno de los actores políticos asume todos los costos de la violencia, elimina las posibles sanciones, o llega incluso a reemplazarlas por beneficios morales y/o materiales.

---

<sup>38</sup> KALYVAS, Stathis N. op.cit., p. 15.

El mecanismo de la denuncia no sólo brinda beneficios, también conlleva riesgos considerables. Desde el punto de vista de las tesis racionales, los individuos que están dispuestos a denunciar a sus vecinos lo harán casi siempre únicamente cuando los beneficios de esta acción superen el costo que ella implica. Por supuesto, el principal costo de la denuncia es el riesgo de los castigos futuros que confronta el denunciante. En las sociedades predominantemente rurales como por ejemplo la del Sur de Bolívar, la visibilidad es alta y es posible rastrear las denuncias, con relativa facilidad; allí, las sanciones adoptan la forma de retaliación contra el denunciante por parte de los allegados a la víctima, casi nunca por medios legales o tomando la justicia por sus propias manos, sino acudiendo al actor político contrario o, cada vez con más frecuencia, al mismo actor que perpetró el acto inicial.

Lo anterior es evidente en el caso de las regiones colombianas, tanto en tiempos de dominio de la guerrilla como de dominio paramilitar. Jan Gross en un estudio citado por Kalyvas describe como *la "privatización de la autoridad"* cuando en los conflictos internos el Estado se entrega en concesión a individuos de la región (guerrilla o paramilitares), éstos utilizan su recién adquirido poder para luchar por sus intereses personales y ajustar cuentas pendientes.

Muchos actos de violencia que dan la impresión de originarse en motivaciones exclusivamente políticas o ideológicas, después de un examen minucioso resultan ser causados no por cuestiones políticas, sino por odios personales, venganzas y envidia. Diferente a buena parte de las interpretaciones sobre el conflicto colombiano aquí se intenta sustentar el carácter localista y personalista de nuestro conflicto, evidente al profundizar en la situación particular de determinadas regiones, como el caso del Sur de Bolívar en el Magdalena Medio, donde los individuos tienen a su alcance un incentivo que les permite convertir a un enemigo personal en una amenaza política y, por consiguiente, utilizar a una organización política para ajustar sus cuentas personales. Problemas no resueltos en el pasado, competencia económica, rivalidad política por el acceso a cargos públicos o de elección popular, venganzas personales por conflictos históricos entre familias, parecen ser los casos más representativos de conflictos locales que se amparan en la situación violenta para resolverse. En condiciones normales y de relativa paz dichos conflictos locales no conducirían necesariamente a la violencia homicida.

Por ello, para entender la violencia, se deben tener presentes las escisiones locales en lo cual los estudios sobre élites políticas y económicas locales y subregionales es fundamental. Sin embargo, el desarrollo del mismo conflicto interno puede originar nuevas escisiones locales porque el cambio de poder a nivel local puede perturbar arreglos delicados.

**Los civiles: actores pasivos e invisibles o actores activos en los conflictos, ¿Quién manipula a quién?**

Como trae a colación Kalyvas, la interacción de los puntos políticos y privados en los conflictos internos se ve representada en un rompecabezas crucial que fue sucintamente expresado en la famosa formulación de Lenin: *Kto kovo?*: ¿Quién está llevando a quién de la mano? ¿Quién manipula a quién? ¿Están los actores centrales usando a los locales, o es todo lo contrario?

Buena parte de las investigaciones sobre este tipo de conflictos argumentan que los individuos, los civiles son manipulados por cada uno de los actores en contienda en pos de sus objetivos políticos. Ellos son vistos como víctimas, o simplemente desaparecen de escena en sus estudios que muestran que las acciones son dirigidas por “otros”. Esta teoría no es necesariamente inexacta, especialmente cuando el enfoque es justo sobre la parte visible de la violencia; sin embargo, socava o niega categóricamente que existan también “instigadores” cuya participación es esencial para transformar el resentimiento en violencia.

Estudios recientes para el caso de Colombia como el publicado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH sobre la violencia en el departamento de Cundinamarca, sustentan que los civiles no pueden ser tratados como actores pasivos, manipulados o invisibles; más aún, ellos con frecuencia son productores indirectos de la violencia y en ocasiones, manipulan a los actores centrales para que arreglen sus propios conflictos. En ese mismo estudio se remarca que la mayor parte de los análisis tienden a ignorar el carácter poligonal de las confrontaciones armadas

internas y terminan por caracterizar a las organizaciones irregulares como bandos delimitados con comandantes, frentes y combatientes identificables, obviando el papel de las poblaciones en la disputa territorial. Como bien lo argumentó Kalyvas, en Colombia es evidente que la confrontación armada implica un número reducido de enfrentamientos directos entre los combatientes, en contraposición con un número elevado de acciones en las cuales los civiles se ven involucrados de diversas maneras<sup>39</sup>.

Las rupturas locales y la dinámica intra-comunitaria deben ser incorporadas dentro de las teorías de la guerra civil. Contrario a Hobbes, los conflictos internos no se pueden reducir a un mero mecanismo que permite la acción del azar y anárquicamente desata una violencia privada. La violencia privada es generalmente constreñida por las modalidades de alianzas que de ser explotadas sistemáticamente dan grandes resultados a los actores. En los conflictos internos se promueve la interacción entre los actores con distintas identidades e intereses, por ello, es la convergencia de los motivos locales y los imperativos supra-locales lo que dotan a estos conflictos de su carácter particular y conduce a una violencia conjunta que dificulta hacer una división entre lo político y lo privado, lo colectivo y lo individual.

Muchas de las descripciones detalladas de la violencia que hace Kalyvas sobre países de África sugieren la presencia de considerable suministro e iniciativa locales en la producción de ésta. En lugar de ser impuesta sobre las comunidades por extraños, esta evidencia sugiere que la violencia, con frecuencia, crece desde el interior mismo de las comunidades aun cuando ésta sea ejecutada por forasteros; en otras palabras, es “íntima”.

Alfredo Rangel por ejemplo, en el citado estudio sobre Cundinamarca, demuestra que en su análisis sobre la fisiología de los grupos violentos, específicamente en el proceso seguido para la creación de nuevos frentes de la guerrilla hay “una constante relación entre la organización armada y la población, que puede ser voluntaria u obligada”<sup>40</sup>. Incluso, un fenómeno de crisis humanitaria tan difícil de manejar como es el

---

<sup>39</sup> OBSERVATORIO PRESIDENCIAL DE DD.HH Y DIH. Dinámica reciente de la confrontación armada en Cundinamarca. Bogotá, 2004. p. 35.

<sup>40</sup> RANGEL, Alfredo. Citado por: OBSERVATORIO PRESIDENCIAL DE DD.HH Y DIH. Op. Cit., p. 36.

desplazamiento de la población de las zonas rurales a las ciudades intermedias y capitales, dicha relación puede continuar en la medida en que como Rangel muestra con testimonios de muchos combatientes “las personas provenientes del campo traen consigo el conocimiento de la guerrilla y una relación con nosotros (ellos) de tiempos anteriores”<sup>41</sup>

Los relatos sobre los actos perpetrados por la guerrilla, los paramilitares o la fuerza estatal en distintos conflictos en el mundo, revelan que la violencia en las guerras civiles entraña a menudo la participación de los miembros de la comunidad, quienes actúan ya sea como proveedores de la información o como participantes en forma más directa. La dependencia de los actores políticos sobre la información local es típicamente expresada por el uso muy difundido de las listas negras.

La participación local es compatible con todo tipo de motivos, desde el más ideológico hasta el más oportunista. La evidencia sugiere que un motivo clave es el que arregla las disputas privadas no relacionadas con la escisión principal de la guerra (étnica, religiosa, política). Muchos actos de violencia que para los externos parecen haber sido generados por motivaciones exclusivamente políticas, resultan con frecuencia después de un análisis más profundo, haber sido causados por odios personales, venganzas y envidia.

Tal como argumenta Kalyvas en otro de sus textos, varios pensadores a lo largo de la historia demuestran la importancia de los elementos privados y personales en las situaciones de violencia. Tucídides sostiene que “el crimen personalmente motivado enmascarado por un pretexto político es una de las características esenciales de la guerra civil”. Maquiavelo describe la situación donde “motines políticamente motivados ofrecen un pretexto para la violencia privada”. Tocqueville por su parte, argumenta que “el interés privado siempre juega el mayor papel en las pasiones políticas y es hábilmente escondido bajo el velo del interés público”<sup>42</sup>.

Lo anterior de ninguna manera quiere decir que conflictos internos sean simplemente agregación de feudos privados y conflictos locales. Lo que se pretende es precisamente

---

<sup>41</sup> Testimonio de guerrillero entrevistado en el estudio de Alfredo Rangel “Las FARC – EP: una mirada actual”, Citado por: OBSERVATORIO PRESIDENCIAL DE DD.HH Y DIH.2004. *Op. Cit.*, p. 37.

eliminar la pretensión de totalidad que tienen los estudios que interpretan los hechos locales como simple extensión de las motivaciones centrales. La importancia de entrañar en lo íntimo de las localidades radica en poder evidenciar los elementos personalistas y de grupos locales en los conflictos mayores, al igual que relevar que la población no es solo víctima sino que en muchos casos, individuos y grupos de ellos son protagonistas e incluso aprovecha en su favor la situación de zozobra que causa la violencia.

No en todas las zonas los grupos armados operan bajo la misma racionalidad y objetivos ni todos los territorios son mirados por ellos bajo la misma óptica y según los mismos intereses. Existen según Carlos Ortiz<sup>43</sup>, por lo menos cuatro modos de relacionarse los habitantes de un municipio dado con el actor armado presente en ese municipio, según las posibilidades de combinación entre el miedo y la adhesión:

- la del adherente político por razones más o menos programáticas;
- la del adherente político por razones no programáticas sino de conveniencia o utilidad, ligadas más con las estrategias individuales que con las estrategias colectivas como el caso colombiano de las relaciones entre las FARC con los cultivadores y raspachines de coca cuya adhesión se alimenta por la utilidad económica;
- la intermedia entre adhesión programática y de conveniencia como los casos en los que se apoya a sindicatos o mediante apoyo político a candidatos en las campañas electorales sin peligro de ser secuestrado o incluso asegurando la votación mayoritaria, bajo presión de las armas. En este nivel se puede incluir también la proclividad de adolescentes y jóvenes a enrolarse en las filas de los grupos armados, guerrillas o paramilitares, presentes en las zonas rurales al encontrar en esta institución un medio de promoverse, de movilidad social, y la oportunidad de manejar un arma.
- La que se sustenta principalmente en el miedo expresado en que una vez instalado un grupo armado la mayoría de los habitantes de esa área, tienden a aceptar como un hecho su autoridad, fundada únicamente en el uso y la intimidación del arma, tras lo cual empieza el proceso inverso de des-

---

<sup>42</sup> KALYVAS, Stathis N. La Ontología de la violencia política: acción e identidad en las guerras civiles. Bogotá: Universidad Nacional. Sept/Dic 2004. P. 51-76.

<sup>43</sup> ORTIZ, Carlos Miguel. Actores armados, territorios y poblaciones. En: Revista Análisis Político. No. 42. p. 67-75.

institucionalización de los poderes legales a nivel local, que ahora más que antes se reducen al formalismo.

En este último caso, la actitud de pasividad aparente de la población nace espontáneamente de un cálculo implícito de los habitantes sobre la correlación de fuerza desfavorable como estrategia de sobrevivencia, y no representa una adhesión surgida de intereses comunes coincidentes con los armados, ni siquiera del reconocimiento de éstos como alternativa promisoría, sino de una situación pasajera que es preciso aceptar porque no se ve posibilidades reales de trastocarla. Como trae a colación el mismo Rangel con testimonio de un guerrillero del Frente 22 de las FARC, “el perro viene con las pulgas, y en algunas zonas unos ven al perro, y otros piensan en las pulgas (...) en la revolución también funciona, porque lo reconocen a uno. Después con el trabajo de masas la imagen cambia”<sup>44</sup>

Lo más que se reconoce a esos ocupantes es una función sustituta de las funciones del Estado, particularmente en los campos de la justicia penal y de la seguridad en razón de lo cual por ejemplo, es común el ataque contra delincuentes tales como ladrones y abigeos.

Con insistencia se ha dicho que en el conflicto actual los distintos grupos armados ilegales no tienen apoyo de la población y por tanto se deberían considerar como organizaciones predatorias que solo buscan su interés particular y que gracias a los hechos del 11 de septiembre, todas deben ser consideradas como organizaciones terroristas. Al respecto, Kalyvas llama la atención sobre el hecho de que estas afirmaciones se hacen con información incompleta debido a que las conclusiones se toman de argumentos recogidos únicamente de las víctimas. Para ampliar el espectro de análisis, el citado informe sobre violencia en Cundinamarca utiliza el concepto de red, entendida como “el entrelazado de relaciones entre un conjunto de personas unidas, directa o indirectamente por varios compromisos y comunicaciones”<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> RANGEL, Alfredo. Citado por: OBSERVATORIO PRESIDENCIAL DE DD.HH Y DIH. Op. Cit., p. 37

<sup>45</sup> OBSERVATORIO PRESIDENCIAL DE DD.HH Y DIH. 2004. Op. Cit., p. 39.

Se trata de redes clandestinas que según Pino Arlacchi, son un tipo de relación social ubicada entre el clan y la burocracia, en la medida que por razones de seguridad, los contactos son cara a cara compartiendo de alguna medida metas colectivas y además tienden a perpetuarse en el tiempo. Dichas redes son parte de un entramado social más amplio, “forman un subconjunto dentro de la organización social, más no son representativas de la misma”<sup>46</sup>. El sociólogo Andrés Suárez considera que la constitución de estas redes organizacionales son fruto de diversas estrategias desplegadas dentro de un proceso escalonado de contactos con distintos agentes del escenario local. Así, se identifican tres grandes fases para esta configuración: conformación de redes formales externas al ámbito local encargadas de asegurar la financiación y la legitimación; establecimiento de contactos con agentes de las redes sociales existentes en los escenarios locales y finalmente la conversión de los agentes contactos en “nodos” que dan forma a una red organizacional endógena informal pero inmersa en el mundo local.

De esta manera, las redes informales de los grupos armados ilegales se constituyen por agentes que sin hacer parte de la organización armada si trabajan al servicio de ésta en las zonas rurales y urbanas de las áreas más conflictivas. Dentro del trabajo de las organizaciones uno de los aspectos centrales para la red lo constituye la identificación de los nodos, muestra del continuo relacionamiento del actor armado con la población civil. La red le permite a la guerrilla y los paramilitares, entre otros, el suministro de información sobre la presencia y la movilidad del enemigo, así como la identificación de posibles objetivos económicos; el aprovisionamiento o abastecimiento para el sostenimiento de los hombres en lucha; el camuflaje de combatientes cuando deben realizar labores específicas dentro de espacios civiles o gubernamentales y el reclutamiento de nuevos miembros para la organización y la expansión de los grupos de apoyo. Todo ello no sería posible si no existiera continuo relacionamiento con la población civil.

De allí que por ejemplo, la incursión paramilitar en su etapa inicial se concentre en la identificación y destrucción de estas redes clandestinas de apoyo a la guerrilla y la creación de unas nuevas. Incorporar excombatientes del bando contrario se convirtió en una estrategia para “dar dedo” es decir, señalar las posibles víctimas, labor que en zonas

---

<sup>46</sup> OBSERVATORIO PRESIDENCIAL DE DD.HH Y DIH. 2004. *Op. Cit.*, p. 40.

rurales de regiones como el Magdalena Medio se vio favorecida por el malestar de varios sectores de élites políticas y económicas locales, víctimas de acciones perpetradas por la guerrilla. Los grupos paramilitares justificaron el ciclo de violencia desatada a su llegada, refiriéndose a las víctimas como apoyos a la guerrilla, afirmación que debe tomarse en su justa dimensión en la medida que operaron varias lógicas de la guerra, por ejemplo el tener que haber desatado oleadas de terror indiscriminado como demostración de fuerza para lograr el sometimiento de poblaciones enteras o las aspiraciones de reconocimiento y escalamiento de posiciones de aquellos recién incorporados del bando contrario, a partir de demostrar lealtad mediante cantidad de señalamientos para producir muertes.

La violencia selectiva de estos grupos exige información que siempre es confidencial aunque como ellos lo demuestran, es posible conseguirla por la fuerza, y la intimidación. La relación población – grupos armados ilegales encaja con la definición de Kalyvas como “dinámicas intracomunitarias”, las cuales impulsan los flujos de información desde los individuos hasta los jefes de la guerrilla o los paramilitares. Por ello se considera que “una parte importante de la violencia en la guerra es el resultado final de las transacciones o compromisos entre los agentes externos (tanto insurgentes como protagonistas políticos en ejercicio de poder) y los agentes “internos” (civiles, cuadros políticos, simpatizantes y gente del común de la región en cuestión)”<sup>47</sup>

De allí que toda organización comprometida en una guerra irregular sabe que requiere de la colaboración obligada de la población y tiene claro que el ejercicio del control territorial por parte de algunas de ellas implica la participación de civiles para su mantenimiento en grados muy diversos. Así logran por ejemplo que, como lo demuestra María Teresa Uribe en el caso de Urabá, una parte significativa de los pobladores reconozcan a la guerrilla como principio de orden colectivo y las prefirieran a las instituciones estatales para dirimir disputas y conflictos de todo orden y se sometan por consenso o por la fuerza, como en cualquier Estado, a sus mandatos y a sus prohibiciones<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> KALYVAS, Stathis. Citado por: OBSERVATORIO PRESIDENCIAL DE DD.HH Y DIH. 2004. *Op. Cit.*, p. 44.

<sup>48</sup> La historia de la violencia regional en el caso de Urabá es ampliamente analizada por: URIBE DE HINCAPIÉ, María Teresa. Violencia regional en Colombia. *En: Debats*. No. 60. Verano 1997. Instituto Valenciano de Estudios e Investigación. Valencia, 1997. p. 38-44.

La relación entre la población y los grupos armados ilegales también se evidencia en las prácticas difundidas de “la ley del monte” o “ley de los muchachos”, nombres con los cuales se conoce a la justicia guerrillera a través de la cual se resuelven muchos de los conflictos campesinos. Un estudio dirigido por Boaventura de Sousa y Mauricio García pone de relieve que el ofrecimiento a las comunidades de seguridad y de justicia es uno de los factores que contribuye a explicar el crecimiento territorial de las guerrillas y el apoyo en sectores de población. En ese mismo estudio, el investigador del IEPRI Mario Aguilera considera que: “las prácticas judiciales de los grupos guerrilleros han sido tan importantes para su proceso de expansión, como para el incremento de sus ingresos económicos lo ha sido el dinero obtenido del narcotráfico, (específicamente en el caso de las FARC), del secuestro o del sistema de tributación”<sup>49</sup>.

La explicación de la práctica de la justicia por parte de la guerrilla y su progresivo fortalecimiento en el actual conflicto colombiano debe buscarse más allá de la obvia necesidad que tiene todo grupo armado de ordenar el territorio y la gente que está bajo su influencia. En primer lugar debe mencionarse la incapacidad del Estado de atender las demandas provenientes de zonas de colonización en las últimas décadas. En estas zonas como es el caso del Sur de Bolívar y en general la mayor parte del Magdalena Medio, las organizaciones guerrilleras fueron las encargadas de imponer el orden y estimular un tipo de organización comunitaria. En segundo término, dicha situación es reflejo de la situación de crisis generalizada de nuestro sistema de justicia oficial que “no ha logrado satisfacer las demandas social por motivos de orden público o porque no ha contado con la colaboración de otras agencias del Estado; porque es una justicia paquidérmica y costosa (...); porque (...) el formalismo todavía puede derrotar el reconocimiento efectivo de los derechos y porque hay una permanente y asistemática producción de normas”<sup>50</sup>.

La justicia guerrillera de hoy no es la misma de los años sesenta porque al principio para las organizaciones fue más importante dotarse de normas disciplinarias internas. Con el tiempo y con diferencias entre una y otra agrupación, fueron descubriendo que las actuaciones judiciales frente a los civiles podían convertirse en pieza clave para garantizar

---

<sup>49</sup> AGUILERA PEÑA, Mario. Justicia Guerrillera y Población civil, 1964-1999. En: DE SOUSA SANTOS, Boaventura y GARCIA VILLEGAS, Mauricio. El Caleidoscopio de las justicias en Colombia. T. 2. Bogotá: Conciencias, 2001. p. 389.

su estabilidad y sobre todo, su expansión territorial. Hoy en día, se combina la justicia en el campo militar, surgida con el control militar de un espacio determinado que es esencialmente justicia penal, de castigo, como en el caso de justicia paramilitar, con la justicia en el campo político: civil, familiar, laboral, policiva, que pretende la configuración de una base social cuando interviene en los conflictos familiares o comunitarios en cuyo caso sustituye con alguna eficacia a las agencias del Estado y simplifica el procedimiento judicial.

De Sousa y García demuestran que ha existido una relación indisoluble entre justicia y estrategia política guerrillera, en la medida que la justicia de la guerrilla ha tratado de establecer una relación permanente con las diversas expresiones del movimiento social, especialmente ganando espacios en las organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles. De una justicia inicial tipo *ejemplarizante*, la guerrilla asumió las banderas de la *justicia retaliadora* ligada a los movimientos sociales y hoy esgrime más una *justicia del poder local*, caracterizada por relacionarse con los cambios en la democracia local introducidos en Colombia en los últimos veinte años. Se trata de una justicia que recoge muchos elementos de la justicia oficial para ofrecer rapidez, eficiencia y bajo costo en los territorios bajo su dominio; rivaliza con la justicia estatal pero en ocasiones se complementa. También es usada como instrumentalización, especialmente por aquellos vencidos en los tribunales oficiales que “apelan a la justicia guerrillera como si fuera una vía extraordinaria o una forma alternativa de revisión de sentencias”<sup>51</sup>. El asunto se vuelve más complejo cuando grupos paramilitares deseosos de ganar legitimidad a partir de inmiscuirse en conflictos locales, desalojan de su territorio a los frentes guerrilleros que emitieron el “nuevo fallo”.

Cuando se da el cambio un actor por otro en el dominio sobre un territorio y su población, la clave de dichas organizaciones está en hacer costosa la colaboración con el enemigo, incluso hacer costosa la neutralidad o la resistencia a colaborar con el “nuevo orden”, como afirma María Teresa Uribe en otra de sus obras<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> AGUILERA PEÑA, Mario. *Op.cit.*, p. 390. En la tercera parte de la obra de De Sousa y García se analizan ampliamente las dificultades de la justicia formal hoy en Colombia.

<sup>51</sup> DE SOUSA SANTOS, Boaventura y GARCIA VILLEGAS, Mauricio. *Op.cit.* p. 422.

<sup>52</sup> URIBE, María Teresa. Las incidencias del miedo en la política: una mirada desde Hobbes. En: El miedo: reflexiones sobre su dimensión social y cultural. Medellín: Corporación Región, p. 28.

Por lo anterior, los casos de Colombia en que la población se opone a la presencia y acción de los actores armados son escasos y sólo ha ocurrido después de mucho tiempo de asentamiento tanto de las comunidades como del actor armado. La naturaleza fragmentada de la sociedad colombiana, más ostensible en las zonas de colonización como el sur del país, el piedemonte llanero, Urabá y el Magdalena Medio, entre otras no ha permitido enfrentar o neutralizar actores violentos de alto grado de organización en guerra declarada con el Estado o en actividades mafiosas o delincuenciales sofisticadas. La fragmentación de estas sociedades locales, en conjunto con el miedo y la falta de identidad permiten el imperio de la ley del silencio; allí los actores organizados construyen su poder, sin palabras, pero como afirma Pecault “con hechos y con gestos”<sup>53</sup>.

En Colombia, lo que sí ha sido relativamente frecuente es el relevo de un actor violento por el contrario, como recurso de los habitantes para sacudirse de un yugo que se ha hecho demasiado ominoso o por efecto de lucha por el control territorial y de poblaciones en la búsqueda de dominio sobre actividades ilícitas como coca y robo de gasolina.

La presencia de los actores enfrentados es ambivalente, el mismo Carlos Ortiz señala que: por un lado, promueven de alguna manera formas de organización y a veces de solidaridad bajo su férula, pero impiden cualquier brote de organización cuando es civil y autónoma; atacan al Estado, pero ejercen hasta cierto punto funciones de índole estatal, como las de policía y justicia; pretenden disminuir los homicidios “banales” pero aumentan los asesinatos selectivos y, con el tiempo, los homicidios en general como efecto de las querellas de poder y las motivadas por conflictos locales anteriores, arraigan inicialmente en las poblaciones por sus ofertas de seguridad pero en muchos casos han terminado practicando abusos y amedrentando de tal modo que exasperan a las poblaciones y auspician la necesidad de armarse contra ellos, provocando el surgimiento y apoyo de otros grupos armados de signo contrario<sup>54</sup>.

De esta manera, en los conflictos armados internos la cadena de homicidios, secuestros y toda clase de violaciones se da finalmente en el marco del enfrentamiento de actores

---

<sup>53</sup> Citado por ORTIZ, Miguel. *Op. Cit.*, p. 74.

armados organizados, cuyo accionar reproduce cotidianamente en el territorio y al interior de las poblaciones, las condiciones y el pretexto para hacer valer por la fuerza, todo tipo de pretensiones atomizadas y dispersas, que dan como resultado una mezcla confusa con reivindicaciones colectivas, políticas, sindicales, económicas, familiares, que dicho en palabras de Carlos Ortiz refiriéndose a Colombia, se convierten en “un popular rebusque a través del recurso de la muerte y a la sombra de la violencia política”.

Toda esta suerte de circunstancias estructurales, de lógicas de los actores armados de la guerra, las características de los distintos territorios del país y el papel jugado por los civiles, dan una configuración particular a la realidad de la violencia colombiana por lo que es necesario adelantar un breve recorrido histórico por las distintas fases que se han sucedido desde mediados del siglo pasado que luego permitan especificar los elementos particulares para comprender las expresiones en el Magdalena Medio, especialmente las de los últimos quince años.

### **La Violencia Política en la segunda mitad del siglo XX en Colombia**

La violencia colombiana como plantea Daniel Pecaut<sup>55</sup>, tiene que ver más con los espacios vacíos que ha dejado el Estado en la sociedad, que con los abusos que éste pueda presentar en todo el país; por ello, es posible hablar de un “territorio virtual de la Nación Colombiana” donde las regiones y territorios de “cuentos de hadas” con pleno control y dominio estatal son ilusorios, en cambio se puede hablar de un vasto territorio que debido al desarrollo precario y selectivo del Estado y a su forma indirecta de manejarlo, presenta una aguda carencia de presencia pública operativa y de instituciones estatales autónomas independientes del conflicto y de los actores armados. Esta dinámica de omisión estatal no se aleja del grupo o comunidad que “representa”, convirtiendo estas falencias estatales en el reflejo de la sociedad que lo constituye y que a su vez se niega a verse reflejada y expresada por él.

---

<sup>54</sup> ORTIZ, Miguel. *Op. Cit.*, p. 75.

<sup>55</sup> PECAUT, Daniel. ¿Es posible aún una interpretación global de los fenómenos recientes de Violencia en Colombia?. *En Boletín Socioeconómico No. 27*, Universidad del Valle, junio de 1994, p. 169.

La historia del siglo XX en Colombia como lo afirma Malcom Deas<sup>56</sup> es el reflejo de la intención de ampliar la presencia del Estado en los lugares donde el desarrollo fragmentado de representación local va de la mano con la precaria prestación de servicios y su efímero monopolio del poder y la fuerza. La violencia política refleja la búsqueda del poder en los lugares donde el Estado escasamente puede reclamar el monopolio de la fuerza; allí, los diversos tipos de disputas y negociaciones con las autoridades sociales, locales o regionales que manejan el poder y el control<sup>57</sup> en la zona, se encuentra delimitadas por los parámetros que impone la guerra.

Así, la violencia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia no es un proceso continuo, su estudio necesita periodización que refleje los diferentes ritmos y características. Muchos investigadores dividen la segunda parte del siglo XX en cuatro grandes fases<sup>58</sup>: la “violencia bipartidista”, la “violencia mafiosa”, la “violencia guerrillera” y la “violencia de los noventa: narcotráfico y crimen organizado”. En cada uno de ellas es posible dar cuenta de elementos explicativos internos y de carácter internacional.

**Primera:** Violencia del sectarismo partidista que empezó en las campañas electorales de 1945-1946 y terminó en 1953. La violencia de mediados de siglo desde el punto de vista de los factores internos de la política colombiana, resulta por un lado, de la confrontación abierta de las élites liberales y conservadoras por imponer desde el Estado nacional un modelo de modernización y por otra, del sectarismo localista exacerbado en varios territorios de la geografía nacional.

En los municipios de alto riesgo se emprendían operaciones de limpieza sectaria en las veredas dominadas por el partido minoritario en el municipio, a las que seguía la venganza casi inmediata, en particular si el municipio colindante era un rival político. Este patrón de violencia tomó gran fuerza tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, líder del partido liberal y virtual siguiente presidente del país, el 9 de abril de 1948, especialmente

---

<sup>56</sup> DEAS, Malcom. *Canjes Violentos: Reflexiones Sobre La Violencia Política En Colombia*. En *Dos Ensayos Especulativos Sobre La Violencia En Colombia*. FONADE, DNP Bogotá. 1995. p. 4.

<sup>57</sup> Fernán González señala que el monopolio del poder y de la fuerza, no es el resultado natural y espontáneo del desarrollo de toda sociedad, sino el producto de un proceso social de construcción de interdependencias funcionales, de la transformación del papel de los intermediarios locales y regionales, y de una mayor integración territorial y social.

en las áreas rurales de la cordillera oriental, el Valle del Cauca y Nariño. En muchas ciudades y pueblos se replicaron los motines de Bogotá. Estos episodios del 9 de abril marcaron un hito definitivo en la política y en el transcurso de la violencia.

La confrontación entre las élites alcanzó el clímax en el segundo semestre de 1949 siendo uno de los detonantes el ascenso del conservador Laureano Gómez a la presidencia. En 1950 la violencia se extendió a muchas otras zonas del país.

La resistencia liberal trató de organizarse en guerrillas. Por momentos la violencia bipartidista tomó carácter de guerra civil, pero ni el gobierno ni los jefes liberales la formalizaron. Los liberales eligieron ser dirigentes civilistas antes que los jefes de pueblos sublevados, con todo y ellos, al interior de conservadores y liberales se crearon varias facciones.

La violencia aceleró la colonización de tierras de frontera interna, un proceso que marcó todos los periodos de violencia del siglo XX. Liberales y conservadores de diversas regiones, huyendo del flagelo del exterminio bipartidista “abrieron monte” en tierras prácticamente inexploradas y alejadas de los centros de poder y de la presencia del Estado, en el Sur del país, los Llanos Orientales, el Urabá y el Magdalena Medio. Tiempo después este factor se convertiría en una de las principales explicaciones para la reproducción de la violencia.

En el orden internacional, la guerra fría también ejerció gran influencia pues permitió en muchos círculos alinear a los liberales con los comunistas, en lo cual la iglesia colombiana jugó un fuerte papel. Dicho alindamiento facilitó el alejamiento de las élites del pueblo y tuvo un efecto unificador en ellas, lo que facilitó el diseño de operaciones de exterminio del contradictor político desde los directorios de los partidos. En el momento más álgido de la confrontación, los líderes liberales fueron exiliados; al llegar Rojas Pinilla al poder promovió una amnistía y las guerrillas liberales se desmovilizan en el segundo semestre de 1953.

---

<sup>58</sup> La periodización tomada en el presente trabajo pertenece a: PALACIOS, Marco y SAFFOR, Frank. Colombia: país fragmentado,

**Segunda:** Violencia mafiosa de 1954 hasta 1964. La violencia se condujo a través de redes partidistas y facciosas, aunque su objetivo era interferir en el mercado del café, de mano de obra en las fincas cafeteras y en el mercado de tierras, de una zona del país en plena expansión, con pequeños propietarios en ascenso social y político.

Esta fase de la violencia tomó la forma de empresas criminales con móviles y objetivos económicos pero quedó encubierta por la lucha fratricida bipartidista de la fase anterior, afectó especialmente las vertientes cafeteras del gran Caldas, el norte del Valle del Cauca, el norte del Tolima y el macizo de Sumapaz. El desorden se acentuó en el cinturón cafetero cuando aparecieron bandas armadas que, aunque ligadas a las luchas partidistas y a los gamonales, crearon sus propios espacios y sus propias reglas. Al comienzo el negocio de fonderos comprando café robado y mayordomos o agregados vendiéndolo funcionó sin necesidad de las cuadrillas.

Las bandas surgieron de la confrontación bipartidista pero pronto muchos propietarios ante el temor de ser arrasados por sus enemigos acudieron a ellas. Unieron negocio y conflicto político. Mientras las cuadrillas conservadoras comerciaban con café robado, las liberales se dedicaban al abigeato. Del café y el ganado se pasó a la compraventa de fincas, extorsionando y haciendo huir a los propietarios. En los pequeños pueblos de la zona consolidados por la economía cafetera prosiguió el negocio de la violencia. La modalidad del “pájaro” o asesino a sueldo reapareció, consolidando modelos mafiosos de control sobre el comercio de las ciudades y eliminación de competidores. Con el Frete Nacional, concebido como un movimiento de paz, las élites tuvieron la intención de extender el poder del Estado Nacional a las localidades azotadas por la violencia, por ello, bandas y gamonales quedaron ante la alternativa de desmovilizarse o enfrentarse a la autoridad. Los liberales recientes y algunas bandas se pasaron al MRL y desaparecieron tras una larga serie de confrontaciones.

En el orden internacional, el incremento de la demanda de Estados Unidos y Europa y los precios favorables, jalonaron la expansión de la frontera agrícola cafetera y las intenciones de las élites económicas y políticas locales y regionales por hacerse al control

de un negocio próspero que incluía apropiación de las cosechas y en muchos casos apropiación de las mismas tierras.

**Tercera:** la violencia guerrillera que va desde principios de los sesenta por el impacto de la Revolución Cubana, hasta fines de los ochenta cuando se produce el colapso del sistema Soviético. Varios factores podrían explicar el surgimiento del fenómeno y su expansión. En el orden interno, los continuos fracasos de la política agraria que dejó siempre aplazada la reforma que dotara a los campesinos de tierra para trabajar y el hecho de que las anteriores etapas de la violencia arrojaran a gran cantidad de familias a buscar oportunidades en zonas bajas y planas o en el piedemonte de las cordilleras donde fue posible la apropiación de tierras para cultivo y pequeña ganadería. Nueve zonas se constituyeron con este patrón en el país: **Magdalena Medio**; Urabá-Darién; Caribe-Sincé-San Jorge; Serranía del Perijá; Zonas del Pacífico (Nariño y Chocó); Saravena-Arauca; Piedemonte de la Orinoquía; Ariari-Meta y Caquetá-Putumayo.

Precisamente en estas zonas de colonización rural, carentes de infraestructura e instituciones que posibilitaran su integración y desarrollo y donde el Estado no ejerce ningún control efectivo, también se convirtieron en el lugar de surgimiento y asentamiento de los grupos guerrilleros en la década del sesenta.

A estas circunstancias estructurales internas se une la influencia externa de la guerra fría y los postulados leninistas, guevaristas y maoístas que sirvieron de inspiración ideológica a las FARC y el ELN. Las dos organizaciones guerrilleras han tenido como base el mundo rural y las regiones de frontera interna. La insurgencia urbana en forma de terrorismo, ha sido más bien excepcional. El cambio del mapa geopolítico debido a las transformaciones del régimen socialista en la Unión Soviética y Europa del Este implicó transformaciones, especialmente en la definición de nuevas fuentes de financiación y estrategias para prolongar la lucha armada.

**Cuarta:** Narcotráfico y crimen organizado. Empieza a finales de los ochenta y se mantiene hasta la actualidad; ofrece una combinación de escenarios de guerra insurreccional de baja intensidad y de guerras mafiosas. Las zonas de colonización se

han convertido cada vez más en zonas traumáticas, altamente conflictivas y violentas. El vacío de poder del estado ha sido ocupado por los actores ilegales.

El surgimiento del narcotráfico, primero con la marihuana en los setenta y luego con la coca y la amapola configuró un amplio grupo que dominó el cultivo, procesamiento y comercialización hacia EEUU y Europa. En el caso de la coca, Colombia pasó de ser el principal procesador de pasta oriunda de Perú y Bolivia a ser el principal productor. Amplias zonas del Sur del país, el Magdalena Medio y el Catatumbo soportaron la tumba del bosque y la plantación de coca. En un principio los narcotraficantes hicieron alianzas funcionales con las FARC en el sur del país y con los paramilitares en el Magdalena Medio para proteger su negocio, pero a partir de la presión internacional para lograr de Colombia acciones efectivas para disminuir el envío de droga hacia el exterior y las exigencias de lograr la captura de la cúpula del cartel de Medellín, las cosas cambiaron.

Dado de baja Pablo Escobar y capturados los integrantes del Cartel de Cali el cultivo, procesamiento y comercialización de la droga ha pasado de manos de los grandes carteles a los actores armados o alianzas entre estos y pequeños grupos de narcotraficantes de bajo perfil. A partir de entonces la lucha por el control sobre la cadena productiva de los cultivos de uso ilícito ha sido uno de los principales motivos de las confrontaciones directas o el asesinato de los señalados como “simpatizantes” o “colaboradores” de uno u otro bando. El narcotráfico es la principal fuente de financiación de la guerrilla y los paramilitares hoy, causante de la transformación de los valores y de la profundización de la corrupción y el desdibujamiento del Estado Social de Derecho en zonas de conflicto.

El conflicto armado en los años noventa se maneja alrededor de dos ejes que responden a las dimensiones “objetivas” y “subjetivas” de la violencia. La evolución histórica de los actores armados en conflicto en especial las FARC y AUC muestra el desarrollo gradual pero continuo de planes estratégicos de expansión. Como bien lo sugiere un reciente estudio<sup>59</sup>, en el centro de la confrontación pareciera que sigue el tema agrario aunque con connotaciones distintas a las de los años 60, las FARC nacen en zonas de colonización

campesina periférica y se proyectan hoy en regiones ricas e integradas pero con profundas desigualdades sociales a su interior, por su parte, las autodefensas aunque se originan en zonas ricas con poderes locales consolidados, avanzan hoy en áreas de colonización periférica.

Las guerrillas hoy ya no son portadoras de un proyecto político tradicional. Se distinguen hoy por su localismo y bandolerización. Ya no buscan el poder para hacer la revolución socialista, sino que se dedican, aprovechando la corriente descentralizadora desatada después de la Constitución de 1991, al control clientelar de muchos gobiernos locales para ampliar el control territorial y negociar mejor la desmovilización cuando llegue el momento oportuno. Así, de ser agrupaciones de campesinos y universitarios “altruistas” más motivados por razones de agravio que de codicia, las actuales guerrillas son una próspera empresa militar de combatientes a sueldo que se financia de la actividad ilícita del narcotráfico, la extorsión a empresas que explotan hidrocarburos y minerales, el sometimiento de las administraciones municipales, el secuestro y el boleteo, entre otros. En esta nueva fase, no hay señales objetivas para asegurar que las FARC y el ELN estén preparados para librar una guerra regular, pero tampoco para pactar la desmovilización, salvo en el caso de ésta última a quien las acciones militares del Estado y de los paramilitares la ha debilitado en gran forma.

Las FARC pasaron de ser “una guerrilla asentada en los aislados e inhóspitos parajes selváticos del polígono sureste del Tolima-Huila y se convirtieron, por medio de la colonización armada, en un verdadero potenciado por el manejo y control de las economías cocaleras”<sup>60</sup>.

Los paramilitares por su parte, aparecen ante el público a comienzo de los años ochenta en el Magdalena Medio como la fuerza contrainsurgente verdaderamente efectiva. El paramilitar empieza siendo auto defensivo enraizado en una sociedad rural y de frontera. Con el tiempo algunas autodefensas reciben patrocinio de viejos y nuevos señores de la

---

<sup>59</sup> GONZALES Fernán, BOLIVAR, Ingrid, VASQUEZ, Teófilo. *Violencia Política en Colombia de la Nación Fragmentada a la Construcción del Estado*. Cinep. Bogota 2003.

<sup>60</sup> GONZALES Fernán, BOLIVAR, Ingrid, VASQUEZ, Teófilo. *Op. Cit.*, p. 53-54.

tierra como los narcotraficantes y desde 1990 la imagen que quieren ofrecer es la de legítima defensa y carácter preventivo.

Lo que se suele llamar paramilitar puede ser un actor local, un grupo de jóvenes de la comunidad que, defendiéndose de las guerrillas, mantiene relaciones ambiguas con el ejército, los políticos locales y los terratenientes. En otras zonas el paramilitar se asocia a un combatiente externo a la localidad, que llega en plan de “matón”, encuadrado en una organización vertical remota. Sin embargo, el modelo operativo copia al modelo guerrillero, saliendo de sus campamentos a buscar áreas donde se presume una influencia real o potencial de las guerrillas.

Los campamentos paramilitares se establecieron desde principios de los 80 en parajes del Magdalena Medio, Córdoba, Urabá, Meta y Putumayo. Puerto Boyacá y el Magdalena Medio en general ofrecen el paradigma paramilitar que se aplicó en otras zonas; posteriormente Córdoba se convirtió en un centro de difusión paramilitar al norte del país. Los paramilitares buscando legitimación desatan oleadas de masacres para amedrentar gobiernos y adquirir status de actores públicos; tienen gran rechazo en amplios sectores de población urbana pero gran aceptación en otras zonas como Urabá, en donde pasaron a una fase de legalización a través de las Convivir, cooperativas que asumieron el papel de guardianes del orden creadas con el impulso de la Gobernación de Antioquia.

El eclipse de las grandes mafias de la droga restó recursos a los paramilitares. Se reorganizaron a mediados de los 90 para disponer acciones de autodefensa en lo local y una organización móvil y centralizada en lo nacional. Hoy el dominio es evidente en amplias zonas del territorio nacional y mantienen alianza con los nuevos narcotraficantes y controlan buen aparte de la cadena productiva de la coca. Su accionar en una forma de mafia cubre otras actividades ilegales de gran dividendo como la gasolina robada.

En el Magdalena Medio dominan prácticamente en todas las zonas planas y medias, han logrado un repliegue de las guerrillas, ejercen gran control sobre las finanzas locales y son pieza clave en las decisiones políticas y de la vida social en todos los municipios. En el momento actual, en pleno proceso de “negociación” entre los paramilitares y el Estado, muchos consideran que es la consolidación de la etapa de legitimación, donde se parte

del hecho que una vez “liberadas” las regiones de la subversión, éstas dejan de ser “ruedas sueltas del Estado” y vuelven a garantizar la llegada de las fuerzas militares y la institucionalidad en general. A la vez, se construyen las estructuras necesarias para expansión del capitalismo y se facilita la instalación del Estado “modernizante”, con el concurso del sector privado<sup>61</sup>.

La revisión de las distintas etapas de la violencia en Colombia desde mediados del siglo XX permite inferir a manera de hipótesis que existe cierta relación entre el surgimiento y expansión de los grupos armados en determinadas áreas geográficas y las tendencias territoriales de la colonización campesina, empresarial o tradicional en esas zonas, que indicaría alguna relación entre las estrategias racionales de expansión de los actores armados y ciertos problemas estructurados, ligados a los problemas del mundo rural. Dicho planteamiento expresado por el equipo liderado por Fernán González, no solo se reduce a lo económico, sino que abarca lo político, pues tiene que ver con la manera como las regiones se colonizan y como se configuran sus estructuras locales y regionales de poder, incluida la articulación de esas redes de poder con los ámbitos de carácter nacional en los cuales los partidos tradicionales han jugado y siguen jugando un papel importante, a partir de los cuales surgen grupos de terratenientes y comerciantes enfrentados<sup>62</sup>.

Durante los primeros años del siglo XXI se puede corroborar esta hipótesis de la relación entre la geografía y dinámica económica social y militar del conflicto Colombiano, con desarrollos diferentes en el norte y en el sur del país: en el norte, dentro del cual está el Magdalena Medio, se lleva a cabo un proceso de hegemonización del proyecto paramilitar que cubre de oriente a occidente y consiguientemente un relativo retroceso del proyecto guerrillero, mientras en el sur, en la Orinoquía y en la Amazonia, la guerrilla de las FARC ha logrado insertarse con relativo éxito en los frentes de colonización y en las economías cocaleras y cocaineras, además de presentar una gran fortaleza militar.

Durante los últimos años, la confrontación dentro del corredor oriente - occidente se ha centrado en las sucesivas “tomas” y “recuperaciones” del Nudo de Paramillo por parte de

---

<sup>61</sup> GONZALES Fernán, BOLIVAR, Ingrid, VASQUEZ, Teófilo. *Op. Cit.*, p. 62.

las FARC y los paramilitares, y en el gradual avance y apuntalamiento del paramilitarismo en el Magdalena Medio y el Sur de Bolívar, que se manifiesta en el control sobre la serranía de San Lucas y el mismo Sur de Bolívar, lo mismo que en la urbanización de la guerra, sintetizada en el control que estos grupos ejercen sobre la ciudad de Barrancabermeja. En forma más reciente se resalta la entrada del paramilitarismo en regiones como la del Catatumbo, cuya dinámica de confrontación vuelve a tener como eje la lucha por el control de las economías cocaleras.

Al fenómeno bélico se superpone una realidad de desarrollo desigual de integración, un estilo de inserción precaria en el conjunto de la nación en términos económicos, sociales y políticos. Es decir, que en términos de González, “existen regiones plena y efectivamente incluidas, otras que tienen una inserción a medias o precaria y otras que definitivamente están marginadas y excluidas de la tendencia del desarrollo centralizado. Este grado de inclusión se expresa también en los ámbitos políticos y sociales<sup>63</sup>” y son un motor para la disputa dentro del conflicto.

### **El conflicto y la violencia en Colombia: una mirada desde la región**

Tal vez uno de los rasgos más sobresalientes de la violencia en Colombia es su carácter regional. Como afirma María Teresa Uribe, “las regiones no son meros aspectos de despliegue de las dinámicas bélicas; no constituyen escenarios particulares de un fenómeno general ni son la expresión micro social o local de lo que acontece en la nación”<sup>64</sup>. Yo se había referenciado atrás con Kalyvas al afirmar que de ninguna manera los conflictos locales son fiel expresión de los grandes referentes de conflictos nacionales por toda su expresión de intereses particulares locales; la realidad es que en Colombia, “las especificidades regionales de esta nación fragmentada, constituyen la urdiembre sobre la cual se desarrollan las diversas prácticas violentas; es decir, la historia y las

---

<sup>62</sup> GONZALES Fernán, BOLIVAR, Ingrid, VASQUEZ, Teófilo. *Op. Cit.*, p. 70-71.

<sup>63</sup> GONZALES Fernán, BOLIVAR, Ingrid, VASQUEZ, Teófilo. *Op. Cit.*, p. 116.

<sup>64</sup> URIBE DE HINCAPIÉ, María Teresa. 1997. *Op. Cit.*, p. 38.

dinámicas particulares en las regiones le marcan perfiles, aristas, ritmos y tiempos diferenciales a este fenómeno que los colombianos hemos en llamar violencia”<sup>65</sup>

En Colombia las regiones se constituyen en horizontes de análisis para comprender la violencia, sobre todo por la posibilidad de descubrir la relación conflictiva entre los procesos sociohistóricos, económicos y sociales de la vida regional con los fenómenos de violencia que ocurren en ese espacio geográfico. Por esta razón, investigadores citados atrás como Boris Salazar y María del Pilar Castillo en un trabajo más reciente afirman que “el mapa territorial colombiano es el resultado de la interacción estratégica entre las organizaciones armadas ilegales y las fuerzas regulares, de su violenta disputa de territorios, poblaciones y fuentes de tributación y del aprendizaje a marchas forzadas de la población civil”<sup>66</sup>.

Por ello la fuerza de la expresión: “Colombia, más territorio que nación”, que el candidato liberal a la presidencia Luis Carlos Galán pronunció poco antes de caer asesinado en Soacha en 1989, al observar la magnitud de los conflictos y las violencias de un país que no ha logrado aún expandir sobre su territorio las instituciones y el control del Estado, pero sí su población, sus problemas y sus conflictos sin resolver. Por ello, Clara Inés García afirma que los procesos de mayor impacto para Colombia entre 1870-1990 fueron las colonizaciones de más de medio país, en los cuales “se descuajaron selvas y montañas por migrantes que le huían a la violencia y a la pobreza de sus lugares de origen y en un muy corto lapso, se formaron nuevas y complejas sociedades (...) carentes de infraestructura e instituciones que posibiliten su integración y desarrollo y donde el Estado no ejerce control efectivo”<sup>67</sup>, convertido hoy también en lugar de asentamiento de grupos armados y desarrollo creciente de la actividad del narcotráfico.

El análisis del conflicto violento se convierte, en una vía indispensable para comprender la complejidad de las lógicas y los procesos bajo los cuales las regiones de frontera en Colombia se configuran internamente y se vinculan a la sociedad mayor. Igualmente

---

<sup>65</sup> URIBE DE HINCAPIÉ, María Teresa. Violencia regional en Colombia. *Op.cit.* 1997. p. 38.

<sup>66</sup> SALAZAR, Boris y CASTILLO, María del Pilar. Guerra irregular, estrategia y conjeturas: ¿Qué esperan ejército y civiles?. *Citado por: OBSERVATORIO PRESIDENCIAL DE DD.HH Y DIH. Op. Cit.*, 2004. p. 17.

<sup>67</sup> GARCIA DE LA TORRE, Clara Inés. Paradojas de los conflictos Violentos en: Legado del Saber. Revista de la Universidad de Antioquia No 6. Medellín: Colombia. p. 11.

permite comprender como el Estado también se construye en la permanente búsqueda de salidas a los grandes conflictos nacionales y a las maneras como estos toman cuerpo en las diferentes regiones. Que Colombia es un “país de regiones” es una realidad que casi todos admiten, sin embargo, que estudiar el conflicto en el orden regional es una necesidad para comprender la lógica nacional por la existencia de múltiples particularidades, es un asunto que aún está por hacer.

Una constante de los territorios de alta violencia está en el hecho que combinan grandes riquezas naturales (petróleo, oro, tierra, etc.), privilegiada situación geopolítica (Urabá, Magdalena Medio, Piedemonte llanero, zonas de frontera con otros países, etc.), escasa o nula presencia del Estado, colonización reciente, plural y dispersa con altísimos niveles de conflictividad social, política y cultural que en la mayoría de los casos son dirimidas a través de la fuerza y la imposición violenta de distintos actores armados, cuyos enfrentamientos se han convertido también en una manera de tejer la historia particular de cada región.

Tal como ocurrió en la mayor parte de las ciudades y los campos de Colombia, el 9 de abril de 1948, fecha en la cual asesinan en Bogotá al dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán, en el Magdalena Medio se marca un viro importante al darse la transición entre la dimensión del conflicto social y político a la violencia de la confrontación con importantes expresiones de resistencia popular que se presentan en Yondó, San Vicente de Chucurí, Puerto Wilches y la conformación de la junta revolucionaria de Gobierno y las Milicias populares en Barrancabermeja durante “los llamados diez días del poder popular”.

La violencia como dimensión de la confrontación se expresa, según Manuel Alonso<sup>68</sup> en tres niveles: En primer lugar, la violencia propiciada por el Estado contra el movimiento sindical y los pobladores simpatizantes del levantamiento popular posterior al nueve de Abril; en segundo término, la violencia de las guerrillas liberales que se extendieron en la región y en última instancia, la violencia ejercida por la policía chulavita y las contraguerrillas conservadoras.

A mediados de los años sesenta, surge en la región el movimiento guerrillero, enraizado en dos procesos: uno fundamentalmente político que se entrecruzó con las dinámicas de los contextos sociales sobre los cuales se implantaron y desarrollaron el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Ejército Popular de Liberación EPL y el otro, ligado a dinámicas sociales particulares, especialmente de lucha agraria que se fue entrecruzando con dinámicas políticas, como fue el caso de las FARC y el Quintín Lame, que aunque surgidos en otras regiones del país, encontraron condiciones propicias para desarrollarse en varias zonas del Magdalena Medio.

En su primera fase de acción, las FARC se expandieron hacia el Magdalena Medio con el objeto de establecer “una forma de resistencia campesina contra el despojo latifundista” y crear guardias rurales para “limpiar” la región de la delincuencia común. La década del 70 fue el período de expansión a otras regiones del país con lo cual irrumpieron en Puerto Berrío, el Sur de Bolívar (frentes XII y XXII), el Noreste y Bajo Cauca antioqueño y la Sierra Nevada de Santa Marta (frente XIX). Combinaron el trabajo político y la defensa campesina con el boleteo, la vacuna ganadera y los secuestros.

En el Magdalena Medio, el movimiento insurgente se estructuró de acuerdo con los desarrollos de lo social, constituyendo un componente central de esta mezcla de “conflictos, violencias, negociaciones, prebendas y desórdenes”<sup>69</sup> que caracterizan a la sociedad Colombiana de hoy. En este fenómeno algunos investigadores como Manuel Alonso conciben que la presencia del Estado, que como se dijo en el capítulo anterior, históricamente ha estado dada más en término de la presencia de las fuerzas militares que en institucionalidad civil, ha conducido a una militarización del Estado que trajo como una de las consecuencias la creciente militarización de lo social, expresado entre otras por la irrupción de un movimiento guerrillero que retroalimentó este proceso y logró durante mucho tiempo y en gran parte del territorio la imposición de un modelo militarista de sociedad<sup>70</sup>.

---

<sup>68</sup> ALONSO, Manuel Alberto: Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena Medio. Medellín: U. de Antioquia. pág. 122-124.

<sup>69</sup> ALONSO, Manuel Alberto. *Op.cit.*, p. 134.

<sup>70</sup> ALONSO, Manuel Alberto. *Op.cit.*, p. 136.

Con todo y ello, para el gobierno central el Magdalena Medio continuaba siendo un territorio marginal donde se reprimían las protestas sociales y la guerrilla había logrado configurar un esquema de “convivencia” con los pobladores en las zonas rurales pero también urbanas como en el caso de San Vicente de Chucurí, Yondó, Sabana de Torres y Barrancabermeja.

El Ejército de Liberación Nacional surge en el Magdalena Medio y sale a la luz pública con la toma de Simacota el 4 de Julio de 1964. En un comienzo estuvo formado por campesinos y ex combatientes de la guerrilla liberal, sectores del estudiantado santandereano (AUDESA), obreros, pequeños comerciantes y ex militantes del Movimiento Revolucionario Liberal MRL. En las décadas siguientes ejercieron dominio en buena parte de Barrancabermeja, El Carmen de Chucurí, San Vicente, Santa Helena del Opón, Bajo Simacota, Puerto, Wilches, Sabana de torres y Yondó. A partir de 1968 realizaron una división interna y se crean dos frentes de trabajo político y militar: el primero que opera entre los ríos Carare y Sogamoso a cargo de Domingo Laín y el segundo que extiende su accionar hasta Antioquia y la zona Sur del Departamento del Bolívar, dirigido por los hermanos Vásquez Castaño<sup>71</sup>.

Hacia 1972, hizo su aparición el frente “José Antonio Galán” del ELN en la zona rural del San Pablo. Este grupo estaba al mando de Fabio Vásquez Castaño. Más tarde (1978), otro grupo al mando de L cura Manuel Pérez Martínez se estableció en las cercanías de Morales. A partir de la década del ochenta se fundaron en esta misma zona estructuras militares y políticas más numerosas y estables como fueron el frente “José Solano Sepúlveda” y el frente “Héroes de Santa Rosa”.

Hasta 1997, este grupo guerrillero predominaba en la mayor parte del territorio del Sur de Bolívar y en la cercana ciudad de Barrancabermeja. Con el auge del cultivo de la coca y la ofensiva desatada por las AUC, el poder del ELN entró en una fase de deterioro. Hoy en día cuenta con cerca de 1.200 efectivos y su influencia se limita a las zonas rurales de municipios como Santa Rosa, Morales, San Pablo, Tiquisio, Arenal y Cantagallo. Al malograrse los acuerdos entre el ELN y el Gobierno de Pastrana quedó pendiente la

solución del diálogo que a pesar de tener participación de la iglesia y algunos sectores de la sociedad colombiana, aún no se concreta una agenda de negociación. Como lo menciona un reciente estudio del PNUD, “cabe suponer que este grupo insurgente aún guarda interés en participar en las iniciativas de la Unión Europea tendientes a sustituir la economía de la coca y restar poder a las bandas de narcotraficantes, a quienes ha identificado tradicionalmente como sus enemigos”<sup>72</sup>.

Sin embargo, en los últimos años este grupo ha realizado alianzas tácticas con las FARC en el Magdalena Medio para enfrentar a los paramilitares. Este hecho ha estado asociado a una posición distinta frente a la producción de coca en sus zonas de control; hoy en día participa en el cobro de tributos a los campesinos cultivadores de hoja y productores de base de coca. En otras palabras de una posición ideológica bastante contraria al narcotráfico, el ELN ha “revalorizado, por lo menos a nivel regional, el uso de los recursos de esta actividad para efectos de su fortalecimiento militar”. Con todo, sus mandos siguen recordando que en 1989 proclamaron un “deslinde categórico” con este fenómeno por considerarlo contrario a la democracia, la paz y el socialismo y causa de muchos problemas como la corrupción, la impunidad en el Estado y el fortalecimiento de una “narcoburguesía” que ha ido escalonando posiciones de poder a nivel nacional y regional.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC por su parte, ingresaron al Sur de Bolívar a mediados de la década de los ochenta. En territorio de Yondó y Cantagallo se implantó el Frente 24; más tarde apareció el Frente 37 en la zona de Arenal y Morales. Estas estructuras hacen parte hoy de los llamados Bloques Magdalena Medio y Caribe. Según fuentes oficiales hay cerca de 2.000 combatientes de las FARC en el Sur de Bolívar.

Recientemente las FARC han incrementado su presencia en los sectores rurales de municipios como Santa Rosa y Morales. Esta es una organización fuerte que ha enfrentado con relativo éxito a los paramilitares que han pretendido entrar en sus zonas

---

<sup>71</sup> ALONSO, Manuel Alberto: Conflicto armado y configuración regional. El caso Magdalena Medio, 1997. Medellín: Universidad de Antioquia., p. 129.

<sup>72</sup> FONSECA, Daniel; GUTIERREZ, Omar y RUDQVIST, Anders. Cultivos de uso ilícito en el Sur de Bolívar: una aproximación desde la economía política. Bogotá: PNUD – ASDI, 2005. p. 79.

de influencia. Es claro que las FARC facilitan la siembra y cobran “impuestos” a la producción de base de coca en Sur de Bolívar.

Por su antigua presencia en zonas productoras de coca y sus orígenes campesinos, las FARC han elaborado una compleja visión sobre el tema del narcotráfico y la producción de coca. Para esta organización, los campesinos productores de coca son víctimas de las crisis económica del sector agrario y de la “contrarreforma” agraria liderada por los narcotraficantes y paramilitares en buena parte del país; es decir, según ellos en sentido estricto, estos pequeños productores no serían narcotraficantes y resultaría relativamente fácil desvincularlos del negocio a través de programas participativos y concertados (Comunidades, Estado, Cooperación Internacional) de desarrollo económico y social.

Para las FARC, el narcotráfico es un problema del “capitalismo globalizado” y el tratamiento que le han dado los Estado Unidos es ante todo local y afecta, fundamentalmente, a los países productores de América Latina; especialmente Colombia<sup>73</sup>. Como lo muestra el estudio de PNUD, para las FARC, la solución del fenómeno pasa por la realización de acuerdos en los que participe “la comunidad nacional e internacional” y se logre “el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes”. Por esto rechazan el tratamiento militar y oponen resistencia a los procesos de erradicación forzada de cultivos y a los proyectos de desarrollo alternativo incluidos en estrategias gubernamentales como el Plan Colombia. Al mismo tiempo, las FARC han propuesto la ejecución de programas pilotos de desarrollo en las zonas productoras de hoja de coca como los reiterados para Cartagena del Chairá y la legalización de la producción y comercialización de las drogas<sup>74</sup>.

A la presencia desde décadas atrás de la guerrilla en el Magdalena Medio se sumaron hechos que paradójicamente ocurrieron durante la administración de Belisario Betancourt (1982-1986) cuando tomaron fuerza las propuestas de una salida negociada al conflicto. Un movimiento se originó en el llamado que hizo el ejército a la población civil y a las

---

<sup>73</sup> "Narcotráfico en América Latina y el Caribe" Ponencia Presentada por la Comisión Internacional de las FARC-EP. San José, Costa Rica: Julio 18 - 19 de 1997.

fuerzas económicas y políticas regionales para crear un frente común de lucha contra la subversión. De allí que a comienzo de los ochenta en la zona sur del Magdalena Medio, específicamente en la zona de influencia de Puerto Boyacá se gestó el nacimiento del movimiento de autodefensa que con grandes evoluciones posteriores originó el paramilitarismo.

Varias fueron las causas que llevaron a la formación de grupos paramilitares, entre ellas el cansancio de grupos de poder económico y campesinos ante los abusos guerrilleros, como fue el caso de Puerto Boyacá y San Juan Bosco de la Verde. Rápidamente entre 1982-1984 el avance paramilitar nacido como el apoyo del ejército del Batallón Bárbula a grupos de autodefensa campesina de su área de influencia se extendió a La Dorada, Puerto Berrío con protagonismo de la XIV Brigada, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Cimitarra y Puerto Salgar. Uno de los principales mecanismo utilizados consistió en la represión sistemática contra sindicalistas, líderes cívicos, políticos de izquierda y campesinos acusados de pertenecer o simpatizar con la guerrilla.

La profundización y deshumanización de la violencia en la Magdalena Medio se intensificó desde 1998 cuando la dinámica de la confrontación planteó el dominio total de la región. A partir de allí, el mapa del conflicto en el Magdalena Medio ha venido cambiando significativamente. Así por ejemplo, en 1997 (Ver mapa 2.) la mayor parte de la margen izquierda del río, con excepción de Puerto Nare y Puerto Berrío eran de dominio de los grupos guerrilleros ELN y FARC. El proceso paramilitar avanzaba por la margen derecha impulsado desde Puerto Boyacá, El Carmen y San Vicente de Chucurí con una importante consolidación en las zonas planas del sur de Cesar, especialmente San Martín y San Alberto.

Para el año 2001 el mapa del conflicto había tenido sustanciales cambios. La avanzada paramilitar copó los cascos urbanos del sur de Bolívar, territorio dominado históricamente por el ELN y las FARC y logró avanzar hacia las estribaciones de la cordillera de San Lucas. Otros municipios con fuerte presencia guerrillera hace unos años como Landázuri y Puerto Wilches también fueron copados en buena parte por el paramilitarismo. El caso

---

<sup>74</sup> FONSECA, Daniel; GUTIERREZ, Omar y RUDQVIST, Anders. Cultivos de uso ilícito en el Sur de Bolívar: una aproximación desde

más significativo de “conquista territorial” se dio en la ciudad de Barrancabermeja donde ingresaron como en San Pablo, con una estrategia de exterminio de gran número de pobladores (Ver mapa 4).

Algunos hechos que han marcado la historia del conflicto en la región entre 1998 y el primer semestre de 2005 han sido entre otros<sup>75</sup>,

- Incursiones paramilitares constantes en los corregimientos, veredas y cascos urbanos de los municipios del Sur de Bolívar y Santander.
- Masacres ocasionadas por los paramilitares en Barrancabermeja en mayo y agosto de 1998 y febrero de 1999, y en San Pablo en enero de 1999.
- Secuestro de un avión comercial por parte del ELN en abril de 1999.
- Masacre perpetrada por las FARC, contra militantes del EPL, en junio de 1999, en Barrancabermeja.
- Enfrentamientos constantes en las comunas de Barrancabermeja que luego se tradujeron en dominio absoluto del paramilitarismo y su instalación de sus “cuarteles” en las comunas 5, 6 y 7 desde finales de 2000.
- Enfrentamientos en las zonas rurales de los municipios del Sur de Bolívar y el Valle del río Cimitarra. Para el año 2002 todas las cabeceras municipales del Magdalena Medio estaban ya bajo el dominio paramilitar. La guerrilla de las FARC y el ELN han sido replegadas a la zona montañosa. Los continuos enfrentamientos han dejado a la población en medio del fuego cruzado. Los desplazamientos de la población conocieron sus máximos históricos.
- Incremento en el número de muertes violentas en Barrancabermeja: 539 en 2000 y cerca de 400 en el año 2001. A partir de entonces, aunque disminuyeron las masacres, la desaparición y muerte “gota a gota” mantiene a la ciudad dentro de las más violentas del país.
- Amenazas constantes contra las organizaciones de derechos humanos y defensores de los derechos humanos en toda la región.
- Desplazamientos de la población desde las zonas rurales a los cascos urbanos y entre la misma ciudad como en el caso reciente de Barrancabermeja.

---

la economía política. Bogotá: PNUD – ASDI, 2005. p. 80.

<sup>75</sup> PROGRAMA POR LA PAZ –ACNUR. Op.cit. Sin paginación.

- Dominio de los paramilitares sobre las administraciones municipales y sus presupuestos, que en muchos casos ha llegado al extremo de haber ubicado a algunos de sus integrantes o mayores colaboradores al frente de los designios locales vía alcaldes municipales, concejales o secretarios de despacho.

En el evidente cambio del mapa político regional en el último lustro, salta a la vista el repliegue de las guerrillas hacia las zonas altas de la región y, a su vez, el posicionamiento y expansión en el territorio de las autodefensas paramilitares, hecho que atenta contra el Estado social y de derecho. Con su proceso de expansión ha coincidido la oferta de “seguridad y tranquilidad” que ofrecen éstos últimos con la aparición de compradores de tierras que buscan implementar grandes proyectos productivos que generan incertidumbre e intranquilidad en el pequeño propietario y afectan negativamente la economía campesina. Como ha sido evidente en la región, el paramilitarismo no es sólo el mecanismo creado para evitar el avance de la guerrilla sino sobre todo para “recuperar, salvaguardar y controlar los espacios en los cuales hay o puede haber inversiones del gran capital, sea ganadero, agroindustrial, minero o narcocapital”<sup>76</sup>.

Las AUC controlan el comercio de la base de coca en el Sur de Bolívar fijando precios y delegando la compra del alcaloide a personas integrantes de su organización. Hoy en día las AUC ofrecen a los productores \$ 2'100.000 por kilo de base producido y diferencian el pago de la mercancía a los plazos que unilateralmente establecen, incluso con bonos. Este procedimiento ha llevado a una coyuntura de crisis a la economía local de la coca dado que los productores han demorado más de dos meses en pagar las deudas a los comerciantes y prestamistas.

Se podría decir que en poco tiempo las AUC sustituyeron a la tradicional red de compradores y comerciantes de base de coca en el Sur de Bolívar e ingresaron al circuito industrial de la cocaína instalando laboratorios de procesamiento del alcaloide. Buen porcentaje de este producto es sacado a otros municipios del departamento de Santander (Ríonegro, Puerto Parra, Sabana de Torres o Cimitarra), donde también se han

---

<sup>76</sup> ALONSO, Manuel Alberto. *Op.cit.*, p. 148.

descubierto laboratorios, y luego se transporta el clorhidrato de cocaína a los puntos de partida de las rutas internacionales de la droga en la Costa Atlántica.

Avanzan proyectos de compra masiva de tierras por las “buenas y por las malas” alrededor de los proyectos viales de la región como la carretera Cerro de Burgos – Simití y el Puente Barrancabermeja – Yondó, a la vez que se consolida la contrarreforma agraria iniciada desde hace más de una década alrededor de la Troncal del Magdalena Medio. Igualmente dineros provenientes del narcotráfico de la Costa Atlántica en alianza con el Bloque Central Bolívar de los paramilitares han emprendido ambiciosos proyectos de monocultivo de palma en el Sur de Bolívar y Sur del Cesar, así como de otros cultivos industriales.

Estos elementos presentes en el escenario sociopolítico regional influyen significativamente en los procesos ciudadanos de construcción de paz digna en la región. Lo anterior se evidencia por los movimientos de tropas paramilitares del “Bloque Central Bolívar, BCB”, que aún teniendo pactado con el Gobierno Nacional un “cese de hostilidades” en el proceso de Ralito, siguen operando en la región. Igualmente, persisten los ataques de las guerrillas y los reiterados enfrentamientos de éstas y grupos paramilitares con la Fuerza Pública. La zona rural de San Rosa del Sur y San Pablo en el Sur de Bolívar es la más crítica en el momento<sup>77</sup>. La avanzada paramilitar ya está en las goteras de la zona minera de la Serranía de san Lucas. El accionar de la insurgencia, pese a su concentración a las zonas altas, es evidente. Se producen combates y continúa la crisis humanitaria y el acelerado desplazamiento de población.

Por ello, al margen de las valoraciones éticas y políticas que se hagan sobre el conflicto interno, persisten aspectos estructurales como la concentración de tenencia de la tierra, el predominio de una economía de enclave (petróleo, oro, carbón), la ganadería extensiva, el desarrollo de modelos agroindustriales extractivos, los cultivos de uso ilícito (en torno a lo cual se mueven todo tipo de intereses) que de no superarse, van a seguir configurando un escenario favorable a la agudización de la violencia.

---

<sup>77</sup> Ver Boletín del Magdalena Medio, mayo de 2005 ([www.opi.org.co](http://www.opi.org.co))

Al anterior panorama se suma el escenario de negociación de las AUC con el Gobierno Nacional que pretende incorporarlos a la vida social, política y económica del país. En el caso del Magdalena Medio, la probable desmovilización de cerca de 4.000 paramilitares del Bloque Central Bolívar a mediados del segundo semestre de 2005, dejará en el territorio a gran cantidad de excombatientes cuya vinculación a la sociedad regional es muy incierta; donde su sometimiento a la justicia para juzgarlos y reparar a las víctimas parece, con la aprobación de la ley de “Justicia y Paz”, una tarea que quedó pendiente; donde su ligazón con las actividades ilícitas parece perpetuarse profundizando la corrupción a todo nivel y donde un estancamiento de los acercamientos con los grupos guerrilleros presentan un panorama sombrío que puede provocar hasta en los más críticos una justificación para la perpetuidad del fenómeno ante la amenaza de las acciones insurgentes nuevamente.

Todo lo anterior contribuye a la consolidación de una dinámica de militarización del conflicto, que nos remite, como afirma Alonso<sup>78</sup>, a la definición del Magdalena Medio como un territorio disputado y de confrontación constante, donde se va consolidando un modelo de organización social que presenta dos características: por un lado, la existencia de una crisis total del estado de derecho y una crisis total de la democracia, y por otro, la preponderancia del ámbito militar sobre el ámbito político y el ámbito jurídico en la construcción de la realidad regional, aspectos que en última instancia influyen en el proceso de la militarización del estado, la sociedad y toda la vida social, por lo cual en el Magdalena Medio el espacio de lo jurídico y el espacio de lo político han sido ocupado por las estrategias propias del ámbito militar.

De allí que el proceso histórico de “entrecruzamientos” y “sobredeterminaciones” del Magdalena Medio como producto de la dinámica violenta, evidencie que lo jurídico (cuya esencia es la legalidad y su instrumento la ley), y de lo político (cuya esencia es el consenso y su instrumento las respuestas a demandas), han sido ocupados por una multiplicidad de sectores armados que imponen su estrategia militar y de guerra a través de la apropiación que hacen del monopolio de la violencia legítima<sup>79</sup>. En otras palabras, se

---

<sup>78</sup> ALONSO, Manuel Alberto. *Op.cit.*, p. 155.

<sup>79</sup> GARCÍA VILEGAS, Mauricio. Derecho Constitucional y estrategia política. *En: Estudios políticos*. No. 1. Medellín. Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia. Enero-Junio 1992. p. 56.

evidencia la privatización del Estado en el Magdalena Medio, o lo que es lo mismo, “se da un proceso de autoinstitucionalización que hacen de sí los diferentes actores armados como los portadores de la legitimidad y la legalidad, como los reguladores de las diferentes iniciativas y conflictos que emanan de lo social, como los encargados de fijar las reglas de lo social y político, y de dar continuidad a un pretendido sistema de valores e imágenes que la sociedad debe tener y construir”<sup>80</sup>.

Las salidas del atolladero indudablemente están en las propuestas de las organizaciones civilistas que junto al Estado aunque sin mezclarse indisolublemente con él, retomen el legado histórico de construcción colectiva. Durante mucho tiempo pareciera que la premisa es alzarse en armas para ser escuchado frente al Estado, pareciera hoy en el Magdalena Medio estarse fraguando el derecho a la civilidad, a la construcción de lo público mediante el diálogo y la concertación sin necesidad de acudir a las armas y la intimidación. Poco a poco parecen estarse perfilando opciones que buscan recuperar el Estado Social de derecho y por ello la fuerza de las expresiones colectivas de ciudadanos que cada vez gana más adeptos entre la institucionalidad pública local, regional y nacional. Las organizaciones sociales tradicionales de la región, las redes de mujeres, jóvenes y de comunicadores populares, el Sistema regional de planeación participativa, el Programa de Desarrollo y Paz y el Laboratorio de Paz del Magdalena Medio y los procesos sociales campesinos por la defensa de la vida en las zonas de mayor confrontación, parecen ser una muestra de ello.

---

<sup>80</sup> ALONSO, Manuel Alberto. *Op.cit.*, p. 161.

## CAPITULO 2

### LA VIOLENCIA VISTA DESDE LOS PROCESOS LOCALES: EL CASO DEL SUR DE BOLÍVAR

Tal como se esbozó en el capítulo anterior, la violencia en el caso colombiano podría ser entendida como una acción racional de actores armados y no armados que han aprendido a adaptarse y a sobrevivir en condiciones de extrema incertidumbre, escasa solidaridad y falta de reglas claras para la interacción social, en medio de una intrincada red de expresiones e hibridaciones cuya expresión principal es el campo de los conflictos locales no resueltos por décadas.

En el presente capítulo se parte de contrastar postulados de varios autores que trabajan el caso de la violencia colombiana con énfasis en las tesis racionales y de la teoría de juegos que permite ampliar la comprensión de algunos casos específicos ocurridos recientemente en el Sur de Bolívar colombiano. Aquí de nuevo los postulados del autor ya citado atrás, Stathis Kalyvas, permitirá avanzar en el desarrollo de la tesis según la cual el estudio de las expresiones locales del conflicto es una manera más segura de acercarse a una explicación del fenómeno, que no permite quedarse en las generalizaciones sino que por el contrario, trata de comprender que lo que ocurre en los pueblos y campos de Colombia no necesariamente es una expresión calcada de las motivaciones nacionales de la confrontación.

Con esos elementos como telón de fondo se avanza a abordar el tema de la acción colectiva como perspectiva de análisis para explorar facetas hasta ahora poco trabajadas del conflicto en Colombia, especialmente la que se refiere a ampliar el espectro de análisis más allá de los actores armados y revisar el papel de los pobladores, las organizaciones sociales, los gremios, la clase política, la iglesia, que se manifiestan claramente a través de acciones colectivas, especialmente en “situaciones límite” a las que los llevan varias décadas continuas de un conflicto sin resolver.

Haciendo uso de un estudio de caso reciente en la región del Magdalena Medio se tratará de contrastar todos los planteamientos teóricos esbozados desde el capítulo 2, con los hechos sucedidos tras el asesinato a manos de los paramilitares de un reconocido comerciante, en marzo de 2004 en el municipio de San Pablo (Sur de Bolívar) y toda la acción colectiva que trajo como consecuencia.

***La violencia colombiana: viejas prácticas, nuevos retos, una mirada desde los postulados racionales***

La situación actual no puede ser explicada sin atender a la herencia de fenómenos anteriores, especialmente de la llamada violencia clásica. Desde el punto de vista social, algunos autores<sup>81</sup> consideran que la violencia de mitad de siglo dejó como herencia una tríada fundamental, conformada por *la tecnología de la organización armada* para conseguir fines políticos, territoriales y económicos; *la violencia sistemática para ganar el control de la población* y *el intercambio mercantil* para asegurar la supervivencia en condiciones de amenaza e incertidumbre. No puede desconocerse que el fenómeno de la exclusión política, generado por el Frente Nacional, explica el surgimiento y proliferación de las organizaciones armadas revolucionarias. Pero la dimensión política y revolucionaria de esas organizaciones actúa en el contexto más amplio de una organización social en la que la depredación sistemática, el ejercicio de la violencia y la búsqueda de ventajas económicas individuales prevalecen.

Como se sustentó atrás, no solo la exclusión política explica el surgimiento y consolidación de organizaciones armadas revolucionarias. El contexto social favorecía la proliferación de los que estaban organizados para la depredación y para la imposición violenta, a costa del debilitamiento, y hasta la desaparición, de quienes no lo estaban. Esto es fácil de comprobar al revisar en los años ochenta, el surgimiento vertiginoso y violento de las organizaciones de narcotraficantes que llegaron incluso, a disputar en forma abierta la legitimidad y el poder del Estado.

Pero la depredación organizada, está extendida a todas las esferas de la acción social. Desde dentro del sistema tradicional, la depredación organizada de lo público, a favor de los grupos privados que están en capacidad de hacerlo, se ha convertido en una de las prácticas fundamentales para una “redistribución de la riqueza”. Por ello, tanto en el sector público como privado, se dan relaciones de depredación que implican una respuesta armada y costosa por parte de las víctimas, reales y potenciales<sup>82</sup>.

La globalización en lugar de disminuir la intensidad y el número de los conflictos armados en el mundo, los ha privatizado y le ha dado recursos económicos, a través de intercambios legales e ilegales a escala mundial, antes impensables. En Colombia, las FARC, el ELN y los grupos paramilitares participan de forma activa de esa nueva economía global, que traspasa las fronteras y que los convierte en actores dentro de la geopolítica de hoy. Ya no se trata de rebeldes armados o de grupos al margen de la ley que enfrentan a un estado o a un gobierno que consideran ilegítimo, sino de organizaciones armadas con fuertes vínculos con la economía mundial, que se han beneficiado en forma notable de las nuevas oportunidades de intercambios transnacionales, y de tributación sobre esas actividades, ya sean legales o ilegales. Como lo plantea Mark Duffield (1999)<sup>83</sup>, el desconocer esta situación ha llevado a seguir pensando los conflictos armados de hoy como el resultado de una combinación perversa de irracionalidad, pobreza, instituciones débiles y poco crecimiento económico.

¿De dónde proviene esa equivocación? Duffield lo dice en términos precisos: “Libres de la lógica política de la Guerra Fría, que mantenía una división entre la ayuda y la asistencia para el desarrollo, hoy la comunidad que se dedica a la seguridad acepta la violencia abierta (donde grupos subordinados y sus activos son blancos permanentes) e inestabilidad prolongada (donde las mismas cosas ocurren en un grado menor) como una oportunidad de desarrollo<sup>84</sup>.”

---

<sup>81</sup> SALAZAR, Doris y CASTILLO, María del Pilar. La Hora de los dinosaurios: conflicto y depredación en Colombia. Bogotá: Cidse-Cerec-Univalle, 2001. p. 16.

<sup>82</sup> SALAZAR, Doris y CASTILLO, María del Pilar. *Op.cit.* p. 17.

<sup>83</sup> Citado por SALAZAR, Doris y CASTILLO, María del Pilar. *Op.cit.* . p. 20.

<sup>84</sup> Citado por SALAZAR, Doris y CASTILLO, María del Pilar. *Op.cit.* p. 21.

Las lecciones para el conflicto colombiano son claras. Primero, no tiene sentido seguir buscando la fuente del conflicto en algún rasgo de irracionalidad o de preferencia congénita, debemos tratar de entender la racionalidad de los agentes armados y no armados que lo componen. Segundo, el conflicto colombiano ya traspasó las fronteras nacionales, los límites de la confrontación convencional entre un Estado y bandas armadas en rebelión. Los lazos que unen a los agentes armados con la población civil, con el Estado, y con intermediarios y compañías internacionales están sustentados en la nueva economía política predominante en el mundo. Tercero, las instituciones, normas, acuerdos, contratos, intercambios que han surgido en el proceso de adaptación de los colombianos al estado de anarquía en el que deben sobrevivir, no son “tan pasajeros ni tan extraños ni tan secundarios”.

De allí que para la nueva generación de estudiosos de la violencia en Colombia no basta con eliminar las llamadas causas objetivas del conflicto, con alcanzar una mejor distribución de la propiedad de la tierra o incrementar las posibilidades de participación democrática de las fuerzas excluidas. No basta con incrementar las penas asociadas a ciertos crímenes. No basta, tampoco, con fortalecer al Estado en general y hacerlo más fuerte allí donde ni siquiera ha logrado despegar como la mayor parte del Magdalena Medio colombiano. Se requiere, además, construir una organización social que no propicie, premie e incentive las conductas depredadoras que están en el centro de la destrucción de los vínculos comunitarios, porque como afirman Salazar y Castillo, “que el Estado haya sido débil en Colombia no es sólo el producto de políticas equivocadas, sino de una evolución que ha favorecido formas directas de regulación, que se han desarrollado en contra y a pesar del Estado”<sup>85</sup>.

La guerra en Colombia es expresión de la guerra del fin del milenio: la guerra camino del caos de los países más pobres, pero a la colombiana en el tránsito entre medios y fines, y por eso mismo, con una muy larga duración. En lugar de tener la guerra como la continuación de la política por otros medios, “los colombianos hemos convertido a la

---

<sup>85</sup> SALAZAR, Doris y CASTILLO, María del Pilar. *Op.cit.*, p. 22.

guerra en la continuación, por medios violentos, organizados y mercantiles, de conversaciones imposibles, y de conflictos no enfrentados y no resueltos”<sup>86</sup>.

Pero al analizar el conflicto colombiano vale la pena preguntarse, ¿de qué tipo de racionalidad estamos hablando? No se refiere por supuesto a la racionalidad según la cual agentes provistos de toda la información disponible, a ningún costo, deliberan acerca de su situación, ordenan las posibles consecuencias que pueden derivarse de sus acciones, y eligen la mejor acción disponible, sino a una racionalidad más limitada. Agentes con información incompleta forman unas ciertas aspiraciones que ellos consideran alcanzables dadas las circunstancias inciertas en las que se encuentran.

Existen dos aspiraciones básicas: la supervivencia y la ampliación de las oportunidades económicas. En una sociedad con la tasa de homicidios de la colombiana, y en medio de un conflicto en el que la población civil es objeto de disputa violenta, la aspiración a la supervivencia se vuelve casi natural. Al mismo tiempo el desorden social y el desplazamiento continuo de población generan oportunidades económicas para algunos. Pero el objeto de sobrevivir tiene la primacía. Por eso, poblaciones enfrentadas a este tipo de situaciones, deciden aceptar la protección de una de las organizaciones armadas, siempre y cuando esta protección sea sólida y creíble. Cuando deja de serlo, o cambian de protector o se desplazan.

Ni el Estado ni el mercado dan una respuesta suficiente, el Estado no está en condiciones de asegurar la supervivencia de sus ciudadanos. Hace mucho tiempo que perdió esa capacidad, no sólo en las zonas de conflicto armado, sino, en general, en todo el territorio nacional. El mercado, dentro de las restricciones institucionales existentes, no ha logrado generar oportunidades de avance económico para todos. Y si lo hace, lo hace de forma indirecta, en zonas de colonización, sin Estado, sin legislación, sin política social y sin orden. ¿Cómo puede entonces garantizarse algún tipo de orden en las zonas de nueva riqueza y de oportunidades económicas crecientes?

---

<sup>86</sup> SALAZAR, Doris y CASTILLO, María del Pilar. *Op.cit.*, p. 26

Los problemas que deben resolver las poblaciones enfrentadas a esta situación son de tamaño descomunal. “Deben ser capaces de crear, sobre la marcha y en tiempos muy cortos en la escala histórica, los arreglos institucionales apropiados para resolver ambos interrogantes. Deben ser capaces de diseñar las instituciones adecuadas para ampliar sus oportunidades económicas y garantizar su supervivencia”<sup>87</sup>.

La magnitud del problema se hace aún más considerable si se tiene en cuenta que la construcción de esas instituciones debe darse en condiciones de guerra y de amenaza, de mayor o menor intensidad, en contra de sus vidas y posesiones. Es el surgimiento de orden espontáneo en las condiciones más exigentes posibles: en un contexto de incertidumbre creciente y con una perspectiva de solución situada muy lejos en el tiempo.

Las instituciones reales que han surgido en este proceso de adaptación de las poblaciones a las circunstancias reales del desarrollo del capitalismo colombiano son bien conocidas: El pago de protección en la forma de tributos, contribuciones, “vacunas”. Los sistemas de intercambio de protección por lealtad, silencio o colaboración política y logística. La búsqueda permanente de nuevas formas de protección, la aparición de otras ofertas competitivas de seguridad (por ejemplo: la oferta mas barata de las organizaciones paramilitares), y el pago por la protección de actividades ilegales como robo de gasolina, explotación ilegal de bosques, robo de vehículos o contrabando.

Toda esta institución tiene algo en común: su núcleo fundamental está conformado por elementos de intercambio económico, dentro de un contexto de lucha por la supervivencia. En todas ellas, la población de las zonas en conflicto entra en relaciones contractuales con las organizaciones armadas que se disputan su control. La coerción ejercida por los grupos armados ha llevado a la creación de contratos de seguridad y protección, en los que a pesar del predominio de la violencia y de la amenaza, un claro elemento de intercambio económico aparece y se conserva. El centro “coercitivo” del conflicto está rodeado, por un círculo creciente de contratos e implícitos de diversa magnitud y legitimidad que han ido constituyendo una red de organizaciones e instituciones sociales al margen de la autoridad y de la presencia del Estado, aunque, a

---

<sup>87</sup> SALAZAR, Doris y CASTILLO, María del Pilar. *Op.cit.*, p.29.

veces, también lo incluye a través de la cooptación y la coerción ejercida sobre alcaldes y, en general, sobre las autoridades locales.

Esta situación implica muy altos costos de transacción para los civiles. “Al no haber una autoridad clara y superior que garantice los contratos e intercambios, los individuos deben pagar para asegurar el cumplimiento de aquellos, para garantizar la propiedad sobre sus bienes y activos y, sobre todo, para incrementar la probabilidad de su supervivencia”<sup>88</sup>.

Este último elemento depende, en forma decisiva, de recolectar, a tiempo y con la mayor exactitud posible, la información requerida, y de aprender, sobre la marcha, a tomar las decisiones correctas. No se trata de operaciones fáciles o naturales. La población debe aprender a evaluar el contenido de verdad, o informativo, de los rumores que llegan en forma permanente. A evaluar, también, las amenazas efectuadas por los grupos armados, y a hacer una evaluación precisa de las acciones realizadas. Las instituciones resultantes serían, la cristalización de múltiples procesos de adaptación de distintas poblaciones que intentan sobrevivir en el contexto de conflicto armado.

Por ello, la actual teoría racional para comprender los conflictos parte de tratar de entender lo que hacen y harían agentes racionales que se saben enfrentados a otros agentes racionales en un conflicto de largo plazo. Aquí racionalidad se define, como una conducta consistente, que sigue unas metas definidas y trata de elegir unos cursos de acción apropiados para alcanzar esas metas.

En palabras de Jhon Elster<sup>89</sup>, la elección racional para los actores se da cuando enfrentan varios cursos de acción y ellos suelen hacer lo que creen que es probable que tenga el mejor resultado general. Las fuerzas armadas regulares, las organizaciones guerrilleras, los paramilitares y la misma población civil aparecen, en este contexto, como agentes racionales que buscan una metas explícitas, siguiendo distintos tipos de acción racional, recurriendo a formas de conocimiento y de organización diversas, basándose en distintos modelos de recolección, procesamiento y transferencia de la información.

---

<sup>88</sup> SALAZAR, Doris y CASTILLO, María del Pilar. *Op.cit.* p.30.

<sup>89</sup> ELSTER, JON. *Tuercas y tornillos: una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales*. Madrid: Gedisa, 1993. Capítulo 3: Elección racional. P. 31-38.

En el centro de esta interacción racional entre distintos agentes está el problema del poder. Los agentes armados de hoy “ya no buscan la simple realización de las reivindicaciones económicas y sociales que los llevaron a la lucha armada sino la destrucción del poder actual y su sustitución por otro poder”<sup>90</sup>.

Es claro que tanto la polarización del conflicto entre paramilitares y guerrilla, hacen parte de la situación estratégica de la guerra que se libra en Colombia. En términos racionales y también estratégicos, es difícil aceptar la hipótesis de poblaciones situadas en zonas de disputa abierta que permanezcan al margen del conflicto y sobrevivan en el intento. No es razonable pensar en la supervivencia de poblaciones en zonas colonización, de bonanza económica o de economías ilegales como es la generalidad del Magdalena Medio, sin contar con algún tipo de protección armada. Salazar y Castillo pretenden llamar la atención sobre la imposibilidad estratégica de una población que permanece al margen del conflicto armado colombiano, y que no intenta aprender los caminos de la supervivencia porque los pocos casos en donde se reclama autonomía civil de las poblaciones han fracasado por la arremetida de los actores armados o porque sus logros son mínimos.

En zonas sin orden definido, la “ley” la impone el más organizado y más fuerte. La población sólo puede elegir qué protección es la más adecuada, cuál arreglo es el más confiable. Dentro de su racionalidad económica, esa “lealtad” o “colaboración” es indispensable: es lo que asegura la cristalización de sus aspiraciones económicas. Pero esa adhesión es también racional: solo se hace lo indispensable para asegurar la protección y, por tanto, la supervivencia. Es el intento de minimizar los costos de protección en condiciones de incertidumbre y de amenazas creíbles sobre su supervivencia. La población no es que quiera estar “al margen”: quiere participar, con el mínimo indispensable, para no estar en peligro, sobrevivir y cristalizar sus aspiraciones económicas<sup>91</sup>.

---

<sup>90</sup> SALAZAR, Doris y CASTILLO, María del Pilar. Op.cit., p. 61.

<sup>91</sup> SALAZAR, Doris y CASTILLO, María del Pilar. Op.cit., p. 64.

Las organizaciones armadas resuelven el enigma de la población a través de modular el terror y la violencia que puede ejercer. Esto les permite resolver el problema inmediato de la guerra, pero no asegura, de ninguna manera, la legitimidad de su dominación ni la lealtad clara de los civiles bajo su férula. Allí está la debilidad esencial a pesar de su poder militar y de sus avances en ese terreno, no han encontrado el camino para avanzar hacia la legitimidad indispensable si quieren convertir su hegemonía armada en hegemonía política. Ello explica porqué por ejemplo a pesar de dominar históricamente algunas zonas (caso del ELN en el Sur de Bolívar) la arremetida paramilitar en muy pocos años ha inclinado la balanza a su favor en términos de dominio del territorio y la población.

### ***Expresiones locales de conflictos nacionales no resueltos***

En el ejercicio de su poder las organizaciones armadas legales e ilegales utilizan diversas estrategias. Se da una combinación de prácticas del período de la violencia clásica, mecanismos formales e informales para el envío de mensajes, utilización de medios masivos y también locales de comunicación, prácticas proselitistas “pacíficas” combinadas con terror y demostración de fuerza, establecimiento de lealtades, cooptación de líderes, etc, que se convierten en la expresión en el terreno de lo político y de la guerra de lo que hace ya algunos años García Canclini denominó “Culturas híbridas”. Es la lógica compleja de un fenómeno complejo como el caso colombiano. “La noción de cultura híbrida plantea el problema de cómo surgen las estrategias políticas como momentos de la significación, como regímenes precarios de confrontación entre órdenes de discursos”<sup>92</sup>. La noción misma de poder, de estrategia, de lucha, aparecería íntimamente vinculada a este surgimiento de regularidades híbridas de construcción de significación (...) que parece también conducir a otro problema muy presente en el discurso cotidiano: la percepción de los procesos culturales, sociales, políticos, como en crisis, especialmente en territorios de alta conflictividad como el nuestro.

---

<sup>92</sup> GARCIA CANCLINI, Nestor. Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo. 1989. p. 365.

Sin embargo, entender la situación de violencia a partir de la racionalidad de los actores en una compleja maraña de acuerdos tácitos y formales entre ellos, en un esquema de hibridación continua, no sería posible si las explicaciones de muchos fenómenos nacionales ligados al conflicto no se miran desde la óptica de lo local.

Los conflictos locales con frecuencia triunfan sobre los ideológicos. La violencia expresa en palabras de Kalyvas “muchas luchas continuas (...)un micro-universo de las relaciones llenas de conflictos desarrollados a través del tiempo entre las familias, hogares, partidos, comunidades, patrones y clientes y varias capas del Estado<sup>93</sup>. Bajo esta óptica tal vez lo más extraordinario sobre esta violencia es su carácter absolutamente doméstico y local.

Mientras que las escisiones locales no son de ninguna manera el único mecanismo que produce alianzas y violencia, estas parecen tener un impacto sustancial en la distribución de las alianzas y también sobre el contenido, la dirección y la intensidad de la violencia. En lugar de ser impuesta sobre las comunidades por extraños, esta violencia, con frecuencia (pero no siempre), crece desde el interior mismo de las comunidades aun cuando ésta sea ejecutada por forasteros; “es, en otras palabras, íntima”<sup>94</sup>.

La participación local es compatible con todo tipo de motivos, desde el más ideológico hasta el más oportunista. La evidencia sugiere que un motivo clave es el que arregla las disputas privadas no relacionadas con la escisión maestra de la guerra. Muchos actos de violencia que en la superficie (y para los extraños) parecen haber sido generados por motivaciones exclusivamente políticas, resultan con frecuencia y bajo estrecho examen haber sido “causados no por política sino por odios personales, venganzas y envidia”. Sin embargo, la sustentación de cada uno de estos postulados, probados como verdaderos en varias partes del mundo, sólo se logra mediante la contrastación con la realidad de los hechos. En la zona del Sur de Bolívar en Colombia, que en los últimos cuarenta años ha sido centro y expresión de la violencia colombiana, es posible mediante seguimiento de prensa, entrevistas a profundidad con actores claves y encuentros con autoridades y

---

<sup>93</sup> KALYVAS, Sthatis. La ontología de la Violencia. Bogotá. Revista Análisis Político No.42. Año 2003. p. 58.

<sup>94</sup> KALYVAS, Sthatis. 2003. Op.cit., p.59.

sobre todo, a través del seguimiento de las acciones colectivas ocurridas en los últimos años.

***La acción colectiva como posibilidad para comprender la participación política de la población civil en zonas de conflicto.***

Estudiar las acciones colectivas permite cambiar de óptica en las lecturas sobre el conflicto. Se abandonan los esquemas clásicos que sólo explican el accionar de los grupos en contienda y permite visualizar al actor social, las organizaciones sociales, los gremios, la clase política local, develar sus actuaciones, cuestionarlas, establecer sus vínculos con los actores armados y adelantar todo un análisis a la luz de las motivaciones de la guerra y del curso de los acontecimientos. De otra manera aparecen como simples víctimas de la contienda.

Tal como recuerda Jon Elster lo más interesante de estudiar las acciones colectivas es poder comprender porqué la gente participa si esa no es la actitud corriente, porqué se hace realidad el principio que lo mejor para todos es si todos cooperan, si existe “una perversa tendencia de la racionalidad individual a generar el desastre colectivo”<sup>95</sup>. Los problemas de acción colectiva surgen porque es difícil hacer que la gente coopere para su beneficio mutuo, incluso, en los análisis de Elster, una primera cooperación no garantiza que en adelante se coopere, por el contrario, por elección racional los individuos tenderán a cooperar en el futuro solo si se evidencia que los demás también cooperan<sup>96</sup>. De allí la importancia de estudiar las acciones colectivas en medio de una situación de violencia tan degradada como la que soporta Colombia.

Siguiendo a Sydney Tarrow, toda acción colectiva tienen tres grandes características: desafío, incertidumbre y solidaridad. El aspecto más básico de la acción colectiva es su capacidad para **desafiar** a sus oponentes o a las élites, que en algunos círculos se conoce como resistencia. La **incertidumbre** es el resultado de la desconocida duración

---

<sup>95</sup> ELSTER, JON. *Op.cit.*, p. 127

<sup>96</sup> ELSTER, JON. *Op.cit.*, p. 132.

de una protesta y la indeterminación de su costo. Las manifestaciones no violentas son a menudo más poderosas que la violencia en sí porque plantean la posibilidad de ésta sin dar excusa a las autoridades para la represión. La incertidumbre proviene también de la posibilidad que una acción se extienda a otros, incrementando así su costo potencial. La **solidaridad** interna sustenta el desafío y sugiere la posibilidad de una disrupción. Así, los oponentes, los aliados y los observadores responden no sólo en función de la agresividad o violencia del desafío y la incertidumbre que evoca, sino de la solidaridad que perciben de la protesta.

De allí que “los organizadores intentan maximizar el desafío y la incertidumbre de las acciones que organizan, explotar la solidaridad de los participantes y sugerir que representan solidaridades más amplias”<sup>97</sup>

El mismo Tarrow considera que existen tres tipos principales de acción colectiva: violencia, convención y disrupción.

#### *La acción colectiva violenta*

La violencia es “el rostro más visible de la acción colectiva”<sup>98</sup> y el más fácil de propiciar debido a que es la forma que más fácilmente pueden emprender grupos locales aislados y poco informados. Se produce por instigación de grupos pequeños organizados para los que se ha convertido en la expresión política fundamental. En muchos casos es producto de la interacción entre los que protestan y las fuerzas del orden de las naciones. Sin embargo, con el paso de los años, la violencia se ha vuelto menos frecuente en las democracias, aumentando la cantidad de acciones colectivas concertadas.

La violencia tiene grandes limitaciones como arma política por cuanto reduce la incertidumbre, da a las autoridades el pretexto de la represión y aleja a los simpatizantes no violentos produciendo polarización. Sólo en los regímenes en los que el orden se ha venido a pique o en el que los ciudadanos están muy divididos por escisiones fundamentales de ideología, religión, cultura o raza, la violencia tiene mayor poder que

---

<sup>97</sup> TARRROW, Sydney. *Op. Cit.*, p. 183-184.

<sup>98</sup> TARRROW, Sydney. *Op. Cit.*, p.184.

otras formas de acción colectiva. Allí, al no poder hacer frente por medios legales, los estados responden con ley marcial, encarcelamiento, tortura y escuadrones de la muerte.

#### *La acción colectiva convencional*

La mayor parte de las acciones colectivas hoy se coordinan a través de una especie de “contratos por convención” a través del cual se da un acuerdo tácito en las expectativas de los participantes. Las principales acciones convencionales son la huelga y la manifestación.

La huelga, anterior a la industrialización, es tan habitual que se considera parte de las instituciones de negociación colectiva con “su propia jurisprudencia, rituales y expectativas, tanto entre los que recurren a ella como entre sus antagonistas”<sup>99</sup>. Durante el siglo XX se convirtieron en un medio de presión para los empresarios y una fuente de solidaridad de clase. Se pueden emplear en combinación con otras formas de acción: ocupaciones, marchas, sabotaje industrial, peticiones o reclamaciones y acciones legales.

La manifestación pública por su parte, surgió junto con las primeras campañas públicas de reivindicación de derechos políticos y sociales desde el siglo XIX. Al ser legalizadas dieron lugar tanto a una jurisprudencia como a una cultura. Pueden extenderse porque son de gran flexibilidad. Los estados autoritarios las consideran riesgos potenciales, los democráticos terminaron aceptándolas como una práctica normal e incluso ventajosa a la cual se brinda protección y orientación por parte de la policía. Así, la manifestación “acabó convirtiéndose en la principal expresión no electoral de la política civil moderna”<sup>100</sup>.

#### *La Disrupción*

En su forma más directa, la disrupción no es más que una amenaza de violencia, incluso, Tarrow considera que la acción colectiva convencional comenzó en forma de disrupción. Hoy tiene una lógica más indirecta:

- es la expresión concreta del grado de determinación de un movimiento,
- es la obstrucción de las actividades rutinarias de los oponentes, los observadores o las autoridades y

---

<sup>99</sup> TARROW, Sydney. *Op. Cit.*, p. 189.

- amplía el círculo del conflicto.

Las formas características de la disrupción son la “sentada”, la ocupación de las fábricas y la acción directa no violenta. Sustenta su poder no sólo en que no representa un desafío a la autoridad, sino que fomenta la solidaridad entre personas que dudarían enfrentarse a ella. Su poder es la incertidumbre; no es violenta pero amenaza violencia; el curso a seguir está planificado pero su resultado depende de las reacciones de los demás, que no puede predecirse.

Los autores coinciden en que las tres anteriores características están presentes en las acciones colectivas, sin embargo, Charles Tilly, politólogo anglosajón, en un texto de publicación reciente<sup>101</sup> intenta enfatizar que a pesar de esos acuerdos, las dificultades que presentan los modelos teóricos para el análisis de las acciones colectivas conflictivas son grandes, y propone nutrir estos modelos tradicionales de la elección racional con nuevos elementos para constituir los modelos de "interacción racional".

Tilly afirma que el análisis de las acciones y movimientos sociales y de las revoluciones, no encuentran en los modelos teóricos existentes suficientes elementos para darles explicación, debido principalmente a cuatro dificultades:

- ❖ Grandes vacíos en los modelos disponibles
- ❖ Empleo de modelos de un solo actor
- ❖ Uso de modelos estáticos
- ❖ Énfasis en las justificaciones causales más que en las intencionales.

Estas dificultades explican uno de los rasgos de los trabajos sobre las acciones colectivas: la fortaleza de modelos que tratan algún aspecto de éstas acciones colectivas, las excelentes descripciones de aspectos concretos de estas acciones y la extrema debilidad que tiene en las explicaciones globales.

---

<sup>100</sup> TARROW, Sydney. *Op. Cit.*, p. 191.

<sup>101</sup> TILLY. Charles. Modelos y realidades de la acción colectiva popular En: AGUILAR, Fernando. Intereses individuales y acción colectiva. Madrid: editorial Iglesias, 2000.

Para poder ampliar esta reflexión, el presente estudio ha hecho seguimiento de acciones colectivas ocurridas en los últimos tres años en el Sur de Bolívar. Por su importancia se resaltan las acciones lideradas por los comerciantes y la clase política de Santa Rosa del Sur, quienes en repetidas ocasiones han dejado sentir colectivamente su malestar por los abusos de la guerrilla del ELN y de forma más reciente por el régimen de terror instaurado por los paramilitares, que irónicamente ellos mismos ayudaron a llegar. Un caso menos estudiado es el de San Pablo, municipio en el cual la actividad del cultivo y procesamiento de la hoja de coca lo convirtió en el centro de la disputa de las fuerzas en combate, por ello para poder resaltar el papel jugado por la población civil en sus distintos matices vale la pena ahondar en los hechos ocurridos tras el asesinato de un importante comerciante en los primeros meses del año 2004.

### ***Una Acción colectiva tras el asesinato de Fidel Peña en San Pablo: Estudio de caso***

El día 8 de marzo de 2004 en la zona urbana de San Pablo - municipio ubicado en el Sur de Bolívar a la margen izquierda del río Magdalena - paramilitares del Bloque Central Bolívar - asesinaron en su propio negocio al comerciante Fidel Peña, líder muy apreciado de la región. Al día siguiente, en medio de un consejo de seguridad con alcalde encargado, concejales, comerciantes y comandante de policía abordo, los habitantes lideraron una marcha de protesta por el asesinato que terminó en forma violenta y produjo ataques al comando de la policía, la casa del alcalde y los sitios de permanencia de los paramilitares.

Año y medio después de la acción colectiva vale la pena retomarla para determinar sus características a la luz de los planteamientos de Elster y Tarrow y para señalar las dificultades en los marcos de análisis expuestos por Tilly, aplicados a este caso particular por los medios de comunicación, los analistas políticos y hasta los mismo actores de la guerra según sus pronunciamientos públicos.

Como se dijo con Tarrow, toda acción colectiva tiene tres grandes características: desafío, incertidumbre y solidaridad. En el caso de la acción colectiva de San Pablo es evidente el

**desafío** que la marcha organizada para repudiar el crimen de Fidel Peña pretendía colocar, no sólo por el hecho de encarnar un clamor por un “no más” al asesinato, sino por el hecho que se arremetió contra los símbolos visibles y reconocidos del poder instalado en el municipio: la Alcaldía, el Comando de Policía, la casa del alcalde, la funeraria y los almacenes de los paramilitares, sus casas, así como los carros y las motocicletas de la Policía.

“Una masa enardecida, cegada por el dolor y con ansias de expresar todo lo que había guardado durante años, fue la que se vio el 9 de marzo en San Pablo<sup>102</sup>” –decía Vanguardia con foto incluida. Más de 10.000 habitantes se tomaron el pueblo exigiendo que se fueran el Alcalde y la Policía por ser protectores de los paramilitares, los asesinos de Fidel Peña. La prueba: el crimen había sido cometido a media cuadra del cuartel, y circulaba una lista negra hecha por los paramilitares en la que estaban incluidos 30 personas del pueblo. Don Fidel era el segundo. La razón: no pagaban impuestos a las AUC. El pueblo no aguantó más la nueva fórmula de poder local que ha sido reivindicada como modelo de orden social y recuperación institucional. Y precisamente desafiaron esas formas de poder en el momento mismo en que se desarrollaba un consejo de seguridad.

Siguiendo con Tarrow, la acción colectiva de San Pablo también encarnó la **incertidumbre**, en la medida en que era desconocida su duración e imposible de cuantificar su costo. Una manifestación nunca antes vista en San Pablo, el rechazo a un asesinato en particular, que encarnó el rechazo al asesinato de muchos que le antecedieron, a manos de los paramilitares en supuesta complicidad con las autoridades civiles y militares legítimamente constituidas. Iniciada como una manifestación en recorrido por las principales calles de la población permitió como efecto de “bola de nieve” involucrar a la mayor parte de sus habitantes. El liderazgo de los familiares de las víctimas anteriores y de los comerciantes produjo acciones poco imaginadas para la mayoría. El pueblo movilizado en conjunto creó un alto grado de incertidumbre ante las autoridades y ante los paramilitares, no sólo por los efectos violentos producidos al final de la

---

<sup>102</sup> VANGUARDIA LIBERAL. Primera página e interiores. Marzo 10 de 2004.

manifestación, sino por la dificultad para saber si este comportamiento podría ser en el futuro la norma cada vez que el pueblo quisiera manifestar su desacuerdo.



Pero sin lugar a dudas el rasgo que más llamó la atención en los hechos del 9 de marzo de 2004 en San Pablo fue la **solidaridad** interna de la acción. Sin estar debidamente planeada, la manifestación en su recorrido por las calles del pueblo, la fuerza de las consignas y el aprecio general por Fidel Peña implicó que una población, que durante años vio pasar a cada bando de los actores armados y a gran cantidad de muertos, se uniera en masa para la protesta y para la acción violenta también. Nunca en la historia de San Pablo se vio algo así y por ello, es precisamente como afirmó Elster, que cobra gran importancia adelantar el estudio de esos hechos. Los sanpableros, tradicionalmente tranquilos y de espíritu fiestero emularon acciones de sus vecinos de Santa Rosa del Sur, colonos de las zonas montañosas de Santander y Boyacá, donde en varias ocasiones en masa también han rechazado acciones tanto de la guerrilla como de los paramilitares<sup>103</sup>. Además, los manifestantes encarnaron no sólo el sentir de los habitantes urbanos, incluyeron con gran fuerza el rechazo de los habitantes rurales a las acciones de bloqueo alimentario y control de movilización que ejercían los paramilitares en todos los parajes de la zona baja y media del municipio.

Lo de San Pablo, como lo afirma uno de sus líderes más reconocidos: “no se trató de un movimiento como tal, sino que hay una reacción legítima de rabia por dolor, pero también una reacción de manifestación solidaria de rechazo de un control que ha habido en el municipio durante los últimos cinco años que era un control ahogante y un control sobre prácticamente todas las acciones de la gente de la comunidad y encuentra ahí la manera

colectiva de expresarse”<sup>104</sup>. Pero no se trató solo de la manifestación de habitantes comunes y corrientes, tiene también “expresión de líderes políticos y líderes comunitarios, personas familiares de las víctimas de los paramilitares y tiene expresión de alguna manera también de pobladores del municipio de Santa Rosa, los cuales se unieron a un recorrido que incluyó especialmente arengas y frases de rechazo muy fuerte contra la institucionalidad pública local. Haber planeado un recorrido que pasara por la alcaldía y la policía, además de los negocios y sitios de vivienda de los paramilitares pretendía impregnar un gran sentido simbólico de rechazo”<sup>105</sup>.

La marcha casi espontánea, impulsada por un pequeño grupo de habitantes, logró canalizar el sentimiento común de la gente que permitió que muchos se fueran “pegando”, es decir, “a media que la manifestación avanzaba, la gente iba saliendo iba apareciendo; en la marcha del primer día comenzarían unas 200 personas desde donde estaba el féretro(...) yo creo que estos líderes surgieron en el momento, muchos de ellos eran como líderes sí de San Pablo, pero no eran conocidos con antecedentes de ese tipo de movilización, creo que con eso se presentó una reacción muy fuerte de líderes y especialmente de los familiares de tantas víctimas, aunque el liderazgo de la marcha hubiera estado en cabeza de algunos líderes políticos y comerciantes reconocidos”<sup>106</sup>.

Un punto que resalta es el tema que el rechazo y las acciones violentas estuvieran dirigidas a las autoridades locales y de policía, que expresa el repudio a la permisibilidad, a la estrecha relación política-actor armado y al ambiente de corrupción administrativa que hacía evidente precisamente todo lo contrario al cumplimiento de su papel de velar por la vida, honra y bienes de la población, así como la promoción de la vida con dignidad para todos.

Aun cuando la acción termina con las manifestaciones de violencia y el entierro de Fidel Peña, varias cosas cambiaron: los paramilitares se fueron del pueblo por varias semanas

---

<sup>103</sup> Un artículo de la revista SEMANA de julio de 2005 hace un recorrido por las acciones colectivas que han implicado en Santa Rosa el rechazo a las acciones violentas de la guerrilla y los paramilitares

<sup>104</sup> Entrevista a Mejía, Coordinador PDPMM en San Pablo. Abril de 2005. El texto completo se encuentra en el Anexo 1 del presente trabajo.

<sup>105</sup> Ibíd.

<sup>106</sup> Ibíd.

y aunque después regresaron, su accionar ha cambiado en la medida en que no ha habido nuevos desmanes contra la población civil y no ejercen el mismo control ahogante sobre los espacios de participación y la vida social en general. A pesar de la gravedad de los hechos y la afectación de bienes públicos, las autoridades no iniciaron procesos judiciales, salvo en un caso. Toda la policía del pueblo fue relevada y en el imaginario de todos, como la consecuencia más importante, quedó plasmada la fuerza que tienen las acciones colectivas que han vuelto a ser utilizadas en forma pacífica en otra serie de hechos, especialmente de carácter político como rechazo a medidas clientelistas y de sospecha de corrupción administrativa. Y esto último es un gran logro en medio de una población que se había acostumbrado a los desmanes de los actores armados y la fuerza pública, así como al rampante accionar de corrupción administrativa de sus autoridades locales.

Así por ejemplo, en meses pasados cuando se supo que el Gerente del Hospital iba a ser el mismo que venía de tiempo atrás, sobre el que pesaban muchas acusaciones de corrupción, hubo una avalancha de gente al parque para no permitir su continuidad y sólo una vez se cambió el decreto de nombramiento, la gente volvió a sus casas. Pocas semanas antes de la elaboración de este trabajo se dieron nuevas manifestaciones de inconformidad y de reclamo a las autoridades para el cumplimiento de su deber ante un nuevo asesinato de un poblador a manos de los paramilitares. Pareciera entonces que los hechos de marzo de 2004 no tiene reversa: las acciones colectivas se iniciaron y probaron su efectividad.

Por otro lado, tal como se mencionó atrás con Tilly, una interesante forma de acercarse a las acciones colectivas, de mostrar que las actuaciones de otros actores de la guerra distintos a los armados también son relevantes e inciden en su curso, consiste en revisar lo que de ellas se escribe a la luz de los cuatro grandes vacíos que presentan los modelos de interpretación:

*a. Grandes vacíos en los modelos existentes*

Partiendo que cualquier decisión colectiva surge de múltiples decisiones individuales, en los modelos existentes se quedan sin responder preguntas como las siguientes que conectan el nivel individual con el colectivo:

- ❖ Cómo se acumulan miles de decisiones individuales hasta formar una gran acción colectiva?
- ❖ De qué manera se pueden deducir las formas de participación individual partiendo del carácter de acciones colectivas?
- ❖ Podemos considerar las exigencias realizadas en nombre del grupo como datos sobre los motivos de la implicación individual?
- ❖ Transforma el proceso de movilización mismo de forma predecible los motivos individuales?

Las interpretaciones que se hicieron de la acción colectiva en San Pablo no dieron cuenta de estas preguntas. Por el contrario, siempre partieron de la movilización como un hecho dado, así por ejemplo Vanguardia Liberal mencionó que: “Serios disturbios se registraron ayer en la localidad de San Pablo (sur de Bolívar), luego de que un amplio sector de los cerca de 30 mil habitantes que componen aquel municipio, se agolparan en las calles en señal de protesta por el crimen de Fidel Peña, un reconocido comerciante”, y más adelante sustenta que “(...) a las once de la mañana cerca de dos mil personas interrumpieron el Consejo de Seguridad. "No podemos colocar más muertos, que se vaya el alcalde y la Policía, que se vayan". Esa fue la frase que desencadenó el "infierno" del 9 de marzo en San Pablo; el mismo que 10 minutos más tarde se traducía en cinco carros, tres de ellos de la Policía, que ardían como cajas de cartón; vidrios de la Alcaldía que no resistían una pedrada más y las calles convertidas en un "festival" de disturbios, ira desenfadada y terror”<sup>107</sup>.

*b. Modelos de un solo actor*

La mayor parte de las explicaciones suponen que el actor tiene una predisposición unitaria: una sola función de utilidad, sin división interna, sin cambios significativos en los límites. También los modelos acumulativos definen una población propensa a alguna forma de acción colectiva y luego intenta descubrir las condiciones que determinan su sensibilidad a esa condición.

---

<sup>107</sup> VANGUARDIA LIBERAL. Marzo 10 de 2004.

El análisis de la acción colectiva en San Pablo cae en la falacia de explicarla como acciones de los “pobladores”, ignorando que su composición es muy diversa y que al interior de los diferentes subgrupos de los “pobladores” existen posiciones diversas que logran alianzas según las circunstancias. Como afirma Tilly: refiriéndose a las huelgas “...en la vida real, el comienzo, el desarrollo y el fin de la huelga siempre tienen lugar en una corriente continua de negociaciones que incluye una continua evaluación mutua de la fuerza relativa de las partes, y a menudo depende de consideraciones estratégicas y tácticas más allá de la probabilidad de que los trabajadores ganen o pierdan sus objetivos”<sup>108</sup>. Un adecuado modelo debería tener en cuenta la interacción mutua y no sólo dar cuenta de la conducta de los actores como si fueran uno solo.

Así por ejemplo, un grupo importante de la acción colectiva estuvo constituido por los comerciantes y los transportadores, claves en el funcionamiento de la economía local, especialmente del circuito de la coca. Poco a poco sin ser productores directos han podido acumular excedentes provenientes de actividades lícitas e ilícitas y, en alguna medida, esto ha contribuido para que se conviertan en las “élites” económicas y políticas del Sur de Bolívar. Su papel económico consiste en abastecer con bienes de consumo e insumos agrícolas a los campesinos o ganaderos y conceder créditos informales a quien desea cultivar coca o invertir en otras actividades productivas. Algunas veces sirven también de intermediarios en la movilización y suministro de percusores químicos para el procesamiento de coca. Con frecuencia destacados integrantes de estos grupos son alcaldes o concejales de sus municipios.

Es importante destacar que estos grupos han forjado cierta mentalidad empresarial que les ha permitido sortear con relativo éxito las crisis relacionadas con la quiebra de la gran agricultura comercial, la caída de los precios de la base de coca, los hechos de violencia, la inestabilidad política local y el enfrentamiento armado; fenómenos que han ocurrido con especial intensidad durante los últimos cinco años. Hoy en día, para ellos resulta fundamental la presencia institucional del Estado en aspectos básicos como justicia y seguridad (presencia de ejército, policía, fiscalía); la inversión pública en la construcción

---

<sup>108</sup> TILLY, Charles. Modelos y realidades de la acción colectiva popular EN: AGUILAR, Fernando. Intereses individuales y acción colectiva. Madrid: editorial Iglesias 2000. p. 164

de vías, puentes y aeropuertos<sup>109</sup> y el apoyo crediticio de la banca formal. Así mismo, desean obtener facilidades para adquirir bienes de capital (equipos, maquinaria, etc.) y recibir asesoría técnica especializada para decidirse a abordar proyectos de desarrollo que los inserten en cadenas productivas industriales.

Durante años los comerciantes y los transportadores fueron víctimas del cobro de “cuotas” en dinero o en especie (ropa, medicinas, alimentos, etc.) y de retenciones ilegales por parte de la guerrilla. Esta situación los llevó a apoyar la instalación de bases militares y puestos de policía en la mayor parte del Sur de Bolívar y fueron actores claves en las movilizaciones de protesta, entre los años 1999 y 2001, cuando el Gobierno Nacional intentó llevar a cabo un proceso de negociación con el ELN en el Sur de Bolívar. Nuevamente, en estos hechos, algunos comerciantes y políticos de San Pablo y Santa Rosa jugaron un papel protagónico como líderes o representantes de los sectores sociales, reunidos en ASOCIPAZ, que en el ámbito regional se oponían a la creación de una zona desmilitarizada para concentrar al ELN durante nueve meses.

Estos sectores se han visto afectados por las políticas de erradicación forzosa de cultivos ilícitos dado que tienen sus capitales en préstamo a los productores de coca<sup>110</sup> y porque, en su condición de distribuidores intermediarios, compran y venden productos lícitos que pueden ser utilizados como precursores en la elaboración de pasta de coca. De otra parte, estos mismos “empresarios” dependen de los grandes distribuidores de mercancías con sede en Barranquilla o Bucaramanga y enfrentan limitaciones de crédito y altas tasas de interés para obtener los artículos que luego transportan a los municipios del Sur de Bolívar.

El control paramilitar sobre la región implicó cobros de cuotas “asfixiantes” a los comerciantes que unidas a las crisis por fumigaciones o control de las autoridades, los ubicó en un escenario en el cual, aquellos a los que ellos mismos apoyaron en su llegada para acabar con los males de la guerrilla, se volvieron en poco tiempo sus mismos

---

<sup>109</sup> Más que aeropuertos son pistas de aterrizaje que existen en Santa Rosa y Simití.

<sup>110</sup> Este es el gran temor de los comerciantes frente a las fumigaciones y tienen ya un precedente con lo ocurrido en 2001, cuando el Gobierno ordenó las primeras fumigaciones con glifosato en sur Bolívar. Con frecuencia los préstamos que hacen estos comerciantes a los campesinos sembradores de coca consisten en abastecimiento de comida e insumos agrícolas y en adelantos en efectivo para el pago de jornales; en ocasiones prestan también para el arriendo de la tierra.

verdugos. Indudablemente algunos de los principales comerciantes sostenían relaciones de cercanía con los comandantes paramilitares de la zona y no estaban dispuestos a que acciones como las cometidas contra Fidel Peña se repitieran en el futuro contra cualquiera de ellos, por lo que asumieron como principales promotores de la acción colectiva de marzo en San Pablo. En este propósito, el apoyo de los comerciantes y transportadores de Santa Rosa fue fundamental quienes dispusieron de recursos y logística pero sobre todo, del acumulado de resistencia contra guerrilla y paramilitares que han tenido en los últimos años.

Otro grupo importante en la acción colectiva es el constituido por la incipiente clase política local. La gran fragmentación producida por la crisis de legitimidad y representatividad que se da en la mayor parte del país, muestra en el Sur de Bolívar que el ejercicio de la política está marcado no solo por la ya señalada influencia de los actores armados, sino por la constante pretensión de sacar a los gobernantes de turno para lograr por la vía legal que representantes de otros pequeños grupos asuman el poder. Aun cuando la mayor parte de la clase política sostiene relaciones de cercanía con las AUC en el ámbito privado, a nivel público sigue siendo una “arma política” señalar al otro como interlocutor con el actor armado. En el escenario de la acción colectiva por el asesinato del comerciante de San Pablo, varios políticos locales contradictorios del alcalde, quisieron sacar provecho de la situación. No es gratuito que una de las acciones más impactantes fue que la “turba” llegó hasta la casa del alcalde y lo sacó literalmente de “debajo de la cama” para que públicamente anunciara su renuncia al cargo.

Los familiares de las personas asesinadas y los pobladores en general de San Pablo constituyeron el grueso de las personas que marcharon. Se señala que principalmente ellos fueron los que arremetieron directamente contra la fuerza pública y las instalaciones de la Alcaldía, la policía y las propiedades de los paramilitares. El dolor y la furia contenida por años encontraron la forma de ser expresada. La participación masiva permitió no solo denunciar al autor material de tantos asesinatos, sino de manifestar la permisividad y en ocasiones alianza de las autoridades civiles y militares con el actor armado ilegal. Tal como sucedió en Santa Rosa años atrás, se trataba no solo de protestar sino de mostrar que es posible desde la población civil no armada también

imponer condiciones a aquellos que han suplantado al estado en el ejercicio legítimo de la fuerza y la justicia.

*c. Modelos estáticos*

En general, los modelos estudian la agregación de preferencias individuales y no tienen en cuenta las preferencias que los individuos ya tienen. Adicionalmente, hay un gran esfuerzo en determinar cuáles son las normas, los motivos y las preferencias y suponen que no se necesita hacer nada más para explicar la conducta colectiva. Por el contrario, los análisis que se centran en la determinación de las preferencias no pueden dar explicación cabal de un fenómeno.

Así, en el caso ideal sería útil crear modelos que tomaran como punto de partida la estructura de las relaciones sociales que caracteriza a un conjunto de actores, que catalogaran los medios de acción abierta a los individuos y a los grupos, que tuvieran en cuenta la creación de nuevos vínculos sociales y que se centraran en la acción estratégica, por lo cual se requieren modelos no solo de acción racional, sino también de interacción racional.

*d. Énfasis en los modelos causales más que en los modelos intencionales*

Para ampliar lo dicho atrás, los modelos de acción racional generalmente presuponen un conjunto fijo de actores con una cantidad específica y un tipo de información sobre las identidades, las acciones y los intereses de los otros. Requieren especificaciones de:

- ⇒ los actores,
- ⇒ sus intereses,
- ⇒ las reglas de decisión adoptadas por cada actor,
- ⇒ los valores actuales de los elementos de esas reglas de decisión,
- ⇒ los costos probables de las distintas secuencias de acción disponibles a cada actor,
- ⇒ los beneficios probables de cada una de esas secuencias y
- ⇒ la capacidad de cada actor para soportar los costos de cada secuencia,

De esta forma se explica la participación de un solo actor en un movimiento social como la función de una elección entre múltiples alternativas cuya atracción relativa depende de un producto:

$$(\text{beneficios esperados} - \text{costos esperados}) \times (\text{capacidad para actuar})$$

Allí, un solo actor puede consistir en un individuo o en un conjunto completo de individuos. Para convertir este modelo de acción racional en un modelo de interacción racional se necesita que para cada actor los beneficios y costos esperados, dependan de las acciones de otros actores y se establezca comunicación entre los actores

En el curso de una interacción ambas partes tienen poderosas razones para evitar la cooperación y perseguir sus intereses individuales sin tener en cuenta los intereses del otro. Sin embargo, si las partes entran en una interacción frecuente la situación cambia y es probable que los pequeños grupos y los grupos que tienen acceso a incentivos selectivos formen "coaliciones distributivas".

De allí que investigaciones puedan afirmar que "la certeza y la continuidad de las relaciones sociales facilitan la formación de coaliciones estables que sirven a los intereses mutuos tanto de actores que persiguen sus intereses particulares como de las coaliciones globales que sirven al interés general"<sup>111</sup>.

La reflexión sobre la interacción racional añade nuevos elementos a los modelos constructivos. Primero, los vínculos sociales entre antagonistas pasan a convertirse en un lugar de comunicación y negociación más o menos continua que sigue una lógica estratégica cuyas consecuencias seguramente transforman la estructura y el contenido de sus lazos. Por ejemplo, en el caso de un modelo dinámico de la acción colectiva en San Pablo que se ha venido analizando, habría que tener en cuenta al menos las negociaciones que tuvieran lugar entre estas partes:

- => comerciantes/políticos locales (concejales y pre-candidatos a la alcaldía)
- => comerciantes/líderes de las juntas de acción comunal
- => políticos locales/líderes de las juntas de acción comunal
- => políticos locales/familiares de las víctimas
- => comerciantes/familiares de las víctimas

=> familiares de las víctimas/líderes de Juntas de acción comunal

Por ello, el análisis de la acción colectiva en el caso de San Pablo demuestra que ésta no es una estructura monolítica que responda a una única explicación causal e intencional, como tampoco a un único impulso de un actor determinado. Por el contrario El modelo de interpretación de la acción colectiva es una excelente posibilidad de comprender los diversos intereses, fracturas y dinámicas que se dan al interior de este tipo de movimiento, representativo del mismo esquema poligonal de la guerra que se presentó en el capítulo anterior con el estudio de la confrontación armada en Cundinamarca.

En consecuencia, en las áreas de conflicto de nuestro país, donde los actores armados ejercen control sobre todos los aspectos de la vida política, económica y social de las poblaciones, las lógicas y procederes de uno y otro actor se entrecruzan y obligan a la población civil a establecer estrategias de mimetización. En este contexto, las acciones colectivas resultan especialmente importantes para el análisis del conflicto en general, en la medida en que las marchas y manifestaciones a favor de la paz y en rechazo de las acciones de los violentos, encarnan temores y sentimientos contenidos por años y muestran toda su potencialidad para que la población civil en sus diversas matrices, deje de ser presentada simplemente como víctima y espectador pasivo de la barbarie de la guerra.

---

<sup>111</sup> TILLY: Charles Op. cit. P. 172 Citando los trabajos de Axelrod y Olson.

## CONCLUSIONES

Cuando el Estado abandona un territorio a la suerte de sus habitantes o simplemente nunca se hace presente, los pobladores no tienen un referente ético ni legal frente al poder político. Tampoco lo tienen frente a los grupos armados que ejercen justicia. En estas zonas se constata una actitud pragmática, utilitarista de los individuos frente al poder de turno, a partir de lo cual están dispuestos a cumplir órdenes para evitar las consecuencias de la sanción o incluso la muerte. Cuando la zona está en disputa como ha ocurrido en los últimos años en el Magdalena Medio las personas obedecen y se benefician de la imposición de cierto orden, pero son conscientes del carácter transitorio de la normatividad vigente. Esta actitud pragmática se acentúa en la medida en que aumenta la dispersión de grupos y se desvanece el elemento ideológico de la confrontación.

A las causas estructurales de la violencia relacionadas con la exclusión política, debilidad de la presencia estatal, nulo acceso a la tierra y marginalidad se suman las estrategias de guerra de los actores que se relaciona directamente con la forma en que se relacionan con el territorio y los pobladores. Esto ha contribuido a marcar y diferenciar territorios y pobladores, a reforzar el sentido común de la guerra. El que no está conmigo está contra mí; esto fortalece los sentidos de diferencia e indiferencia. Pero, esta posible identidad de los pobladores comunes con los grupos armados no tiene propiamente un sentido político, ni significa un acuerdo explícito en torno a un proyecto de Estado. Los espacios dejados por el desarrollo selectivo del Estado propician estas territorialidades bélicas, donde se presentan unos verdaderos órdenes alternativos de hecho con pretensiones soberanas, pues la dominación durante períodos prolongados incide en el empoderamiento de los grupos en la zona, en el acoplamiento al tipo de autoridad y en el manejo del equilibrio de fuerzas y poderes. La población civil es un actor dentro del conflicto, no solo es botín de guerra y víctima. Ante los nuevos órdenes impuestos, termina por convicción o por fuerza apoyando a uno u otro actor y no en pocas ocasiones grupos de pobladores, especialmente transportadores, comerciantes y clase política terminan por beneficiarse de la situación de guerra por la preeminencia de un actor que brinda seguridad, la cual una vez es amenazada influye también en la adhesión gire en torno al nuevo “soberano”.

Es evidente que en las acciones violentas cotidianas locales y regionales no sólo se expresan las grandes contradicciones de la lucha nacional, allí juegan otros factores, relacionados más con la historia de esa misma región, las formas de colonización, los conflictos no resueltos entre pobladores del mismo territorio. La guerra es un buen camuflaje para solucionar con ayuda de un actor armado desavenencias históricas de tipo local, debido al carácter de ilegalidad que representan los actores en contienda y al manto de impunidad que sobre sus acciones se extiende. Esta es una de las razones por las cuales los estudios regionales sobre la violencia contribuyen significativamente a develar esas particularidades que evitan que los análisis se sigan haciendo con el mismo lente para todo el país.

Una de las explicaciones de la espiral de violencia en zonas de conflicto y colonización como el Magdalena Medio es el hecho de la pérdida de la capacidad reguladora del Estado y la consecuente disminución de la oferta estatal de justicia, todo ello en beneficio de espacios y relaciones sociales dominados por micro-poderes armados que imponen sus propios sistemas de justicia que tienen como características: ser bélica, obediencia pero no aceptación de las normas impuestas por parte de los usuarios de ella, un ámbito territorial inestable, y el abandono de la aplicación de esta justicia por mecanismos de terror al momento que se recrudece la guerra.

La guerrilla y los paramilitares operan y obtiene su poder en la frontera que existe entre la ausencia de un poder legítimo que tome decisiones en nombre del pueblo y la necesidad de un orden que imponga cierta paz social. Esta situación de frontera propicia una justicia efímera que va al vaivén de la lucha armada y las exigencias de la guerra. En el Magdalena Medio la presencia de la guerrilla fue sustituida en buena parte del territorio por los paramilitares con el mismo grado de eficacia y sin mayor resistencia por parte de los pobladores debido a su estrategia militar de masacres iniciales y muertes y desapariciones selectivas después, debido al repliegue de la guerrilla, el apoyo de algunos sectores dominantes de la población y la complacencia en muchos casos de las autoridades locales.

Desde comienzo de los ochenta se asiste en la región a un fenómeno de dispersión y crecimiento de los grupos armados a la vez que decreció el interés por la confrontación

política y la discusión ideológica. La defensa de los intereses económicos relacionados especialmente con actividades ilícitas, de posiciones territoriales y de intereses locales y regionales juega un papel central en la guerra y tienden a ser los móviles de su reproducción y prolongación.

La interacción racional es un modelo teórico que tiene gran posibilidad de explicación de las acciones colectivas en ambientes tan polarizados y de conflicto armado como el colombiano, ya que no sólo se concentra en las acciones de los actores que tienen las armas, sino que da importancia a las inter-relaciones a su interior y entre éstos y las diferentes esferas de la sociedad y las instancias de gobierno. La concepción de red es ideal para representar el cúmulo de relaciones que se entretajan entre todos ellos.

La articulación de prácticas sociales y de estrategias colectivas por parte de las poblaciones para resistir a la guerra o a los intentos de los actores por alinearlos a un bando, son cada vez más difíciles porque el desmonte de las redes sociales, el ataque a los lazos de solidaridad, el despliegue de estrategias de terror son las primeras acciones de los grupos armados a su llegada. Pareciera que las manifestaciones de acciones colectivas se dan en el caso del Magdalena Medio únicamente en zonas donde el cansancio por el dominio y los excesos cometidos por el actor armado es el detonante como en los casos recientes de Santa Rosa del Sur, el cual es posible explicar indagando en la historia de la colonización y las bases culturales de familiaridad y compadrazgo que se constituyen en los pilares de la acción colectiva tanto contra la guerrilla como contra los paramilitares. El caso de San Pablo que se detalla en la monografía es interesante porque sin tener antecedentes de organización social y política relevantes en el pasado, en él se pueden rastrear las formas primigenias de organización que desde la población civil permitan hacer resistencia a la guerra y frenar los excesos, primeros pasos para la concreción de apuestas colectivas de futuro.

## BIBLIOGRAFIA

ALONSO, Manuel Alberto: Conflicto armado y configuración regional. El caso del Magdalena Medio. Medellín: U. de Antioquia.

ARRIETA, Carlos y otros. Narcotráfico en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo, 1995.

BLANQUER, Jean Michel y GROS, Christian. Las dos Colombias. Bogotá: Norma, 2002.

BOLETÍN OPI (Observatorio de Paz Integral) del Magdalena Medio, mayo de 2005 (www.opi.org.co)

CADAVID BRINGE, Amparo. Caracterización social PDPMM, 1996.

COLLIER, Paul. Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de políticas. Bogotá. Revista El Malpensante. No. 30. mayo-junio, 2001.

COYUNTURA POLÍTICA. Revista de la Corporación Diálogo Democrático. No. 15. 1999. (Toda la revista es dedicada al tema del paramilitarismo)

DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Los cultivos ilícitos: política mundial y realidad en Colombia. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2000.

DE ROUX, Francisco. Documento central de diagnóstico, síntesis y conclusiones, PDPMM. 1996.

DE SOUSA SANTOS, Boaventura y GARCIA VILLEGAS, Mauricio. El Caleidoscopio de las justicias en Colombia. 2 Tomos. Bogotá: Conciencias, 2001.

DEAS, Malcom. Canjes Violentos: Reflexiones Sobre La Violencia Política En Colombia. En Dos Ensayos Especulativos Sobre La Violencia En Colombia. FONADE, DNP Bogotá. 1995.

DUNCAN, Gustavo. Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana en los señores de la guerra. Documento en impresión.

DNP. Conflicto armado: criminalidad, violencia y desplazamiento forzado. Bogotá. No. 3. Julio-septiembre 1999.

ELSTER, JON. Tuercas y tornillos: una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales. Madrid: Gedisa, 1993. Capítulo 3: Elección racional. P. 31-38.

FARC – EP. "Narcotráfico en América Latina y el Caribe" Ponencia Presentada por la Comisión Internacional de las FARC-EP. San José, Costa Rica: Julio 18 - 19 de 1997.

FONSECA, Daniel; GUTIERREZ, Omar y RUDQVIST, Anders. Cultivos de uso ilícito en el Sur de Bolívar: una aproximación desde la economía política. Bogotá: PNUD – ASDI, 2005.

FOUCAULT, Michael. Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones. Selección de Miguel Morey. Madrid: Alianza, 2001.

FUNPROCEP. La paz en Colombia: Aportes desde la región. Bogotá: CINEP – FUNPROCEP, 2000. (Cuarto conversatorio dedicado al tema de paramilitarismo).

GAITAN PAVIA, Pilar y MORENO OSPINA, Carlos. Poder Local: realidad y utopía de la descentralización en Colombia. IEPRI, Tercer Mundo, Bogotá, Abril 1992.

GARAY, Luis Jorge. Construcción de una nueva sociedad. Tercer Mundo Editores – Cambio. Primera Edición. Diciembre de 1999.

GARCIA CANCLINI, Nestor. Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo. 1989.

GARCIA DE LA TORRE, Clara Inés. Paradojas de los conflictos Violentos en: Legado del Saber. Revista de la Universidad de Antioquia No 6. Medellín.

GARCÍA VILEGAS, Mauricio. Derecho Constitucional y estrategia política. En: Estudios políticos. No. 1. Medellín. Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia. Enero-Junio 1992.

GARCIA, Arturo (Coordinador). Construcción de lo público en el Magdalena Medio. PNUD-PDPMM, 2000.

GEORGE, Balandier. *El poder en escenas: De La Representación Del Poder al Poder De La Representación*, Paidós. Barcelona 1994.

GILHODES, Pierre. Sistema de partidos y partidos políticos en Colombia. En Modernidad, democracia y partidos políticos. FIDEC-FESCOL, Seg. Edición, 1996.

GONZALES FERNAN, BOLIVAR INGRID, VASQUEZ TEOFILO. Violencia Política en Colombia de la Nación Fragmentada a la Construcción del Estado. Cinep: Bogotá, 2003.

GUIZADO CAMACHO, Alvaro. Credo, necesidad y codicia: los alimentos de la guerra. Cesó: Universidad de los Andes. Sin publicar.

GUZMÁN, Alvaro y otros. Las violencias: dinámicas y perspectivas. En: Revista Foro. No. 22. Noviembre de 1993.

KALYVAS, Stathis N. Esbozo de una teoría de la violencia en medio de la guerra civil. Análisis político. Bogotá: Universidad Nacional No. 42. p. 1-25.

KALYVAS, Stathis N. La Ontología de la violencia política: acción e identidad en las guerras civiles. Bogotá: Universidad Nacional. Sept/Dic 2004. P. 51-76.

LAIR, Eric. El terror, recurso estratégico de los actores armados: reflexiones en torno al conflicto colombiano. Revista Análisis Político No. 37. Bogotá. P. 60-72.

MACHADO, Absalón y BRICEÑO, Luis H. "Diagnóstico agropecuario y rural el Magdalena Medio". PDPMM, 1996.

MARTINEZ ORTIZ, Astrid. Economía, crimen y conflicto. Bogotá: Universidad Nacional, 2001.

MURILLO, Amparo y otros. Un mundo que se mueve como el río: historia regional del Magdalena Medio. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, 1994.

NORBERT , Elias. *Los Procesos De Formación Del Estado Y Construcción De La Nación*. Revista Historia y Sociedad n. 5, diciembre 1998. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 1998.

OBSERVATORIO DE LOS DD.HH Y EL D.I.H. VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Panorama de los grupos de autodefensa. Bogotá, 2000.

OBSERVATORIO PRESIDENCIAL DE DD.HH Y DIH. Dinámica reciente de la confrontación armada en Cundinamarca. Bogotá, 2004.

ORTIZ, Carlos Miguel. Actores armados, territorios y poblaciones. En: Revista Análisis Político. No. 42. 2003. p. 67-75.

PALACIOS, Marco y SAFFOR, Frank. Colombia: país fragmentado, sociedad dividida. Bogotá: Norma: 2002.

PECAUT, Daniel. "Presente, Pasado Y Futuro De La Violencia" en Análisis Político No 30, 1997.

PECAUT, Daniel. ¿Es posible aún una interpretación global de los fenómenos recientes de Violencia en Colombia?. En *Boletín Socioeconómico No. 27*, Universidad del Valle, junio de 1994.

PROGRAMA POR LA PAZ – ACNUR. Proyecto de formación y acompañamiento para la prevención y protección del desplazamiento forzado. Barrancabermeja, 2000.

RANGEL, Alfredo. "La Guerrilla en Colombia" En *Guerra Insurgente*. Editorial Intermedio. Bogotá Colombia, 2001.

REVISTA FORO No. 42. Miedo Ambiente y fumigaciones ilícitas. Bogotá: Foro por Colombia. 2001.

ROMERO MEDINA, Amanda. Magdalena Medio: luchas sociales y violaciones a los derechos humanos, 1980-1992. Bogotá: AVRE, 1994. 210 p.

SALAMANCA, Manuel Ernesto. La violencia representada: bases para la construcción de modelos dinámicos. Papel político, 2005. Bogotá: Universidad Javeriana.

SALAZAR, Doris y CASTILLO, María del Pilar. La Hora de los dinosaurios: conflicto y depredación en Colombia. Bogotá: Cidse-Cerec-Univalle, 2001.

SANTANA RODRIGUEZ, Pedro. "Elección de Alcaldes y Movimientos Cívicos", en Revista Foro, No. 6, Junio de 1988.

SEMANA. Buscar fecha artículo Sobre Santa Rosa. 2005.

SMITH, Peter. El combate a las drogas en América. México: Fondo de Cultura Económica, 1993 (introducción y capítulo IV)

TARROW, Sydney. El poder en los movimientos sociales, acción colectiva y política pública. Cambridge. 1994.

THOMPSON, Robert. Derrota de la insurgencia comunista. New Cork: Praeger, 1966.

THOUMI, Francisco y otros. Drogas ilícitas en Colombia. Bogotá: Ariel-PNUD, 1997. 700 p. (Capítulos 1, 2 y 3)

TILLY, Charles. Modelos y realidades de la acción colectiva popular En: AGUILAR, Femando. Intereses individuales y acción colectiva. Madrid: editorial Iglesias, 2000.

URIBE, María Teresa. "Las soberanías en Disputa ¿Conflicto de identidad o de derecho?". En: Memorias Del Simposio Internacional Y Cuarta Cátedra Anual De Historia. Bogotá, 1991.

URIBE, María Teresa. Las incidencias del miedo en la política: una mirada desde Hobbes. En: El miedo: reflexiones sobre su dimensión social y cultural. Medellín: Corporación Región, 1996

URIBE DE HINCAPIÉ, María Teresa. Violencia regional en Colombia. En: Debats. No. 60. Verano 1997. Instituto Valenciano de Estudios e Investigación. Valencia, 1997. p. 38-44.

VANGUARDIA LIBERAL. Periódico de circulación regional. Varias ediciones 2004 y 2005.

VARGAS VELASQUEZ Alejo, Magdalena Medio. Colonización y Conflicto Armado. Bogotá: CINEP, 1992.

## ANEXOS

### ANEXO 1.

#### CONVERSACION CON ARTEMIO MEJIA<sup>112</sup> ABRIL 5 DE 2005

##### ***Artemio, quien era el comerciante Fidel Peña e San Pablo?***

Fidel era un joven de San Pablo que iba a cumplir 40 años, nació en San Pablo y se fue haciendo en San Pablo en el mundo del comercio; comenzó administrando un comercio de víveres y era una persona muy juiciosa y eso de alguna manera hizo que finalmente terminara con su propio negocio. El tenía una particularidad que era una persona muy cercana hacia el mundo campesino, era casi el comerciante que proveía el 50 % de los víveres y granos que se llevaba a la zona rural, pero además no solo lo apreciaban como comerciante que era, sino que llevaba una manera social que le facilitaba al campesino para que pudiera trabajar, entonces él entregaba los víveres al campesino fiado y la gente le pagaba luego después de la cosecha de la raspa de coca. Hubo una relación de servicio fuerte con la gente de la zona rural y también con mucha gente de la cabecera municipal eso de alguna manera hizo que llegara a tener un nivel de reconocimiento más que reconocimiento aprecio de alguna manera de la gente de San Pablo.

Además era una persona que últimamente se estaba metiendo mucho con la organización de los comerciantes, también en la vida política y era una persona que estaba cogiendo una incidencia a nivel municipal, pero ante todo una persona que quería mucho a San Pablo y quería a su gente finalmente.

##### **Que es lo que hace posible que tras el asesinato de Fidel que hacen los paramilitares, en San Pablo corra un movimiento distinto a los que habían ocurrido anteriormente, siendo que los paramilitares están asentados en el pueblo y habían asesinado ya a muchos habitantes de la zona urbana?**

Aquí se conjugan varias cosas, uno, Fidel es asesinado y luego precisamente después que hay una serie de hechos anteriores que van convocando una especie de rabia y sentimiento muy grande en la comunidad y que se fue acumulando e instalando en la gente. El asesinato de Fidel constituye el abuso intimo de los paramilitares contra la violación de derechos humanos, la gente allí termina sacando ese dolor que tenía durante mucho tiempo de abuso y dado el perfil que tenía Fidel en el municipio, provoca una reacción de la comunidad.

Siento que fue una reacción espontánea por un lado pero al mismo tiempo extraña por otro, pero no podríamos hablar de un movimiento como tal sino que hay una reacción legítima de rabia por dolor, pero también una reacción de manifestación de rechazo de un control que ha habido en el municipio durante los últimos cinco años; control ahogante y un control sobre prácticamente todas las acciones de la gente de la comunidad que encontró ahí la manera colectiva de expresarse frente a ese control permanente y ahogante que hacen los paramilitares en la zona.

Además eso tiene unas expresiones no solamente de pobladores comunes si no que tiene una expresión de líderes políticos, de líderes comunitarios, de personas de familiares víctimas de los

---

<sup>112</sup> Artemio Mejía es uno de los líderes más reconocidos del Sur de Bolívar. Ha liderado procesos con la Pastoral Social y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. También ha participado en el pasado en el debate electoral y sigue siendo líder candidatizado a ocupar la alcaldía del municipio.

paramilitares y tiene expresión de alguna manera de pobladores del municipio de Santa Rosa; sin embargo se resalta que la principal intervención es de la comunidad de San Pablo porque la gente de Santa Rosa llega al día siguiente, porque el primer día ya se había dado una primera manifestación una primera marcha que no contempló los hechos violentos del día siguiente pero si contempló un recorrido de rechazos con arengas y con frases de rechazo muy fuerte frente a la institucionalidad pública, lo cual no es normal. Hay una marcha el 8 y hay otra el 9 que termina con una serie de manifestaciones con hecho de violencia en el municipio.

**Como usted dice fue una organización espontánea, pero cuál es la organización mínima que tuvo, que implicó la vinculación de tantos pobladores y que aunque se organizó como pacífica terminó arremetiendo violentamente contra la estación de policía y contra los sitios donde estaban los paramilitares?**

Hay dos cosas, hay una marcha espontánea en la cual si se identifica que habían unas personas que coordinaban y lideran el proceso, ellos lograron canalizar el sentimiento común de la gente, que lo que hizo fue que la gente se fuera pegando, es decir a media que la manifestación avanzaba, la gente iba saliendo, iba apareciendo; la marcha el primer día comenzarían unas 200 personas desde donde estaba el féretro y al regresar nuevamente al sitio del féretro ya habían unas 1500 personas y precisamente estaba lidera por 4 o 5 personas que hacían el llamado y hacían de alguna manera el rechazo. Yo creo que estos líderes surgieron en el momento, muchos de ellos eran como líderes si de San Pablo, pero no eran conocidos con antecedentes de ese tipo de movilización, creo que con eso se presentó una reacción muy fuerte de los líderes y especialmente de los familiares de las víctimas de los paramilitares.

**A que sector pertenecen los manifestantes: son familiares de las víctimas, son del gremios de comerciantes, son de la clase política local?**

Ahí hay varias cosas, uno hay una presencia importante de familiares de víctimas, sin embargo la coordinación de la animación estuvo más en el termino político del rechazo que estuvo mas mediada por algunos líderes políticos y algunos comerciantes, fueron lo más influyentes en la manifestación; sin embargo, la acción violenta sí estuvo mucho más influenciada por familiares de las víctimas, fueron los protagonistas de esos hechos. Pero además el tema de que se hiciera contra la Alcaldía, contra la policía obedecía también a que allí se conjugaran una serie de elementos de permisibilidad, igualmente de manejo político con la situación con las Autodefensas, que se creyó digamos que había que hacer una acción contra, no solamente con quién hace la acción sino también contra quien de alguna manera no cumple con su papel de autoridad constituida y termina patrocinando acciones que no deben ser, por eso, entiendo las reacciones que hacen muy fuertes contra la policía, además porque era que la acción de la policía era muy clara, era muy evidente con su relación con los paramilitares y ante todo el hecho de que la administración hubiera mantenido un silencio enorme, que no apareciera por ningún lado.

Además en el caso de la Alcaldía las acciones demostraban que había unas situaciones de manejo administrativo muy fuertes, muy grandes, es decir, en el manejo de corrupción y ese tipo de cosas; por eso, el hecho se aprovecha también no solamente para una manifestación contra los paramilitares sino también contra para las acciones administrativas y efectividad de las autoridades y de la fuerza pública.

**Conversemos sobre los hechos violentos al final de la marcha. Uno puede decir que surgieron en el transcurso de la marcha o es previsible pensar, que la organización dentro de sus objetivos tenía el de arremeter contra el cuartel, contra los sitios donde estaban los paramilitares? Si fuera así es evidente que se necesitaba preparación. Es posible determinar eso o los hechos en realidad surgieron como parte del recorrido que hace la marcha?**

Pues lo particular creo que si es más fruto del recorrido de la marcha, si se había pensado que era necesario pasar por los sitios donde hacían presencia permanente, incluso por la institucionalidad, como acto también simbólico más significativo y más fuerte de rechazo; no estaba contemplado la posibilidad de quemar y ese tipo de cosas, sin embargo, surgió durante el proceso de la marcha. Sin embargo, había algunas indicaciones en el sentido que era necesario ser evidentes manifestarse en los sitios de ellos y ante las autoridades.

Los hechos terminaron ahí con el entierro de Fidel, posteriormente se da cierto silencio tanto de las Autodefensas como de la misma Institucionalidad, uno diría como un silencio, que acepta lo que pasó, a pesar que hace algunas acciones, uno siente que es un silencio que reconoce el hecho, podría entender mucho de lo que sucede, y entiendo lo que hacen es producirnos unos efectos internos. A partir de entonces por ejemplo comienzan a pedir disculpas los paramilitares, en algunos momentos pidieron disculpas por la actuación de sus hombres en San Pablo, digamos públicas no en la medida que se hubiera hecho una reunión, sino mediante el envío de mensajes indirectos.

La fuerza pública también asumió lo propio, hubo una reunión donde estuvo el Director de la policía del Magdalena Medio y acepta averiguar, investigar las denuncias y se produjo el cambio total de la policía en San Pablo y de alguna manera el asunto de la acción puntual termina digamos como el hecho que Fidel es enterrado con participación de casi todo San Pablo.

Sin embargo, la acción sí produce un efecto movilizador en San Pablo muy fuerte, efecto movilizador que lo vemos ahora por ejemplo con esta nueva administración, lo vemos ahora en no permitir acciones o decisiones a veces de autoridad legal cuando se consideran, afectan los intereses del pueblo; por ejemplo, frente al nombramiento del director del Hospital actual, la administración pasada intentó mantener el director anterior pero como se consideraba que el Hospital había caído en unas acciones de corrupción muy fuerte y de origen político, hicieron todo el montaje para que el nombramiento se hiciera antes que Cristóbal asumiera la Administración y el proceso, que incluía la Gobernación de Bolívar mandó luego un listado de personas que habían cumplido el perfil y allí aparecía el director anterior. Llegó el momento de la decisión en San Pablo y cuando se supo que el Gerente anterior iba a ser ratificado del hubo una avalancha de gente al parque para no permitir el nombramiento del anterior director del Hospital y sólo una vez se cambió el decreto se retiraron del parque.

Este tipo de acciones ya se están utilizando como una manera comunitaria digamos de hacer presión, que no necesariamente está en el hecho que sean los mismos líderes los que promuevan, no necesariamente, hay una cosa y es que son los líderes de las Juntas Comunales los que se han movilizado; ahorita hay un cambio en sentido, en que lo político lo abordan mucho los líderes de las Juntas Comunales, ellos tienen más una acción política que dice uno que es el resultado de las cosas que quedaron ahí en el ambiente, no podemos decir que hay movimientos, pero sí hay unas acciones de expresión contra decisiones que se considera deben ser ampliamente discutidas.

**Y en el caso de los paramilitares que era uno de los actores contra los cuales se protestaba por la muerte de Fidel qué ha sucedido de ese tiempo acá, que uno pueda decir qué tiene que ver con la acción ocurrida en esos días?**

Quizás el cambio haya obedecido a ciertos cambios también en algunas acciones o en la moderación de ciertas acciones con la gente del pueblo, ya no se siente esa acción tan ahogante de los paramilitares en todo, anteriormente querían estar en todas las decisiones de la Junta, en reuniones, en la acción incluso del patrulleo; hoy es un poco distinto y eso ha hecho por ejemplo que especialmente las J.A.C. mantengan un importante nivel de decisiones en algunas cosas políticas.

## ANEXO 2.

### EL CIRCUITO DE LA COCA EN EL SUR DE BOLÍVAR<sup>113</sup>

- Una de las características más interesantes del mercado de la coca a nivel local y regional es su alto nivel de organización, ya que es un mercado que opera a partir de acuerdos y pactos sobre precios y mercados, que aunque no se encuentren escritos, tengan muchos agentes anónimos y se manejen volúmenes de dinero en efectivo todos cumplen lo acordado. Estos acuerdos, se ven favorecidos en gran medida por la capacidad de coacción de los actores armados que controlan el negocio.
- La economía cocalera permea y subordina gradualmente la economía regional lícita, sobre todo el sector comercial; siendo un punto de articulación clave la provisión de precursores químicos (encadenamientos hacia atrás que dejan excedentes en la región). En contraste, el encadenamiento hacia delante (venta y comercialización de base de coca), se encuentra controlado por un duopsonio de actores armados que mantiene los precios de la base de coca congelados y transfiere la mayor parte del excedente fuera de la región. La comercialización tanto de la base de coca, como la transformación en cocaína y su distribución, generan excedentes fuera de la región sin retorno de ninguna clase a esta, que promueva desarrollo. Los retornos de capital sirven fundamentalmente para reproducir y ampliar tanto el circuito de la coca, como el conflicto armado.
- La unidad productiva familiar o campesina, se ve profundamente afectada al ingresar en el circuito de la coca, dado que la transformación de la materia prima para plantar, cosechar y transformarla, requieren de la adopción de tecnologías exógenas que generan valor agregado en finca e introducen relaciones de producción capitalistas (mayor demanda de trabajo asalariado que familiar, mayor pago por trabajo asalariado, pérdida de la capacidad de producir para el autoconsumo, etc.).
- Existe una muy definida división social del trabajo en torno a la producción, transformación y comercialización de la coca. Los campesinos y colonos están relegados a la función de ser productores de hoja de coca y base de coca en pequeña y mediana escala, siendo nada o poco participes en la estructura del mercado, quedando como cultivadores y procesadores primarios.
- Tal como sucede en otros casos de economía de enclave o bonanza, parte del dinero se dedica a gastos suntuarios. Esto puede tener repercusiones negativas en la salud y en el nivel educativo de los jóvenes.
- La producción cocalera es intensiva en mano de obra estacional (ciclos de cosecha de hoja entre 45 y 90 días). Permite una explotación de la flexibilidad de la fuerza de trabajo familiar campesina, pero a la vez requiere contratar mano de obra con pago a jornal; lo cual implica una penetración de la economía de mercado en las relaciones de producción campesinas.
- Existe una gran cantidad de mano de obra ambulante en la región que se dedica a la recolección de hoja de coca y que representa en algunos municipios, como San Pablo, más del 22% de la población total. Estas personas combinan temporalmente la recolección de hoja con otras actividades productivas como son: la siembra de coca en tierra arrendada, procesamiento

---

<sup>113</sup> Tomado del estudio de PNUD y ASDI. Cultivos de uso ilícito en el Sur de Bolívar. Bogotá, 1995. P. 95-99

de base de coca, la prestación de servicios y la realización de oficios varios (albañilería, ventas ambulantes, etc.).

- Al parecer, buena parte de las personas vinculadas con la siembra y el procesamiento de la coca, provienen del sur del país. Estas migraciones de población responden principalmente al recrudecimiento de la violencia y “control” de los cultivos ilícitos en esa región, que hacen del Sur de Bolívar una zona atractiva para reproducir el “modelo cocalero” en esta parte del país. Es importante anotar, que simultáneo a la migración de personas, se realiza transferencia de tecnología, introducción de nuevas variedades (respecto a las existentes en el Sur de Bolívar), y por tanto facilita la sofisticación y mayor rendimiento en la obtención del producto intermedio (pasta) que es donde mayor valor agregado adquieren los campesinos. Cabría suponer, que estas migraciones implican de igual forma, el establecimiento de nuevos actores en el ciclo de la coca en el Sur de Bolívar, la inyección de nuevos recursos a todo nivel, pero a la vez una mayor fragilidad de los cocaleros “artesanales” de la región.
- Es importante mencionar, que los grupos armados ejercen control tanto sobre productos lícitos como ilícitos en el mismo punto del circuito económico local, el transporte. Es en este punto donde se imponen los tributos, afectando indirectamente al productor en la parcela. En este punto, no existe claridad sobre la participación de las “autoridades” y su papel en la “repartición” de algún porcentaje de los impuestos. Un poco diferente es la situación en la producción de la pasta de coca, ya que los grupos armados sí tienen cierta capacidad de ingerencia en la cuantificación del “gramaje” producido directamente en las cocinas, en donde se negocia un primer impuesto a la transformación que es reforzado con el impuesto en la fase de transporte. Si bien no se ejerce presión directa sobre el campesino (en la parcela), la afectación y encarecimiento de costos sí afecta de manera general el excedente. Este fenómeno ha provocado que algunos campesinos rompan el círculo de dependencia frente a los intermediarios. Deciden entonces, asumir riesgos y ellos mismos transportar y negociar la pasta con intermediarios fuera de la región (p.e. Aguachica), con el fin de mejorar el margen de ganancia.

*“Lo que sucede es por la cuestión de los grupos armados en esta área se han ido incrementando los grupos armados tales como el ELN, FARC y RP, que van detrás de un impuesto a la coca, pero porque también ellos se pegan de eso, porque es la única rentabilidad que les puede dar a ellos, entonces nosotros como campesinos porque sabiendo que ellos son armados pues nosotros si ellos nos exigen debemos de aunque nosotros no queramos, nos toca pagarlo porque ellos tienen el arma [...]. Oye perdóname, pero hay que contar lo mismo con las autodefensas porque ellos también hacen presencia en el cultivo[...].”<sup>114</sup>*

- El control que ejerce la guerrilla se reduce a un tributo o gramaje de la producción en hoja y pasta, mientras que las AUC controlan los circuitos de mayor agregado de valor, la cristalización y el comercio. El control que han conseguido estos últimos sobre las zonas más pobladas, es parte de una estrategia de guerra que tiende al debilitamiento del poder en manos de las FARC.
- La producción de coca genera dinero circulante en ciclos que pueden oscilar entre 45 y 120 días (raspas), pero que en promedio tienen una duración de 90 días. La duración de los ciclos depende entre otros de factores climáticos, biológicos, agrológicos. En este sentido, es

---

<sup>114</sup> Testimonios de habitantes de Micoahumado (Morales)

importante mencionar que la duración de los ciclos depende de la variedad de coca utilizada. En el caso de la Pajarita, las raspas se realizan cada 90 días, en época de invierno y en época de verano cada 70, aunque las raspas se “forzan” dependiendo de las condiciones del mercado. La variedad *Cuarentana*, al momento de realizar el estudio no estaba muy extendida en el Sur de Bolívar, confinándose principalmente en partes bajas como Gamarra, aunque se reportó por parte de campesinos, en las partes altas de Santa Rosa y Morales. Para esta variedad los ciclos de raspa son más cortos, limitándose a períodos de 40 días, que compensa una más baja productividad respecto de la *Pajarita*. La productividad de la *Cuarentana* está cercana a un kilo de pasta de coca por 40 arrobas de hoja; mientras que, la *Pajarita* requiere para producir un kilo de pasta por 50 arrobas de hoja.

- En el procesamiento de la hoja de coca es notable la participación que dentro de la estructura de costos tienen los insumos químicos y, particularmente la gasolina. Del total de costos que demanda el procesamiento, la compra de insumos y gasolina absorbe cerca del 50%.
- Aunque el cultivo de la coca en sus primeros años es intensivo en el empleo de agroquímicos, a medida que la plantación se va consolidando tiende a ser un cultivo más intensivo en mano de obra en razón de que se incrementan los volúmenes de hoja cosechada. A medida que incrementa la cantidad de hoja cosechada, se elevan los costos que exige el procesamiento de la materia prima. Pese a presentarse un incremento general en todos los costos, éste es mucho más evidente en el renglón de los insumos químicos que en la mano de obra.
- Los campesinos y colonos a través de esta actividad productiva buscan mayores excedentes económicos, con el propósito de hacer el tránsito hacia la ganadería, como estrategia para acceder a un mejor nivel de vida. En este sentido es posible afirmar que al menos una pequeña parte de este ejercicio económico, que produce inmensos dividendos a los demás participantes de la cadena económica, se queda en la región a través del mejoramiento de las fincas y del hato ganadero y en algunos procesos de agricultura comercial, contribuyendo en el proceso de recomposición campesina que es lo único que se le puede abonar a esta economía.
- Pese a los supuestos beneficios que el agricultor o colono obtiene al “participar” en el negocio de la coca, no le es posible ampliar fácilmente la extensión de los cultivos, de tal forma, que cultiva las cantidades sobre las cuales puede ejercer control, a expensas además de utilizar al máximo la mano de obra familiar. De esta manera, el aumento de sus utilidades se corresponde con la autoexplotación de su mano de obra y la de su familia.
- No se tiene conocimiento de la existencia de cristalizaderos en la zona de estudio, en cambio se han descubierto en otras zonas del Magdalena Medio (San Rafael de Lebrija, Cimitarra), lo que hace pensar que la agregación de mayor valor en el circuito de la coca no se realiza en el Sur de Bolívar. Según la Dirección de Estupeficientes, el precio de la cocaína tiende a incrementarse, afectando de igual manera el precio de compra de los precursores químicos empleados en la producción de la pasta; sin embargo, ésta ha mostrado una propensión contraria en términos reales, ocasionando un menor margen de ganancia para los cultivadores de coca que han perdido de esta forma la capacidad de apropiarse del valor agregado.
- La expansión de la superficie dedicada al cultivo de la coca, puede verse de alguna manera afectada por el carácter “irregular” de los campesinos frente a la tenencia de la tierra. Campesinos, sin posibilidad de ser propietarios, con opción favorable hacia un estado permanente de colonización, que “garantiza” a su vez, la movilidad de los cultivos de coca (Tabla 7). Respecto a la tenencia de la tierra y su utilización en el circuito de la coca, las

formas más comunes bajo las cuales se desarrolla el cultivo en el Sur de Bolívar, responden más a la propiedad del cultivo que a la propiedad de la tierra. Algunas de estas formas son: productores que cultivan en sus propios terrenos; arrendatarios de parcelas, dentro de fincas y formas asociadas (amedieros, a la quinta, etc.). Sin importar la forma, los tratos se hacen con base a la producción. Es importante resaltar que el cultivo de coca es altamente itinerante, entre otras razones, por un casi inexistente nivel de legalización de la propiedad de la tierra y, por tratarse de un cultivo ilícito, que se “fuga” y avanza a medida que las amenazas son mayores por parte no solo de las políticas del gobierno, sino además por la presión que ejercen los grupos armados.

- Una actividad que ha tomado importancia tanto frente a la amenaza de las fumigaciones como a la necesidad de renovar algunos cultivos antiguos, es el desarrollo de semilleros. La producción de semilla se realiza vía vegetativa, mediante técnicas de producción de esquejes y enraizado directamente sobre el suelo, en áreas acondicionadas para tal fin. El precio promedio de venta por plántula es de \$50. Tanto el establecimiento como el mantenimiento de los semilleros requiere de algún grado de especialización y hace suponer aprendizajes y transferencias artesanales de tecnología provenientes de otros lugares del país.

## MAPAS